

Legislaciones Ambiental Cubana
Relacionada con el Manejo
Sostenible de Tierra

II

Decretos-Leyes



Legislaciones Ambiental Cubana Relacionada con el Manejo Sostenible de la Tierra

II Decretos Leyes

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)

© Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental (CIGEA)

ISBN: 978-959-287-014-7

ISBN: 978-959-287-016-1

Compiladoras: M.Sc. Yamilka Caraballo Díaz
M.Sc. Teresa Dolores Cruz Sardiñas

Diseño de Portada: Joel Hernández Marín

Diseño de páginas y maquetación: José Diago López, Liónel Diago Batista

Esta publicación ha sido concebida como parte de las actividades del Proyecto 1: “Fortalecimiento de capacidades para el planeamiento, la toma de decisiones, los Sistemas Regulatorios y la Sensibilización/Manejo Sostenible de Tierra en ecosistemas severamente degradados”

Publicado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en Cuba, 2009.

Calle 18, No. 110 e/ 1ra y 3ra, Miramar, Playa, Cuba.

e-mail: registry@undp.org Tel: (537) 204 1512, 13, 14, 15 y 17



Coordinadora: M. Sc. Yamilka Caraballo Díaz.
Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Colaboradores por instituciones:

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Dirección de Medio Ambiente: M. Sc. Teresa Dolores Cruz Sardiñas.
Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear: Lic. Roxana Gómez Guada.
Dirección Jurídica: Lic. Onellys Borrero Campo.
Instituto de Geografía Tropical: Lic. Daimar Cánovas González.
Centro de Inspección y Control Ambiental: M. Sc. José Alberto Álvarez Lemus.

Equipo de Coordinación Nacional del Programa de Asociación de País: Ing. María Nery Urquiza Rodríguez, M.Sc. Yulaidis Aguilar Pantoja, Lic. Joel Hernández Marín, M.Sc. Candelario Alemán García, M. Sc. Marta Paula Ricardo Calzadilla, Ing. Leonardo Flores Valdés, Lic. Susana Prieto García.

Ministerio de Finanzas y Precios.

Dirección Jurídica: Lic. Alejandro Vigil Iduate, Lic. Yanetsy Ferreiro Rodríguez, Lic. Evelyn Escobar Sánchez.

Ministerio de la Agricultura.

Dirección Jurídica: Lic. Ada Bisset Bisset.
Instituto de Suelos: Lic. Ernesto Ramis Calzadilla.
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Dirección Jurídica: Lic. Mirtha Ivette Hernández Blanco.

Instituto de Planificación Física.

Departamento Jurídico: Lic. Napoleón Magaz Cáferes.

Ministerio de la Industria Básica.

Oficina Nacional de Recursos Minerales: Lic. Yamilé González Agüero.

PRESENTACIÓN

El uso insostenible de la tierra está dando lugar a una degradación de la misma. Junto con el cambio climático y la pérdida de la diversidad biológica, la degradación de la tierra es una de las amenazas principales para el hábitat, la economía y la sociedad. La degradación de la tierra es una pérdida a largo plazo de las funciones y servicios del ecosistema, causada por alteraciones de las que el sistema no se puede recuperar por sí mismo¹.

La Estrategia Ambiental Nacional de nuestro país² reconoce que *“Los procesos erosivos afectan a 2,5 millones de hectáreas de suelos del país, el alto grado de acidez alcanza alrededor de 3,4 millones de ha, la elevada salinidad y sodicidad influencia alrededor de un millón de ha, la compactación incide sobre 2,5 millones de ha, los problemas de drenaje alcanzan 2,7 millones de ha y en definitiva, 60 % de la superficie del país se encuentra afectada por éstos y otros factores (incluso por más de un factor a la vez) que pueden conducir a los procesos de desertificación.”*

En ocasión de desarrollarse el Diagnóstico “Marco Regulatorio y de Política de la República de Cuba relacionado con el Manejo Sostenible de Tierra (MST)”, que fuera realizado como parte de la etapa preparatoria del Programa de Asociación de País (PDF-B GEF PNUD), con la finalidad de evaluar el marco legal e institucional en que debía insertarse el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, como documento estratégico que define las proyecciones políticas de nuestro país en este tema, se identificaron como barreras de carácter regulatorio: *“la falta de armonización entre algunos elementos del marco regulatorio destinado al uso y manejo de los suelos, y los cambios tecnológicos ocurridos internacionalmente”* y *“el bajo nivel de conocimiento del marco regulatorio a diferentes instancias, nacional y local, así como la falta de sensibilización y capacidad para relacionar las regulaciones del marco regulatorio con la práctica del manejo sostenible de la tierra”*.

¹ PNUMA, 2007. Perspectivas del medio ambiente mundial. GEO 4. Medio ambiente para el desarrollo. Capítulo 3: “Tierras”. pp 81-114.

² Resolución 40/2007 del CITMA “Aprueba la Estrategia Ambiental Nacional para el Período 2007-2010”. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Ordinaria. No. 30, de fecha 18 de abril del 2007.

Con la finalidad de eliminar, entre otras, la barrera antes referida, se ha concebido el Proyecto 1: “Fortalecimiento de capacidades para el planeamiento, la toma de decisiones, los Sistemas Regulatorios y la Sensibilización/Manejo Sostenible de Tierra en ecosistemas severamente degradados”, financiado por el Fondo de Medio Ambiente Mundial e implementado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y con la participación del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, como Agencia de Cooperación Técnica.

El mismo forma parte del Programa de Asociación de País: “Apoyo a la Implementación del Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía de Cuba”, financiado por el Fondo de Medio Ambiente Mundial, liderado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como una de las agencias de implementación, y el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, como Agencia de Cooperación Técnica.

En este sentido, las líneas de trabajo fundamentales del proyecto están dirigidas a la adecuación de la legislación vigente, de modo que se eliminen los vacíos que atentan contra el manejo adecuado de los recursos naturales, facilitando así la creación de un marco legal propicio para el manejo sostenible de tierra, así como a desarrollar acciones que posibiliten la difusión de la legislación vigente.

Es importante precisar que, aunque en su mayoría las disposiciones jurídicas se publican en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, con excepción de algunas resoluciones de los diferentes Organismos de la Administración Central del Estado, la accesibilidad a la misma por parte de nuestros especialistas y la ciudadanía en general no cubre las necesidades de conocimiento de la legislación vigente.

Así es que con la finalidad de difundir la legislación vigente que se relaciona con el manejo sostenible de tierra, se concibe el Compendio: “Legislación Ambiental Cubana relacionada con el Manejo Sostenible de Tierra”, el cual se compone de cuatro partes que abarcan las principales disposiciones jurídicas que se han identificado para el manejo sostenible de la tierra, organizadas de acuerdo a su jerarquía jurídica, Parte I: Leyes, Parte II: Decretos-Leyes, Parte III: Decretos y Parte IV: Resoluciones.

Es por ello que el presente compendio constituye un material de inestimable valor, en tanto posibilita la consulta de la legislación contenida en el mismo a juristas, especialistas que se desempeñan como gestores ambientales, inspectores integrantes del Sistema de Inspección Ambiental Estatal y otros especialistas en general, que trabajen relacionados con el manejo de los suelos, las aguas, el patrimonio forestal y el medio ambiente en general.

Esperamos este material resulte útil como fuente de consulta sobre la legislación vigente y contribuya, como modesto aporte, a la adecuada aplicación de la misma como instrumento de la gestión ambiental.

Oficina de Manejo del Proyecto 1 “Fortalecimiento de capacidades para el planeamiento, la toma de decisiones, los Sistemas Regulatorios y la Sensibilización/Manejo Sostenible de Tierra en ecosistemas severamente degradados”.

APUNTES PARA UN COMPENDIO

El marco legal nacional para el manejo sostenible de tierra constituye una de las líneas de trabajo del Proyecto 1: “Fortalecimiento de capacidades para el planeamiento, la toma de decisiones, los Sistemas Regulatorios y la Sensibilización/Manejo Sostenible de Tierra en ecosistemas severamente degradados”. En tal sentido las proyecciones de trabajo de trabajo se dirigen en dos direcciones esenciales: el desarrollo del marco legal del país que puede contribuir al Manejo Sostenible de Tierra, mediante la revisión y adecuación de la legislación vigente, y la difusión de la misma.

Lo anterior se corresponde con las proyecciones estratégicas que se identifican en el Cuarto Programa para la elaboración y el examen periódicos del derecho ambiental, dentro de las cuales se encuentra el desarrollo, difusión y aplicación de leyes y políticas cuyo fin sea mejorar la conservación, la utilización sostenible, el control y la reducción de la degradación del suelo y, cuando proceda, la rehabilitación de los suelos.¹

Coherentemente la Estrategia Ambiental Nacional para el período 2007-2010 reconoce como objetivo específico en cuanto a la legislación ambiental: *Profundizar en la aplicación de la Ley, al tiempo que se completan los vacíos legales existentes, a fin de proseguir en la consolidación de un ordenamiento legal ambiental eficiente y eficaz, como objetivo estratégico esencial en el desempeño de la gestión ambiental.*²

En este sentido, se conciben dentro de las metas estratégicas, además de elevar el nivel de conocimiento y empleo por parte de la ciudadanía sobre los instrumentos legales vigentes en el país para proteger el medio ambiente, la actualización de las legislaciones vigentes en materia de aguas terrestres

¹ PNUMA, 2008. Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cuarto programa para la elaboración y el examen periódicos del derecho ambiental. <http://www.unep.org/gc/gcss-x/download.asp?ID=775>

² CITMA, 2007. Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010. Editorial Academia. La Habana, 2007. 93 p.

y suelo, por ejemplo, lo que demuestra la importancia del proyecto y del compendio en cuestión, en tanto herramientas de trabajo que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos que en la esfera ambiental se ha establecido nuestro país.

Teniendo en cuenta los elementos antes referidos, el proyecto se ha dado a la tarea de elaborar el compendio que les presentamos, el cual se corresponde además con las recomendaciones efectuadas por los participantes en el Taller “Identificación de Vacíos Legales sobre Manejo Sostenible de Tierra”³, durante el desarrollo del cual se coincidió con la permanencia de las barreras previamente identificadas en el Diagnóstico antes referido, así como de vacíos legales que se manifiestan en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran la obsolescencia de la legislación vigente en materia de aguas terrestres y suelo, esferas de protección del medio ambiente que “requieren, en algunos aspectos, de armonización respecto al entorno socioeconómico internacional y nacional, teniendo en cuenta los cambios ocurridos en cada uno de estos escenarios”.⁴

En ocasión del antes mencionado taller también se precisó que, con independencia de lo abarcador y profuso que resulta el ordenamiento jurídico en cuanto a la tutela legal del medio ambiente, existe “poca divulgación del mismo a nivel nacional y local, incluso entre aquellos que deben ser sus promotores”, lo que influye en “la falta de sensibilidad y capacidad para relacionar las regulaciones vigentes del marco regulatorio con la práctica del manejo sostenible de tierra”, en los casos en que pudiera considerarse que el mismo resulta aplicable al manejo adecuado de los recursos, de manera que posibilite una tendencia hacia la sostenibilidad.

Para su elaboración se ha consultado la Multimedia “Derecho Ambiental Cubano”, la que contiene una compilación de la legislación vigente en el país por esferas específicas de protección del medio ambiente o con determinado nivel de repercusión en los procesos de gestión ambiental, así como a

³ Memorias del Taller “Identificación de Vacíos Legales para el Manejo Sostenible de Tierras”. Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades para el planeamiento, la toma de decisiones, los Sistemas Regulatorios y la Sensibilización/MST en ecosistemas severamente degradados”. CIGEA. La Habana, Febrero, 2009.

⁴ Diagnóstico “Marco Regulatorio y de Política de la República de Cuba relacionado con el Manejo Sostenible de la Tierra”. Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía de la República de Cuba. La Habana, 2000.

especialistas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, del Ministerio de Finanzas y Precios, del Ministerio de la Agricultura, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y del Departamento Jurídico del Instituto de Planificación Física.

Es importante precisar que la Ley 81 “Del Medio Ambiente” establece en su artículo 18, inciso b), como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental del país: *“La presente Ley, su legislación complementaria y demás regulaciones legales destinadas a proteger el medio ambiente, incluidas las normas técnicas en materia de protección ambiental”*.

Se plantea que la legislación ambiental se integra por tres tipos fundamentales de disposiciones jurídicas, la legislación de relevancia ambiental casual, integrada por disposiciones jurídicas expedidas sin ningún propósito ambiental, pero que regulan conductas que inciden significativamente en la protección del medio ambiente; la legislación de relevancia ambiental sectorial, integrada por las normas jurídicas expedidas para la protección de ciertos elementos ambientales o para proteger el medio ambiente de los efectos de algunas actividades; y la legislación propiamente ambiental, integrada por las normas jurídicas expedidas con arreglo a la moderna concepción que visualiza al medio ambiente como un todo organizado a la manera de un sistema.⁵

Siendo así, la legislación ambiental cubana se integra por cuatro grupos fundamentales de disposiciones jurídicas:

1. La legislación emitida antes de la promulgación de la Ley 33 “De Protección del Medio Ambiente y Uso Racional de los Recursos Naturales”, de fecha 10 de enero de 1981, derogada por la Ley 81 “Del Medio Ambiente”, de fecha 11 de julio de 1987, cuyo objeto de regulación jurídica guarda relación con la temática ambiental, dentro de las cuales se encuentra la Ley 41 “Ley de Salud Pública”;
2. La legislación que fue dictada con carácter complementario a la Ley 33 “De Protección del Medio Ambiente y Uso Racional de lo Recursos Naturales”, como es el caso del Decreto-Ley 153 “Regulaciones sobre Sanidad Vegetal”, Decreto 179 “Protección, Uso y Conservación de los Suelos y sus Contravenciones” y el Decreto-Ley 137 “Regulaciones

⁵ Brañes, B. R. Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. El Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina. Memorias del Simposio Judicial realizado en la Ciudad de México del 26 al 28 de enero del 2000. México, 2000. pág. 43

sobre la Medicina Veterinaria”, las cuales en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 81 “Del Medio Ambiente”, mantienen su vigencia en tanto no se opongan a la misma;

3. Las disposiciones jurídicas emitidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de acuerdo con las funciones y atribuciones que le fueron otorgadas, según se ha referido anteriormente, antes de la aprobación de la ley ambiental que paralelamente se venía elaborando debido a la necesidad de regular determinados procesos o actividades que, por su importancia, requerían de una instrumentación inmediata en el país, tal es el caso de la Evaluación de Impacto Ambiental y otras modalidades de licencias ambientales, como la relacionada con el comercio internacional de especies amenazadas de la flora y la fauna silvestre;
4. Las disposiciones legales promulgadas con posterioridad a la aprobación de la ley marco ambiental, como parte de su implementación, como es el caso del Decreto-Ley 190 “De la Seguridad Biológica”.⁶

Durante el proceso de elaboración del compendio se identificaron, como disposiciones jurídicas relacionadas con este tema, 9 leyes, 11 decretos-leyes, 14 decretos y 48 resoluciones, emitidas por diferentes Organismos de la Administración Central del Estado, que conformaban la legislación ambiental cubana en tanto herramienta para la gestión ambiental aplicable al manejo sostenible de tierra en el país.

Estas disposiciones jurídicas, con diferentes jerarquías jurídicas, relacionadas con varias esferas específicas de protección del medio ambiente y que datan de diferentes fechas, las que en su conjunto conforman la legislación ambiental cubana, resultan muy importantes para el manejo sostenible de tierra, ya sea en el contexto del manejo de una cuenca hidrográfica, de un área protegida o de una zona costera, por citar ejemplos, teniendo en cuenta las diversas regulaciones que establecen, del mismo modo que el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía interactúa con otros planes y programas de desarrollo entre los cuales se encuentran el Programa Nacional de Reforestación, el Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de los Suelos y el Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas.

⁶ Caraballo, 2007. Tesis en opción del grado de maestro en ciencias en Manejo Integrado de la Zona Costera. Centro de Investigaciones Marinas. Universidad de la Habana. La Habana, 2007. Págs. 1-74 anexos.

Dentro de los grandes retos y desafíos que tiene la legislación ambiental cubana ante el proceso de adecuación que debe enfrentar para atemperarse a los conceptos sobre manejo sostenible de tierras, especial prioridad requiere la armonización del marco regulatorio y el incremento del conocimiento de la legislación vigente. Un paso necesario que de forma previa se impone en ambas direcciones, es justamente la compilación y difusión de la legislación vigente. Esperamos que este compendio que ponemos a su disposición, contribuya con este propósito.

Agradecemos a los lectores cualquier sugerencia o recomendación que consideren pueda favorecer la obtención de estas nobles intenciones.

M. Sc. Yamilka Caraballo Díaz.
yamicadi@ama.cu

Indice

Decretos-Leyes

Decreto-Ley 136 "Del Patrimonio Forestal y la Fauna Silvestre y sus Contravenciones" ..	17
Decreto-Ley 137 "De la Medicina Veterinaria" .	28
Decreto-Ley 138 "De las Aguas Terrestres" .	38
Decreto-Ley 153 "De la Sanidad Vegetal" .	60
Decreto-Ley 164 "Reglamento de Pesca" .	76
Decreto-Ley 170 "Sistema de Medidas de la Defensa Civil" .	91
Decreto-Ley 190 "De la Seguridad Biológica" .	101
Decreto-Ley 200 "Contravenciones en materia de Medio Ambiente" .	113
Decreto-Ley 201 "Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" .	124
Decreto-Ley 212 "Gestión De la Zona Costera" .	149
Decreto Ley-241 "Modificativo de la la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral" .	165
Datos de publicacion en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.	193

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION EXTRAORDINARIA

LA HABANA, 2 DE MARZO DE 1993

AÑO XCI

Número 2

Página 3

Decreto-Ley 136.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley 33, de 10 de enero de 1981, de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, ha facultado al Consejo de Ministros para dictar, entre otras disposiciones complementarias a la citada Ley, las normas generales relativas a la protección y aprovechamiento racional de la flora y la fauna silvestre.

POR CUANTO: Los bosques y la fauna silvestre constituyen recursos naturales renovables, patrimonio de todo el pueblo, susceptibles de ser aprovechados racionalmente sin detrimento de su integridad ni de sus cualidades reguladoras y protectoras del medio ambiente.

POR CUANTO: La legislación forestal y de la fauna silvestre existente no se ajusta a nuestras condiciones socioeconómicas, por lo que se hace necesario dictar normas jurídicas que permitan y garanticen la ordenación, la utilización, la protección y el desarrollo sostenible del patrimonio forestal y de la fauna silvestre, de acuerdo con los principios de nuestro Estado socialista.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 90, inciso c) de la Constitución de la República ha acordado dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 136 DEL PATRIMONIO FORESTAL Y LA FAUNA SILVESTRE Y SUS CONTRAVENCIONES

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente Decreto-Ley tiene como objetivos:

- a) Establecer las regulaciones generales para la protección, la conservación, el desarrollo sostenible, el incremento y el uso racional de los bosques y la fauna silvestre, así como de los árboles de especies forestales que se localicen fuera de las áreas del patrimonio forestal; y
- b) Controlar los recursos del patrimonio forestal y faunísticos a través de las regulaciones establecidas.

ARTÍCULO 2.- A los efectos de este Decreto-Ley, se entenderá por:

- Bosque, conjunto de especies vegetales agrupadas en formaciones naturales o artificiales, integradas por asociaciones de plantas leñosas, semileñosas y herbáceas, que constituyen una entidad natural de relevancia económica y social por las funciones que desempeña a través de su influencia en la sujeción de los suelos, el régimen hidrológico, la protección de la fauna y de otros ecosistemas vulnerables; por su carácter de ricos depósitos de diversidad biológica y recursos biológicos, y de fuente material genético para productos biotecnológicos, de las condiciones higiénicas y estéticas, así como del medio ambiente en general;

- Fauna silvestre, el conjunto de especies animales terrestres que habitan libremente en las diversas regiones del territorio nacional, incluidas las especies migratorias que desarrollan en él parte de su ciclo de vida, así como los animales domésticos que hayan escapado del control del hombre incorporándose en forma permanente a las comunidades silvestres.

ARTICULO 3.- Integrarán el patrimonio forestal los bosques naturales y artificiales, y los terrenos destinados a esta actividad, cualquiera que sea su tenencia y ubicación en el territorio nacional.

También formarán parte del patrimonio forestal, los árboles de especies forestales que, en forma aislada o en grupos, se localicen fuera de las tierras del patrimonio forestal, los que estarán sujetos al régimen de aprovechamiento, conservación y protección que se establece en el presente Decreto-Ley.

ARTÍCULO 4.- Los animales que integren la fauna silvestre, al constituir un recurso natural de importancia económico-social, formarán parte del patrimonio estatal, independientemente del régimen de tenencia de los lugares donde habiten o se reproduzcan.

ARTÍCULO 5.- Corresponderá al Ministerio de la Agricultura:

- a) Adoptar las medidas necesarias encaminadas a la protección, la conservación, el manejo, la utilización racional y el desarrollo sostenible de los recursos del patrimonio forestal y la fauna silvestre;
- b) Ejecutar y actualizar los trabajos de inventario y ordenación forestal;
- c) Ejercer el control estatal y el aprovechamiento de la fauna silvestre así como realizar los inventarios de ésta, en coordinación con quien corresponda;
- ch) Prevenir y extinguir los incendios forestales, en coordinación con el Ministerio del Interior y otros órganos y organismos que corresponda;
- d) Establecer las medidas de control, en coordinación con quien corresponda, para la protección de la vegetación costera y las cuencas hidrográficas, mediante la conservación, el mejoramiento o el establecimiento de macizos forestales;
- e) Determinar las especies de la flora y la fauna amenazadas o en peligro de extinción, de acuerdo con los resultados de los estudios e investigaciones que se realicen, y dictar las medidas pertinentes para su protección;
- f) Autorizar la extracción de animales de la fauna silvestre de su medio con fines investigativos, culturales, educativos y de conservación;
- g) Autorizar el aprovechamiento del patrimonio forestal, ya sea con fines comerciales o industriales, y con independencia de su magnitud;
- h) Dirigir y controlar lo relacionado con la exportación, la importación, la introducción y el traslado de ejemplares de la flora y la fauna silvestre, coordinando con quien corresponda; y
- i) Evaluar y normar el manejo de los recursos del patrimonio forestal y de la fauna silvestre existentes en los territorios que se declaren como áreas protegidas en el país, de acuerdo con las regulaciones específicas que se dicten para cada área.

CAPITULO II BOSQUES

ARTÍCULO 6.- Atendiendo a su importancia económica, su situación geográfica y sus funciones, los bosques se clasificarán de la forma siguiente:

- Productores, aquellos cuyo destino principal consista en satisfacer las necesidades de la economía nacional, mediante su explotación y aprovechamiento racional;

- Protectores, los que por su ubicación y características sirvan fundamentalmente para conservar los suelos y las aguas, y además proteger áreas agrícolas; infraestructuras viales e hidráulicas; centros de refugio, cría y reproducción de la flora y la fauna en ellos existentes; así como otros valores indirectos, entre los que se considerarán su acción purificadora del medio ambiente y utilidad para la recreación en general.

ARTÍCULO 7.- En los bosques productores se podrá efectuar todo tipo de cortes, siempre y cuando se cumplan las normas que dicte el Ministerio de la Agricultura.

ARTICULO 8.- En las zonas clasificadas como bosques protectores no se podrán efectuar labores que ocasionen la destrucción de la vegetación o la fauna silvestre, salvo las excepciones establecidas en los casos previstos y con sujeción a las normas y demás disposiciones que se dicten por el Ministerio de la Agricultura.

ARTÍCULO 9.- De acuerdo con sus objetivos, los bosques protectores se podrán categorizar en bosques de parques nacionales, bosques para recreación, bosques para la protección y conservación de la fauna silvestre, bosques reservas naturales, bosques protectores de aguas y suelos, y bosques protectores del litoral.

ARTÍCULO 10.- Las fajas forestales que se establezcan en embalses, ríos y arroyos serán de carácter permanente, para que la cubierta arbórea garantice su protección.

El ancho de las fajas a que se refiere el párrafo anterior será establecido conjuntamente por el Ministerio de la Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

ARTÍCULO 11.- En la categorización de los bosques se determinarán, señalarán y representarán cartográficamente los límites de las tierras ocupadas por cada uno de éstos.

ARTÍCULO 12.- El manejo de los bosques que formen parte de las zonas de protección de los cuerpos de agua, las obras e instalaciones hidráulicas, los

cauces naturales o artificiales, las cuencas subterráneas y sus zonas de recarga se realizará conforme a lo establecido en el presente Decreto-Ley y en la legislación relativa a las aguas terrestres.

De igual forma el manejo de los bosques que se encuentren en cotos mineros, áreas mineras reservadas o zonas de prospección geológica se realizará conforme a lo establecido en el presente Decreto-Ley y en la legislación relativa a la explotación minera.

CAPITULO III

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y LA FAUNA SILVESTRE

Sección Primera

Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 13.- La protección de los bosques contra los efectos de incendios, talas ilegales, derribo de árboles de especies en peligro de extinción, infracción de los métodos aplicados para las talas o cualquier otra acción perjudicial se regirán por las disposiciones establecidas en este Decreto-Ley y en sus normas complementarias.

ARTÍCULO 14.- No se permitirá el pastoreo en bosques o plantaciones forestales por ganado que le sea dañino, por el perjuicio que podrían causar a la vegetación y a su regeneración natural.

ARTÍCULO 15.- Quedarán sujetos a un régimen especial de protección los bosques existentes en:

- a) Las cabeceras de cuencas hidrográficas, manantiales y ojos de agua;
- b) Los lugares en que su presencia evite el enturbamiento de las aguas que abastecen poblaciones, así como la erosión de los suelos, fundamentalmente los que estén bajo riesgos de desprendimientos y deslizamientos de tierras y rocas;
- c) El litoral del país y los cayos adyacentes;
- ch) Las montañas cuyas pendientes excedan del 45 % y donde las cimas sean impropias para el cultivo;
- d) Los bosques existentes en áreas protegidas;
- e) Y otras áreas consideradas con fines estratégicos para la defensa del país.

El Ministerio de la Agricultura coordinará con las entidades rectoras que corresponda la elaboración de las normas de este régimen.

ARTÍCULO 16.- Cualquier inversión que pueda perjudicar el patrimonio forestal o alterar el habitat o las condiciones de vida y reproducción de las especies de la fauna silvestre, antes de su ejecución se deberá consultar con el Ministerio de la Agricultura, el cual expedirá, cuando proceda, la correspondiente autorización.

Sección Segunda Control de Incendios

ARTÍCULO 17.- Todo el que haga uso del fuego dentro o en las cercanías de los bosques deberá cumplir las disposiciones dictadas a esos efectos.

ARTICULO 18.- Los propietarios o poseedores de suelos donde existan áreas forestales estarán obligados a cumplir las medidas de protección contra incendios.

ARTÍCULO 19.- En períodos de alta posibilidad de incendios forestales, las autoridades competentes podrán limitar la circulación y el estacionamiento de personas o vehículos dentro de los bosques.

Sección Tercera Desmontes

ARTÍCULO 20.- A los fines de evitar la reducción de las áreas boscosas que conforman el patrimonio forestal del país se prohíben los desmontes, salvo autorización del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Agricultura, y de acuerdo con las normas que al efecto dicte dicho organismo.

ARTÍCULO 21.- En consecuencia con el artículo anterior, el Consejo de Ministros autorizará desmontes en los casos siguientes:

- a) Cuando se pretenda el mejoramiento y la renovación de las áreas boscosas, en la magnitud y volumen establecidos en los proyectos de ordenación forestal;
- b) Cuando se pretenda erradicar y desaparecer todo vestigio dejado por la acción de fenómenos naturales u otros agentes nocivos; y
- c) En otros casos en que, con carácter excepcional, así lo determine.

ARTÍCULO 22.- Al autorizarse un desmonte se fijarán la forma y plazos para su realización.

ARTÍCULO 23.- Todo desmonte incluirá obligatoriamente el aprovechamiento integral de la madera y otros productos forestales.

ARTÍCULO 24.- Los árboles quemados, plagados o enfermos serán objeto de cortas sanitarias, y su destino, el establecido por el Ministerio de la Agricultura.

Sección Cuarta Reforestación

ARTÍCULO 25.- Será obligatoria la reforestación de los terrenos siguientes:

- a) Los destinados a esta actividad que estén parcial o totalmente desforestados;
- b) Las áreas forestales de las zonas de protección de los cuerpos de agua, los cauces naturales, los canales, las grandes zanjaz permanentes, las cuencas subterráneas y sus zonas de recarga establecidas por la legislación vigente en la materia, con prioridad en todo caso a las correspondientes a fuentes de abastecimiento a la población;
- c) Del patrimonio forestal en los cuales se realice extracción de minerales;
- ch) Los que forman la faja litoral;
- d) Los que por pendientes fuertes u otros factores sean susceptibles de erosión; y
- e) Los que por otras razones de protección al medio ambiente sea recomendable reforestar.

ARTÍCULO 26.- El Ministerio de la Agricultura dictará las normas relativas a la reforestación de las áreas del país, a cuyos efectos coordinará su ejecución con las entidades competentes.

ARTÍCULO 27.- En los trabajos de reforestación se utilizarán especies que mejoren la calidad y las condiciones del lugar, las que estén en peligro de extinción, incluidas las de reconocido valor económico, así como las que sean útiles para la fauna silvestre, de acuerdo con lo que disponga el Ministerio de la Agricultura.

CAPITULO IV APROVECHAMIENTO

Sección Primera Patrimonio Forestal

ARTÍCULO 28.- El aprovechamiento del patrimonio forestal se realizará atendiendo a las regulaciones técnicas vigentes, de forma tal que se mantengan las condiciones más favorables para el equilibrio del ecosistema en cuanto a su relación con el suelo, el agua, la flora y la fauna.

En las zonas de aprovechamiento maderable se adoptarán las medidas tendientes a la restauración del bosque.

ARTÍCULO 29.- La ordenación y el manejo de los bosques que estén en tierras de cooperativas de producción agropecuaria, agricultores pequeños y otros privados se realizarán conforme a lo establecido en el presente Decreto-Ley y en las disposiciones que se dicten a su amparo.

Sección Segunda Fauna Silvestre

ARTÍCULO 30.- El aprovechamiento y el fomento para diferentes fines, de ejemplares de la fauna silvestre sólo se podrá autorizar por el Ministerio de la Agricultura, y de acuerdo con las regulaciones dictadas al efecto.

ARTÍCULO 31.- Cuando en un territorio se efectúen actividades diferentes, el aprovechamiento de la fauna silvestre se realizará conjuntamente con las restantes actividades socioeconómicas y de forma racional, bajo el principio del uso múltiple de la tierra y sus recursos.

ARTÍCULO 32.- La captura o caza de ejemplares de la fauna silvestre con diferentes fines se regirá por las regulaciones sobre caza.

CAPITULO V CONTROL DE LA FAUNA SILVESTRE

ARTÍCULO 33.- La aclimatación de las especies de la fauna silvestre que se introduzcan en el país se realizará en centros especializados.

ARTÍCULO 34.- Todo animal doméstico que salga del control de su dueño podrá ser reclamado por éste dentro de los noventa días posteriores a su huída y, en caso de ser capturado, el dueño tendrá derecho a recuperarlo siempre que demuestre su condición de propietario o poseedor del animal.

ARTÍCULO 35.- Transcurrido el plazo a que se refiere el Artículo anterior sin que el animal doméstico haya sido reclamado por su dueño, éste perderá el derecho de propiedad sobre el animal. De igual forma perderá tal derecho si dentro del año siguiente a la reclamación no recupera el animal, en cuyo casos dicho animal quedará sometido a las regulaciones establecidas en este Decreto-Ley.

ARTÍCULO 36.- La presencia o posesión de perros u otros animales que ocasionen perjuicio a la fauna silvestre podrá ser limitada en determinadas áreas, en interés de la protección y la conservación de dicha fauna.

CAPITULO VI

SERVICIO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y LA FAUNA SILVESTRE

ARTÍCULO 37.- El Servicio Estatal de Protección de los Recursos Forestales y de la fauna silvestre, que en lo adelante se denominará Servicio Estatal de Protección, será el conjunto de actividades dirigidas a garantizar el control, la vigilancia, la conservación y el desarrollo de los recursos forestales y faunísticos del país.

ARTÍCULO 38.- Para cumplir el Servicio Estatal de Protección se crea el Cuerpo de Guardabosques, cuya organización, dirección y control estará a cargo del Ministerio de la Agricultura.

ARTÍCULO 39.- Los miembros del Cuerpo de Guardabosques, como agentes de la autoridad forestal en el desempeño de sus funciones, estarán autorizados a vestir los uniformes con insignias y grados establecidos para este cuerpo, cuyo uso y equivalencia se dispondrá de conformidad con la categoría y cargo de que se trate, así como las credenciales que oficialmente se determinen.

ARTÍCULO 40.- En el desempeño de sus funciones los miembros del Cuerpo de Guardabosques estarán autorizados a portar armas de fuego, cuyo uso y demás especificaciones se ajustarán a lo que establezca el Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 41.- Los miembros del Cuerpo de Guardabosques, en el desarrollo de sus actividades, tendrán las atribuciones y funciones que determine el Ministerio de la Agricultura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Ministro de la Agricultura para dictar las disposiciones complementarias a este Decreto-Ley.

SEGUNDA: También se faculta al Ministro de la Agricultura para dictar, en el ámbito de su competencia, cuantas otras disposiciones sean necesarias en materia de flora y fauna silvestre.

TERCERA: Se derogan: Real Decreto de 21 de abril de 1876; Decreto de 26 de enero de 1877; Decreto de 24 de agosto de 1877; Decreto 991, de 21 de octubre de 1912; Decreto 592, de 16 de mayo de 1913; Decreto 830, de 23 de junio de 1915; Decreto 597, de 26 de abril de 1917; Decreto 1576, de 30 de octubre de 1922; Decreto 1831, de 16 de diciembre de 1922; decretos 1887, 1988 y 1989 de 23 de diciembre de 1922; Decreto 21, de 6 de enero de 1923; decretos 295, 318 y 323, de 1.º de marzo de 1923; decretos 753 y 772, de 24 de mayo de 1923; Decreto 979, de 4 de julio de 1923; Decreto 1434, de 24 de septiembre de 1923; Decreto 1598, de 20 de octubre de 1923; Decreto 179, de 13 de febrero de 1924; Decreto 351, de 20 de marzo de 1924; Decreto 1098, de 15 de agosto de 1924; Decreto 1358, de 2 de octubre de 1924; Decreto 800, de 9 de mayo de 1925; decretos 494 y 495, de 13 de abril de 1926; Decreto 902, de 19 de junio de 1926; Ley del 3 de mayo de 1926; Decreto 487, de 12 de abril de 1930; decretos 676 y 677, de 19 de mayo de 1932; Decreto 3053, de 8 de diciembre de 1933; Decreto 2369, de 12 de septiembre de 1934; Decreto-Ley 527, de 22 de enero de 1936; Decreto-Ley 681 y Decreto 670, de 21 de marzo de 1936; Decreto 1370, de 15 de mayo de 1936; Decreto 2883, de 22 de octubre de 1936; Decreto 3128, de 6 de noviembre de 1936; Decreto 163, de 11 de enero de 1937; Decreto 509, de 5 de febrero de 1937; Decreto 1795, de 19 de junio de 1937; Decreto 2384, de 3 de agosto de 1937; Decreto 3224, de 9 de noviembre de 1937; Decreto 1355, de 30 de junio de 1938; Decreto 1952, de 23 de septiembre de 1938; Decreto 912, de 28 de abril de 1939; Decreto 2996, de 4 de diciembre de 1939; Decreto 3110, de 16 de diciembre de 1939; Decreto 1266, de 6 de mayo de 1940; Decreto 1026, de 21 de marzo de 1941; Decreto 2703, de 26 de septiembre de 1941; Decreto 665, de 10 de marzo de 1944; Decreto 1397, de 13 de mayo de 1944; Decreto 1916, de 19

de junio de 1947; Decreto 3407, de 5 de octubre de 1948; Decreto 65, de 10 de enero de 1949; Decreto 1754, de 2 de junio de 1949; Decreto 3588, de 9 de octubre de 1950; Decreto 3608, de 23 de octubre de 1950; Decreto 577, de 15 de febrero de 1951; Decreto 504, de 19 de febrero de 1951; Decreto 3667, de 29 de agosto de 1951; Decreto 5315, de 30 de noviembre de 1951; Ley-Decreto 1597, de 4 de agosto de 1954 y Ley-Decreto 1673, de 28 de agosto de 1954, en lo que se refiere a montes y aprovechamiento forestal; Acuerdo-Ley 56, de 5 de agosto de 1958; Ley 239, de 10 de abril de 1959; Decreto 2970, de 20 de marzo de 1961; Decreto 3776, de 13 de julio de 1974; y cuantas más disposiciones legales y reglamentarias se opongan al cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto-Ley, que comenzará a regir a partir de los treinta días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la Ciudad de La Habana, a 3 de marzo de 1993.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, 19 DE Abril DE 1993

AÑO XCI

Número 6

Página 76

Decreto-Ley 137.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley 33, de 10 de enero de 1981, De Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, contiene normas cuya finalidad es la preservación y el cuidado de la vida animal, del que la medicina veterinaria es uno de sus elementos fundamentales.

POR CUANTO: La legislación sobre sanidad animal vigente en nuestro país se encuentra dispersa en innumerables disposiciones, algunas de las cuales datan de principios de siglo, legislación que en la actualidad resulta obsoleta.

POR CUANTO: Los avances alcanzados por nuestro país en la sanidad animal, y las perspectivas económicas del desarrollo de la producción animal y sus derivados, requieren la adopción de lineamientos organizativos y normativos para un mejor funcionamiento del servicio de la medicina veterinaria en todo el territorio nacional.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 90, inciso c) de la Constitución de la República ha acordado el dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 137 DE LA MEDICINA VETERINARIA

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El servicio de la medicina veterinaria comprenderá el conjunto de actividades y medidas preventivas, asistenciales y sanitario-veterinarias dirigidas a garantizar en el territorio nacional la salud de los animales en general y las óptimas condiciones tanto de los productos de origen animal como de las materias primas de ese origen o de origen vegetal o mineral para la alimentación de los animales, teniendo como objetivo final coadyuvar a garantizar la salud y el bienestar del hombre.

ARTICULO 2.- El servicio de medicina veterinaria comprenderá los que se presten a todas las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras.

ARTICULO 3.- Este Decreto-Ley tiene como objetivos principales:

- a) Proteger el territorio nacional de la introducción y difusión de enfermedades de origen animal objeto de cuarentena, así como de agentes que faciliten su propagación;
- b) Lograr un estado sanitario-veterinario satisfactorio en nuestro país, mediante la prevención, la localización, el control y la erradicación de las enfermedades de los animales;
- c) Establecer las normas fundamentales referentes a la sanidad animal, que comprenden, entre otras, las relativas a la exportación e importación de animales, así como productos y materias primas de ese origen o de origen vegetal o mineral para la alimentación de los animales;
- ch) Determinar el campo de aplicación de las medidas del servicio de medicina veterinaria; y
- d) Regular el establecimiento o levantamiento del régimen de cuarentena de animales y de los estados de alerta y emergencia sanitario-veterinarias.

ARTICULO 4.- Corresponderá al Ministerio de la Agricultura declarar los estados de cuarentena y de alerta sanitario-veterinaria, y disponer su cesación, así como determinar y dictar las medidas correspondientes cuando surjan algunas de las enfermedades transmisibles que pongan en peligro el estado epizootológico de una zona determinada.

En caso de presentarse una zoonosis se actuará en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

ARTICULO 5.- Los organismos estatales y los representantes y agentes de las líneas aéreas, cubanas y extranjeras, estarán obligados a suministrar al Ministerio de la Agricultura, con la suficiente antelación, la información siguiente:

- a) La llegada al país de barcos y aeronaves especificando el puerto o aeropuerto de arribo;
- b) Copia de los manifiestos de carga de barcos y aeronaves; y
- e) Los animales y los productos de origen animal provenientes del exterior, con expresión de destino.

También estará obligado a suministrar al Ministerio de la Agricultura información quien posea animales, productos y materiales de origen animal almacenados y destinado a la exportación y quien pretenda abrir al tráfico internacional nuevos puertos y aeropuertos.

ARTICULO 6.- Los que organicen eventos internacionales y actividades turísticas deberán enviar al Ministerio de la Agricultura la información requerida y dentro de los términos previstos, para que se puedan adoptar las medidas profilácticas a fin de prevenir la difusión de enfermedades de animales.

ARTICULO 7.- Quienes exploten barcos y aeronaves dedicados a la transportación, tanto nacional como extranjera, mediante los respectivos capitanes de los barcos o aeronaves que arriben procedentes del exterior, estarán en la obligación de entregar a los inspectores del Servicio Veterinario de Frontera del Ministerio de la Agricultura los documentos acreditativos del estado sanitario-veterinario de los animales y productos de origen animal que hayan transportado.

ARTICULO 8.- Los inspectores del Ministerio de la Agricultura, señalados en el artículo anterior, practiquen en barcos y aeronaves exámenes de cargamentos importados, depósitos de alimentos y bultos postales, podrán impedir el desembarco de animales productos de origen animal o provisiones que impliquen peligro de introducir, propagar o diseminar en el territorio nacional organismos nocivos, así como decomisarlos, retenerlos o someterlos al régimen de cuarentena.

ARTICULO 9.- Corresponderá al Ministerio de la Agricultura:

- a) Controlar el estado sanitario de los animales, productos y materias primas de origen animal o para la alimentación de los animales, a fin de prevenir, localizar y erradicar las enfermedades que puedan dañar los animales, y que de cualquier manera puedan producir un perjuicio económico o social;
- b) Proteger el territorio nacional evitando la introducción de enfermedades de los animales así como de agentes que faciliten su propagación accidental o intencionalmente;
- c) Determinar y establecer los programas nacionales de lucha contra enfermedades de los animales, así como el sistema de notificación de enfermedades de declaración obligatoria;
- ch) Normar, dirigir, ejecutar y controlar la actividad correspondiente al servicio de la medicina veterinaria;
- d) Dictar normas para la protección de la salud animal, aplicarlas y supervisar su cumplimiento y el de las restantes medidas preventivas, contraepizooticas y terapéuticas que para tal fin se adopten;
- e) Garantizar el uso racional de los medicamentos veterinarios y materias primas farmacéuticas para los animales;
- f) Aplicar los planes y programas de emergencia;
- g) Determinar la utilización de los medios apropiados en la lucha contra las enfermedades de los animales, ejercer su control, y fijar los índices para su utilización;
- k) Controlar la exportación, la importación y la circulación interna de animales, productos y materias Primas de origen animal, así como de materiales y medios utilizados para su transportación, envases y embalaje; y
- i) Realizar, a través de la red nacional de laboratorios, o recibir de las instituciones facultades, las investigaciones y diagnósticos para detectar los agentes etiológicos y demás factores que puedan dañar la salud animal.

ARTICULO 10.- Las disposiciones sobre el servicio de medicina veterinaria que se establecen en este Decreto-Ley y las que dicte a su amparo el Ministerio de la Agricultura se aplicarán a:

- a) Los animales, incluidos sus cadáveres, con independencia del área del territorio nacional donde se encuentren;
- b) Los piensos y forrajes, así como otros productos, elementos y materiales que se empleen para la alimentación animal, tanto en lo que res-

- pecta a la producción agropecuaria como al procesamiento industrial;
- c) La producción, la reproducción, la cría, la alimentación, el ambiente, la utilización, el sacrificio, el transporte y en general todo lo relacionado con el desarrollo de animales;
 - ch) Los centros de investigación relacionados con la salud animal, u otras instituciones que manipulen material biológico de interés para la salud animal;
 - d) Los medios de transporte, envases, embalajes y otros objetos o productos de cualquier origen que puedan ser portadores o vectores de organismos o microorganismos causantes de enfermedades o agentes nocivos a la salud animal;
 - e) La producción, la conservación, la comercialización, el control de la calidad y la entrega para el consumo de preparados medicinales, profilácticos y de diagnóstico y estimulantes biológicos para el tratamiento de los animales;
 - f) Animales, productos y materias primas de origen animal de importación o destinados a la exportación;
 - g) Los centros de cuarentena animal;
 - h) Las unidades establecidas en los puntos para el control de las importaciones, las exportaciones y el tránsito de viajeros; y
 - i) Las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras.

CAPITULO II

CUARENTENA SANITARIO-VETERINARIA

ARTICULO 11.- A los efectos de este Decreto-Ley, se entenderá por:

- Régimen de cuarentena, las medidas o el conjunto de medidas de excepción adoptadas con los animales, sus productos, las personas y los medios relacionados con ellos, en caso de presentarse una epizootia, en el lugar donde se encuentren o de donde provengan, o patologías que puedan originar un brote epidémico;
- Estado de alerta sanitario-veterinaria, el conjunto de medidas preventivas y de protección contraepizoóticas adoptadas en caso de brotes epidémicos en los países con los que haya relaciones de cualquier tipo o ante el posible empleo de la guerra biológica imperialista;
- Estado de emergencia sanitario-veterinaria, la medida o el conjunto de medidas extremas adoptadas en caso de surgimiento de una enfermedad exótica a escala nacional o local.

ARTICULO 12.- El Ministerio de la Agricultura comunicará a las autoridades sanitarias correspondientes de higiene y epidemiología la aparición de epizootias de enfermedades zoonóticas con el fin de que se adopten las medidas necesarias.

ARTICULO 13.- En el caso de la introducción en el país de productos de origen animal contaminados con organismos nocivos previstos en los requisitos de cuarentena y sea necesario efectuar la desinfección, por quien corresponda se abonarán los gastos en que se haya incurrido, y se brindarán las facilidades necesarias a los efectos de dicha desinfección.

ARTICULO 14.- A propuesta del Ministro de la Agricultura, el Presidente del Consejo de Estado declarará el Estado de Emergencia Sanitario-Veterinaria en todo o parte del territorio nacional y se pondrán en vigor las estructuras previstas por el Sistema Nacional de Defensa Civil para casos de catástrofes y se movilizarán los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar las mismas en los distintos niveles. Asimismo dispondrá la terminación del referido estado de emergencia.

ARTICULO 15.- Al decretarse un Régimen de Cuarentena y un Estado de Alerta o Emergencia Sanitario-Veterinaria, se precisarán las responsabilidades de las entidades estatales dentro del marco de sus respectivas atribuciones y funciones, así como las de todas las restantes instituciones y de la ciudadanía en general.

ARTICULO 16.- El Ministerio de la Agricultura divulgará de inmediato, para conocimiento de todos a quienes conciernan, las disposiciones que establezcan un Régimen de Cuarentena y un Estado de Alerta o de Emergencia Sanitario-Veterinaria.

ARTICULO 17.- En las disposiciones que establezcan un Régimen de Cuarentena y un Estado de Alerta o de Emergencia Sanitario-Veterinaria, se podrá disponer:

- a) La suspensión temporal o definitiva del acopio y las operaciones comerciales y de transporte de animales, productos y materias primas de origen animal;
- b) La matanza sanitaria o la destrucción total o parcial, según corresponda, con indemnización si procediera, de animales, productos y materias primas de origen animal y materiales de envases o embalajes con-

- taminados que pudieran propiciar la propagación de la enfermedad; y
- e) El control del personal relacionado con los animales o el foco de dicha enfermedad.

CAPITULO III

EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y CIRCULACIÓN INTERNA

ARTICULO 18.- Los animales, productos y materias primas de origen animal destinados a la exportación deberán tener los requisitos establecidos por las disposiciones vigentes en materia sanitario-veterinaria y los exigidos por las autoridades competentes del país receptor o en los tratados internacionales de los que Cuba sea parte.

ARTICULO 19.- Para garantizar el estado sanitario-veterinario requerido de los animales, productos y materias primas de origen animal destinados a la exportación, el Ministerio de la Agricultura expedirá el correspondiente certificado veterinario de exportación.

ARTICULO 20.- Toda solicitud de autorización de importación de animales, productos y materias primas de origen animal, preparados biológicos, farmacéuticos y otros empleados en la práctica de la medicina veterinaria, así como de productos y objetos de cualquier origen susceptibles de transmitir enfermedades de animales, además de estar acompañada por la certificación expedida por las autoridades competentes del país exportador, legalizada y certificada por la autoridad consular cubana, en los casos que proceda, se ajustará a las regulaciones establecidas por el Ministerio de la Agricultura.

ARTICULO 21.- Para el transporte y el traslado de animales, productos y materias primas de origen animal en el territorio nacional se exigirá la correspondiente certificación sanitario-veterinaria, conforme a lo que disponga el Ministerio de la Agricultura.

ARTICULO 22.- Los medios y equipos utilizados en la transportación de animales, productos y materias primas de origen animal serán sometidos antes y después de realizada dicha transportación a un tratamiento de limpieza y desinfección conforme a las disposiciones dictadas por el Ministerio de la Agricultura.

CAPITULO IV REPRODUCCIÓN, CRIANZA Y SACRIFICIO

ARTICULO 23.- Todo poseedor de un animal estará obligado a cumplir las disposiciones sanitario-veterinarias que se establezcan. Asimismo, el que se dedique a la crianza y sacrificio de animales estará obligado a informar la situación zoonosanitaria de las áreas a su cargo y del cumplimiento de las normas de crianza, utilización y alimentación adecuada de los animales, de acuerdo con sus categorías y propósitos.

ARTICULO 24.- En la explotación de animales se deberán cumplir las disposiciones sanitario-veterinarias en cuanto a su reproducción, crianza y sacrificio.

ARTICULO 25.- En los casos que se requiera efectuar matanzas sanitarias o de urgencia, quien las disponga las comunicará a las autoridades sanitarias correspondientes de higiene y epidemiología.

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: Sin perjuicio de que se compruebe o no la comisión de una contravención de las disposiciones sobre medicina veterinaria, se podrá disponer la aplicación de medidas preventivas, contraepizooticas, terapéuticas y cuantas otras se requieran en naves, aeronaves y vehículos de transporte terrestre de cualquier clase cuando se estime que en ellos pueda haber organismos, microorganismos u otros portadores o vectores causantes de enfermedades en los animales.

Cuando el caso lo requiera se podrá disponer, además, para su investigación, la medida cautelar de retención de animales, así como productos de ese origen, transportes e instrumentos.

SEGUNDA: La inspección estatal y el control sanitario que realice el Ministerio de la Agricultura, de alimento y productos de origen animal para consumo humano, en las instalaciones y medios donde estos se procesen, transporten o almacenen, lo hará en coordinación y bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública.

TERCERA: El Ministerio de la Agricultura, en coordinación con el Comité Estatal de Finanzas, establecerá las regulaciones para la indemnización, en

el caso que proceda, a propietarios por la aplicación del programa de lucha contra las enfermedades infectocontagiosas cuando se realicen matanzas sanitarias.

CUARTA: Los preparados biológicos y farmacéuticos fabricados en el país para la rama pecuaria y la actividad veterinaria o para el comercio exterior se deberán someter al control correspondiente, de acuerdo con las normas que establezca el Ministerio de la Agricultura. Antes de su utilización en el territorio nacional, los preparados biológicos y farmacéuticos importados se deberán controlar de acuerdo con la certificación de calidad expedida por la entidad fabricante.

Estos preparados, fabricados en el país o importados, cumplirán el trámite del Registro General de Medicamentos de Uso Veterinario, establecido por el Ministerio de la Agricultura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Ministro de la Agricultura para dictar cuantas disposiciones complementarias sean necesarias para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto-Ley.

SEGUNDA: Se derogan la Orden Militar 128, de marzo de 1900; el Decreto 1348 de 7 de agosto 1928; el Decreto 973, de 11 de abril de 1934; el Decreto 1426, de 14 de mayo de 1936; el Decreto 726, de 24 marzo e 1938; el Decreto 2575, de 5 de septiembre 1940; el Decreto 1206, de 5 de mayo de 1941; el Decreto 3346, de 10 de diciembre de 1941; el Decreto 1199, de 25 de abril de 1942; el Decreto 1732, de 22 de junio de 1942; la Circular 16 del Director General de Aduanas, de 1ro. de febrero de 1943; el Decreto 1920, de 23 de junio de 1944; el Decreto 3347, de 18 de octubre de 1945; el Decreto 605, de 19 de marzo de 1946; el Decreto 1503, de 23 de mayo de 1947; la Resolución 1316 del Ministerio de la Agricultura, de 9 de julio de 1947; el Decreto 4448, de 22 de diciembre de 1948; el Decreto 2788, de 31 de octubre de 1951, el Decreto 5171, de 26 noviembre de 1951; el Decreto-Ley 38, de 29 de abril de 1952; el Decreto 596, de 13 marzo de 1956; el Decreto 1981, de 8 de julio de 1957; el Decreto 582, de 28 de febrero de 1958; y cuantas más disposiciones legales se opongan al cumplimiento de este Decreto-Ley, que comenzará a regir a los treinta días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la Ciudad de La Habana, a 16 de abril de 1993.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, VIERNES 2 DE Julio DE 1993

AÑO XCI

Número 9

Página 121

Decreto-Ley 138.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: El artículo 27 de la Constitución de la República establece que el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país, reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, le bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras, estando su aplicación a cargo de los organismos correspondientes, así como que es un deber de todos los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza.

POR CUANTO: La Ley No. 33, de 10 de enero de 1981, De Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, establece los principios básicos para la conservación, la protección, el mejoramiento y la transformación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, y señala que éstos comprenden principalmente, entre otros, las aguas terrestres.

POR CUANTO: Este recurso natural imprescindible para la existencia de la sociedad y la vida del hombre, es renovable pero limitado, por lo que es indispensable que su aprovechamiento y preservación, condicionados por la forma en que se utilice y explote, sean específicamente regulados.

POR CUANTO: Esta regulación concreta no sólo se ha de limitar a desarrollar los principios básicos establecidos en la mencionada Ley, sino además debe comprender, sobre la base de estos, las peculiaridades relativas al aprovechamiento, la explotación, la conservación, el saneamiento y el uso, racional de las aguas terrestres; la protección de las fuentes, cauces naturales, obras e instalaciones, hidráulicas del país; la preservación de las actividades económicas y sociales y el medio ambiente natural contra los efectos nocivos que pudieran causar las aguas terrestres; las actividades relacionadas con los sistemas de riego y drenaje agrícola y de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial, así como la cuantificación, el planeamiento y la administración de los recursos hidráulicas.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas en el artículo 90, inciso c) de la Constitución de la República, resuelve dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 138 DE LAS AGUAS TERRESTRES

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente Decreto-Ley tiene por objeto desarrollar los principios básicos establecidos en el artículo 17 de la Constitución de la República y la Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, en relación con las aguas terrestres, tanto superficiales como subterráneas, así como regular, sobre la base de esos principios:

- a) Las peculiaridades relativas al aprovechamiento, la explotación, la conservación, el saneamiento, y el uso racional de este recurso natural;
- b) La protección de las fuentes, cauces naturales, obras e instalaciones hidráulicas del país;
- c) La protección de las actividades económicas y sociales y del medio ambiente natural contra los efectos nocivos que pudieran causar las aguas terrestres;
- ch) Las actividades relacionadas con el riego y el drenaje agrícola, así como con los sistemas de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial; y
- d) La cuantificación, el planeamiento y la administración de los recursos hídricos.

ARTICULO 2.- El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en lo adelante Recursos Hidráulicos, como rector de las aguas terrestres, dirigirá y controlará las actividades relacionadas con este recurso natural indicadas en el artículo 1, según las disposiciones de este Decreto-Ley, su Reglamento y en todo caso de acuerdo con los principios básicos establecidos por el artículo 27 de la Constitución de la República y la Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales.

ARTICULO 3.- A los efectos de este Decreto-Ley se entenderá por:

- Contaminación, la acción y el efecto de añadir al agua materias o formas de energía, o inducirle condiciones que de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en su relación con los usos posteriores o su función ecológica;
- Aguas residuales, aguas cuya calidad original se ha degradado en alguna medida como consecuencia de su utilización;
- Cauce, canal natural o artificial claramente diferenciado que contiene agua en movimiento de forma continua o periódica. Cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, mientras no se construyan obras de encauzamiento, el cauce estará constituido por su canal natural;
- Fuente, cuerpo de agua contenido en formaciones naturales o estructuras artificiales, desde el cual se genere o se pueda generar el abastecimiento a los usuarios.

CAPITULO II

DEL APROVECHAMIENTO Y EL USO RACIONAL DE LAS AGUAS TERRESTRES

Sección Primera

De las Normas de Aplicación General

ARTICULO 4.- Todo usuario de aguas terrestres, en atención a su deber de asegurar la utilización racional de éstas, estará obligado a:

- a) Organizar, asegurar y controlar el aprovechamiento y el uso eficiente de los volúmenes de agua que se le hayan asignado, incluidas la evitación y la supresión de pérdidas por filtraciones, senderos, evaporación y desperdicio en sentido general;
- b) Respetar el plan de asignaciones de agua, en función de que éste cumpla con su objetivo de asegurar la satisfacción de las necesidades de todas las actividades económicas y sociales en él previstas; y

- c) Facilitar a Recursos Hidráulicos el control del aprovechamiento y uso racional de este recurso natural.

ARTICULO 5.- En los proyectos para la ejecución de nuevas inversiones industriales, agropecuarias o sociales, los inversionistas estarán obligados a promover la introducción de tecnologías que aseguren el consumo menor de agua dentro de sus requerimientos específicos, así como a procurar su utilización.

ARTICULO 6.- Para la ejecución de sus actividades propias y de las que les conciernan en el ejercicio de sus funciones rectoras, los organismos de la Administración Central del Estado estarán obligados a:

- a) Elaborar y proponer, para su aprobación correspondiente, las normas de consumo de agua; y
- b) Elaborar, en coordinación con Recursos Hidráulicos, y proponer para su aprobación correspondiente, las normas de calidad del agua que requieran dichas actividades.

ARTICULO 7.- Recursos Hidráulicos será el organismo encargado de:

- a) Fijar el régimen de explotación de las fuentes, de modo que se asegure su aprovechamiento más eficiente, partiendo del principio de que las aguas superficiales y subterráneas integran un sistema unitario;
- b) Limitar o condicionar temporalmente el uso de las aguas terrestres para garantizar su explotación racional en situaciones que así lo exijan, teniendo en cuenta, previa coordinación con la Junta Central de Planificación, la influencia de estas decisiones en el plan de producción de los cultivos afectados; y
- e) Ordenar el cese de la explotación de las aguas terrestres hasta que el usuario realice o adopte las medidas que se requieran para evitar su mal aprovechamiento o uso irracional.

ARTICULO 8.- Los ministerios de la Agricultura y del Azúcar estarán específicamente obligados a:

- a) Organizar los sistemas de regadío sobre bases científicas teniendo en cuenta el uso racional del agua y la conservación de los suelos, incluidas las obras de drenaje correspondientes y las que posibiliten la recirculación de las aguas ya usadas dentro de los sistemas propios;
- b) Realizar estudios, investigaciones y trabajos de extensión de tecnologías de regadío, con la finalidad de mejorar la eficiencia en el uso del agua;

- e) Fijar rendimientos indicativos para los cultivos bajo riego, como instrumento para promover y evaluar la efectividad económica del uso del agua en este tipo de cultivos; y
- ch) Asesorar a las cooperativas de producción agropecuaria y a los agricultores pequeños y demás entidades de los sectores estatal o privado que corresponda sobre la organización, el control del aprovechamiento y el uso eficiente del agua, así como sobre las medidas para lograr el consumo menor posible de ésta, y en todo caso colaborar con ellos en la ejecución de dichas actividades.

Sección Segunda

De los Mecanismos Económicos para Estimular y Promover el Uso Eficiente de las Aguas Terrestres

ARTICULO 9.- Las obligaciones y regulaciones de esta Sección serán de aplicación a todos los usuarios que se abastezcan tanto de aguas superficiales como subterráneas, con independencia de que las obtengan directamente por sus propios medios o les sean suministradas por un tercero.

ARTICULO 10.- Todo usuario no doméstico de aguas terrestres estará obligado a tributar por el derecho de uso siempre que la capte directamente con sus propios recursos desde obras o medios de conducción y distribución no administrados por terceros, ya sea con fines técnico-productivos o para a prestación de un servicio.

ARTICULO 11.- Los usuarios que reciban aguas terrestres mediante el servicio de provisión ofrecido por un tercero estarán obligados a pagar a éste por dicha prestación.

ARTICULO 12.- Las tarifas por los servicios de provisión de agua se cobrarán a los usuarios domésticos sobre la base de los principios siguientes:

- a) Que reciban el servicio mediante acueductos, sistemas o medios operados por terceros;
- b) Que la persona o familia que reciba el servicio cuente con la conexión intradomiciliaria; y
- c) Que el servicio resulte adecuado tanto en cantidad como en calidad, lo cual definirán, para cada caso las disposiciones reglamentarias que se emitan para la aplicación de lo establecido en este Decreto-Ley.

ARTICULO 13.- Las regulaciones para la aplicación de lo establecido en los artículos 10 y 11 incluirán tasas de recargo por el exceso de consumo de agua.

ARTICULO 14.- Las tasas de recargo a que se refiere el artículo 13 se ajustarán a las reglas siguientes:

- a) Podrán ser diferenciadas según usuarios, territorios o cuencas distintos, en función de la situación del balance de agua y las exigencias de las necesidades económicas y sociales; y
- b) Para un mismo territorio o cuenca y para un mismo usuario, tanto cuando se pague por el derecho de uso, como cuando se pague tarifa por el servicio de provisión de agua, el monto del recargo por unidad de volumen consumida en exceso será similar, dentro de cada rango de la tasa que se establezca.

CAPITULO III

DE LA PRESERVACIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS TERRESTRES Y DE LA PROTECCIÓN DE LAS FUENTES, CURSOS NATURALES DE AGUAS, OBRAS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS

ARTICULO 15.- El que realice investigaciones geológicas y edafológicas, extracción de minerales, explotación de canteras y construcción de terraplenes y embalses, deberá adoptar las medidas que se requieran para la preservación y el saneamiento de los recursos hídricos del país. A esos efectos ha de coordinar previamente de conformidad con las normas que rijan el Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, con cuantos organismos de la Administración Central del Estado fuere procedente, en lo que a cada uno de estos compete.

También deberá adoptar las medidas que se requieran para la preservación y el saneamiento de las aguas terrestres, cuando realice cualquier otra actividad que pueda dañar este recurso natural.

ARTICULO 16.- Se prohíbe, sin la autorización previa de Recursos Hidráulicos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de este Decreto-Ley:

- a) Efectuar vertimientos directos o indirectos que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas o de degradación de su entorno; y

- b) Acumular basuras, escombros o sustancias de cualquier naturaleza que puedan contaminar las aguas terrestres o degradar su entorno, con independencia del lugar en que se depositen.

ARTICULO 17.- El que producto de sus actividades genere sustancias residuales que puedan dañar la calidad de las aguas terrestres, estará en la obligación de controlar y garantizar el funcionamiento de las obras e instalaciones destinadas al tratamiento y la disposición final de dichas sustancias, según las normas y regulaciones establecidas.

ARTICULO 18.- Todo proyecto de instalación industrial, agropecuaria o social, así como toda documentación de inversiones, habrá de incluir las prescripciones relativas al tratamiento y la disposición adecuada de los residuales o productos de cualquier naturaleza que pueda contaminar el agua, y además la evaluación de la efectividad de dichas prescripciones, para su aprobación por Recursos Hidráulicos.

ARTICULO 19.- La construcción de cualquier sistema de disposición final de residuales líquidos requerirá la autorización expresa y previa de Recursos Hidráulicos, salvo que el punto de disposición final esté ubicado en las aguas jurisdiccionales. Recursos Hidráulicos, a estos efectos, coordinará sus decisiones con el Ministerio de Salud Pública, en lo que proceda.

La autorización a que se refiere el párrafo anterior ha de señalar, con independencia de las demás que fije el Reglamento de este Decreto-Ley, las especificaciones siguientes:

- a) Los límites máximos que se impondrán a la composición y el volumen del effluente; y
- b) El punto o lugar de disposición final.

ARTICULO 20.- Los trabajos y demás actividades para la recuperación de terrenos inundados salinos o salinizados, así como cualquier sistema de drenaje, estarán condicionados al cumplimiento de la obligación de no reducir la disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos.

ARTICULO 21.- Con la finalidad de proteger y controlar la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas, se prohíbe, sin la autorización expresa y previa de Recursos Hidráulicos:

- a) Construir o modificar pozos, tanto con fines de extracción de aguas subterráneas cuyo caudal exceda de un litro por segundos como para la recarga o infiltración artificial;
- b) Construir trincheras o canales que drenen el manto freático, así como cualquier otra obra que lo perjudiquen;
- c) Instalar equipos de bombeo o modificar las especificaciones de instalación de éstos; y
- ch) Modificar las especificaciones de explotación fijadas para cada pozo.

ARTICULO 22.- En todo diseño, construcción o explotación de obras hidráulicas destinadas a la regulación y el aprovechamiento de las aguas terrestres, se tomarán en cuenta las medidas que se requieran para preservar la vida acuática, la explotación pesquera, y el equilibrio ecológico, de acuerdo con las normas establecidas al efecto por los organismos competentes.

ARTICULO 23.- Con el objetivo de favorecer el desarrollo de la acuicultura en las aguas terrestres, y de proteger éstas contra contaminación, se cumplirán con carácter obligatorio las reglas siguientes:

- a) La cría extensiva de peces, así como la captura de éstos, se podrá realizar en todos los cuerpos de aguas terrestres, independientemente del uso a que estén destinados, con la única limitación de cumplir las normas y demás disposiciones establecidas por Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Salud Pública para proteger las fuentes de abastecimiento a la población, evitar el azolvamiento, así como la degradación del entorno;
- b) No realizar la cría intensiva ni semintensiva de peces en embalses destinados al abastecimiento de agua a la población;
- c) Condicionar la realización de la cría intensiva y semintensiva de peces en los demás embalses a la aprobación expresa de Recursos Hidráulicos y del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de asegurar que el desarrollo de la indicada actividad no entre en contradicción con los objetivos específicos de protección de los recursos hídricos y del medio ambiente en general en cada caso; y
- ch) Cuando se estime necesario extraer total o parcialmente el agua de un embalse para la captura de las especies existentes, se requerirá la aprobación previa tanto de Recursos Hidráulicos como del que administre el embalse, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del régimen de explotación y del plan de asignaciones de agua de esa fuente.

ARTICULO 24.- Se prohíbe, sin la autorización previa y expresa de Recursos Hidráulicos:

- a) Ejecutar cualquier tipo de obra o trabajo destinado a embalsar, derivar, captar, controlar o drenar aguas superficiales, así como infiltrarlas en el manto subterráneo, a su paso por predios o heredades, tanto rurales como urbanos;
- b) Construir puentes, alcantarillas u otras obras que limiten la capacidad de conducción de los cauces naturales o artificiales;
- c) Realizar cualquier tipo de obra o trabajo que pueda obstruir o dificultar la capacidad de evacuación de las aguas superficiales mediante el drenaje subterráneo; y
- ch) Efectuar cualquier tipo de trabajo o actividad que impida u obstaculice el funcionamiento normal de las obras de protección contra inundaciones o de las obras de drenaje.

ARTICULO 25.- Cuando se trate de la extracción de arena u otros materiales de construcción del cauce de los ríos y zonas de protección de éstos, la autorización correspondiente, habrán de otorgarla conjuntamente el Ministerio de la Industria Básica y Recursos Hidráulicos, a los efectos de evitar los daños posibles.

ARTICULO 26.- Sin la autorización previa y expresa de quien las administre, en las obras e instalaciones hidráulicas, así como en sus zonas de protección, se prohíbe:

- a) El tránsito y permanencia de personas, vehículos, equipos y animales fuera de los lugares destinados a esos fines;
- b) Construir obras viales o tuberías conductoras, instalar líneas eléctricas, hacer siembras o plantaciones así como llevar a cabo cualquier otro tipo de construcción o instalación; y
- c) Realizar cualquier otra actividad no prevista en los incisos anteriores que pueda dañar o alterar el estado técnico de una obra o instalación hidráulica.

ARTICULO 27.- El que administre, opere o explote instalaciones hidráulicas estará obligado a garantizar el mantenimiento y la conservación de éstas, inspeccionarlas periódicamente, así como adoptar las medidas que se requieran para su seguridad y funcionamiento correctos, de acuerdo con las regulaciones establecidas.

ARTICULO 28.- A los efectos de garantizar la preservación y el saneamiento de las aguas terrestres y la protección de las fuentes, cursos naturales de agua, obras e instalaciones hidráulicas, Recursos Hidráulicos, sobre base de los principios establecidos, estará obligado a:

- a) Controlar la calidad de los recursos hídricos según su destino y aprovechamiento, en coordinación con quien corresponda, en lo que sea procedente, incluida la prohibición de ubicar en sus zonas de influencia, instalaciones cuyos residuales, incluso tratados, constituyan riesgos potenciales de contaminación;
- b) Adoptar las medidas que requiera el control de cumplimiento de la obligación consistente en que las sustancias residuales de las actividades económicas y sociales reciban, antes de ser vertidas a medio ambiente, el tratamiento adecuado que garantice, según las normas establecidas, que no se contaminen los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas;
- c) Establecer las normas y dictar las disposiciones destinadas a garantizar la preservación y el saneamiento de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas;
- ch) Ejercer el control del cumplimiento de la prohibición del vertimiento de escombros o basuras en zonas cárnicas, cauces de ríos y arroyos, cuevas, sumideros, depresiones del terreno y drenes, con la finalidad de prevenir el peligro de inundaciones y evitar perjuicios sanitarios que pudieran resultar de la interferencia al escurrimiento o infiltración normales de las aguas pluviales y fluviales;
- d) Poner en práctica las medidas hidrotécnicas que considere necesarias para preservar la disponibilidad y la calidad de las aguas en los casos de desastres naturales u otras situaciones imprevistas que puedan dañarlas;
- e) Adoptar las medidas pertinentes para asegurar, en cada cuenca subterránea, la protección contra la contaminación y la prevención de su posible agotamiento y salinización, entre ellas las siguientes:
 - Limitar o suspender temporalmente la extracción de las aguas subterráneas en áreas o en pozo específicos;
 - Variar o suspender temporalmente la extracción autorizada a los usuarios, cuando en virtud de las circunstancias se requiera;
 - Ordenar la redistribución espacial de las captaciones existentes;
 - Proponer al Consejo de Ministros la declaración de zonas o acuíferos vedados o superexplotados;
 - Limitar o suspender, la infiltración artificial de aguas, tanto residuales como de otras procedencias;

Cuando la aplicación de alguna de las medidas a que se refiere este inciso implique una alteración posible del plan de asignaciones de agua aprobado, Recursos Hidráulicos, en coordinación con la Junta Central de Planificación, evaluará esas circunstancias para atemperar las decisiones con vistas a conciliar los factores económicos con los requerimientos de la protección del recurso hasta donde este último lo permita;

- f) Emitir las evaluaciones y dictámenes referentes a la capacidad de las cuencas subterráneas y al estado cualitativo de sus aguas, con el objetivo de asegurar la explotación racional de éstas y evitar su agotamiento y salinización;
- g) Conceder, y según el caso cancelar, las autorizaciones para la ejecución de obras e instalaciones hidráulicas destinadas a la captación, el almacenamiento, la derivación, el control, el encauzamiento, la recarga artificial y el saneamiento de las aguas terrestres, según lo establecido en este Decreto-Ley, su Reglamento, las regulaciones para el proceso inversionista, y en las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia;
- h) Disponer la modificación, la remodelación o el acondicionamiento de las obras e instalaciones hidráulicas cuando perjudiquen la protección de las aguas contra la contaminación, así como modificar, restringir o prohibir por las causas señaladas, su funcionamiento y operación;
- i) Establecer, en coordinación con los órganos y organismos que corresponda, en lo que respectivamente les concierna, las normas relativas a la creación, la conservación y el uso de las zonas de protección que con carácter obligatorio se instituyan con la finalidad de proteger los cuerpos de agua, los cauces naturales, y artificiales, las fuentes de abastecimiento de aguas subterráneas para la población y las obras e instalaciones hidráulicas contra peligros de contaminación, azolvamiento y otras formas de degradación o deterioro;

Cuando se trate de zonas de protección de naturaleza forestal, conocidas como bosques protectores, dichas normas han de ser establecidas conjuntamente por el Ministerio de la Agricultura y Recursos Hidráulicos;

- j) Autorizar el uso de las zonas a que se refiere el inciso anterior con fines económicos o sociales, siempre que la actividad para la cual se solicite la autorización no perjudique al objeto protegido, ni al régimen y calidad de las aguas. Cuando se trate de bosques protectores esta autorización ha de ser otorgada conjuntamente por el Ministerio de la Agricultura y Recursos Hidráulicos;

- k) Controlar que en la construcción de todo embalse, antes de proceder al cierre de la presa, se eliminen del vaso la vegetación y todo lo que puede alterar la calidad del agua y la explotación pesquera;
- l) Organizar y dirigir la vigilancia y la protección para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas relativas al aprovechamiento, la conservación, el saneamiento y el uso racional de las aguas terrestres, así como la protección de sus fuentes, cauces naturales y obras e instalaciones hidráulicas; y
- ll) Coordinar con el Ministerio de Salud Pública, en lo que proceda, la realización de las actividades a que se refieren los incisos anteriores, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley de las Disposiciones Sanitarias Básicas.

ARTICULO 29.- A los efectos del cumplimiento de las disposiciones de este Decreto-Ley y del mencionado Decreto-Ley de las Disposiciones Sanitarias Básicas, Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente, tendrán las atribuciones y funciones siguientes:

- a) Establecer las normas sobre las características que deberán tener las aguas residuales para su vertimiento en los cuerpos receptores de aguas terrestres;
- b) Controlar el cumplimiento de la prohibición de ubicar en zonas de influencia de fuentes de abastecimiento a la población, instalaciones cuyos residuales, incluso tratados, constituyan riesgos potenciales de contaminación;
- c) Autorizar, en casos especiales, el vertimiento de aguas albañales en sistemas de drenaje pluvial, así como fijar el grado de tratamiento previo a que se deberán someter;
- ch) Aprobar la implantación de cualquier sistema de disposición final de desechos sólidos cuando éstos impliquen un riesgo de contaminación de las aguas terrestres;
- d) Aprobar la reutilización de las aguas de drenaje y residuales, tratadas o no, para el riego de cultivos de vegetales que se ingresan sin cocción o para la producción y elaboración de productos alimenticios;
- e) Prohibir, provisional o definitivamente, cuando proceda, oído el parecer del Ministerio de la Agricultura o del Ministerio del Azúcar, según el caso, el riego de insecticidas, herbicidas, fertilizantes y otras sustancias tóxicas en las áreas de las cuencas superficiales y subterráneas destinadas al abastecimiento de aguas de consumo humano, industrial, agropecuario y la producción pesquera; y

- f) Autorizar el procedimiento para el tratamiento de las aguas suministradas por los acueductos.

ARTICULO 30.- Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 28 y 29, Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Salud Pública coordinarán lo procedente con la Comisión de Energía Atómica de Cuba, a fin de prevenir la contaminación radiactiva de las aguas terrestres.

CAPITULO IV

DEL ESTUDIO, LA PLANIFICACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, LAS INSTALACIONES Y LAS OBRAS HIDRÁULICAS

Sección Primera

Del Estudio y la Planificación

ARTICULO 31.- El estudio y la planificación de los recursos hídricos se encaminarán a crear las bases organizativas y el conocimiento necesario para asegurar la preservación y uso racional de las aguas terrestres.

ARTICULO 32.- Con el objetivo de lograr la eficiencia y la racionalidad mayores en la regulación, el aprovechamiento, el uso, la preservación y el saneamiento de las aguas terrestres en armonía con los demás recursos naturales y con el desarrollo económico-social del país se realizarán estudios técnico-económicos integrales denominados esquemas de aprovechamiento hidráulico, los que tendrán carácter nacional, regional, provincial o zonal.

ARTICULO 33.- Los esquemas a que se refiere el artículo 32 constituirán documentos básicos para elaborar los planes rectores a los que se deberá someter toda actuación relativa al desarrollo, el aprovechamiento y la protección de los recursos hídricos, así como las que se refieran a la protección de las actividades económicas y sociales y el medio ambiente natural contra los efectos nocivos que pudieran causar las aguas terrestres.

Los planes rectores a que se refiere el presente artículo los aprobará la entidad estatal competente.

ARTICULO 34.- A los efectos de garantizar el estudio y la planificación de los recursos hídricos, Recursos Hidráulicos, sobre la base de los principios

establecidos en la Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, está obligado a:

- a) Dirigir y coordinar los estudios y los trabajos que se lleven a cabo para la elaboración de las propuestas relativas a la planificación hidráulica del país;
- b) Elaborar los esquemas de aprovechamiento hidráulico, así como las propuestas de los planes rectores a que se refieren los artículos 32 y 33;
- c) Elaborar las propuestas de balances hídricos nacionales, regionales, provinciales y zonales a corto, mediano y largo plazo, según el uso y presentar estas propuestas conjuntamente con las de los planes de asignaciones correspondientes, una vez compatibilizadas las necesidades con las disponibilidades de agua, para su consideración y aprobación por el órgano u organismo competente;
- ch) Realizar los estudios y las evaluaciones necesarios para determinar el potencial y los recursos hídricos superficiales y subterráneos disponibles así como mantener actualizado el inventario de los recursos y el censo de usuarios de éstos;
- d) Organizar, dirigir, operar y controlar, incluido el control de calidad de las aguas, las redes de observación hidrológica;
- e) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar, según el caso, las investigaciones, los estudios y los trabajos hidrológicos, hidrogeológicos e hidroquímicos;
- f) Organizar y controlar el fondo hidroeconómico, con el objetivo de recopilar y mantener actualizada la información hidroeconómica en general, de manera que incluya, entre otros datos, los del ciclo hidrológico, el censo de pozos, el censo de usuarios de las aguas, los de los estudios hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos e hidroeconómicos, los esquemas de aprovechamiento hidráulico, los de los proyectos de obras e instalaciones hidráulicas principales así como los de las investigaciones, trabajos y datos relativos a las normas de consumo de agua en la industria, la agricultura y otras actividades y al control de la contaminación de las aguas terrestres;
- g) Establecer las normas técnicas y los índices de eficiencia a los cuales se deberán ajustar los proyectos de las obras e instalaciones hidráulicas, tales como:
 - Presas, derivadoras, canales magistrales y estaciones de bombeo;
 - Sistemas de riego y drenaje agrícolas;
 - Obras de drenaje, desecación de tierras, protección contra inundaciones y otras destinadas a la regulación de las aguas superficiales;

- Obras de recarga artificial y mejoramiento de cuencas subterráneas;
 - Sistemas para el abastecimiento de agua a los asentamientos humanos y las industrias;
 - Sistemas de alcantarillado y de drenaje pluvial; y
- h) Asegurar en lo que le concierna, y exigir y controlar respecto a terceros, el cumplimiento de las normas a que se refiere el inciso anterior, y que los proyectos de dichas obras estén en concordancia con los esquemas de aprovechamiento hidráulico y los planes rectores correspondientes, con la finalidad de garantizar que estos proyectos incluyan las instalaciones y medidas destinadas a asegurar la explotación eficiente, la vigilancia técnica y la preservación de las obras, así como la protección y el aprovechamiento óptimo de las aguas terrestres.

ARTICULO 35.- A los efectos de lo que por este Decreto-Ley se establece, Recursos Hidráulicos será el organismo facultado para:

- a) Emitir las instrucciones metodológicas requeridas para la elaboración de los balances hídricos, de los planes de asignaciones de asignaciones de agua y de los planes rectores del desarrollo, el aprovechamiento y la protección de aguas terrestres del país;
- b) Elaborar, en coordinación con los demás organismos de la Administración Central del Estado y los órganos provinciales del Poder Popular, los balances de agua a corto, mediano y largo plazo, así como los proyectos de planes de asignaciones correspondientes con la finalidad de garantizar las proporciones adecuadas, según los intereses de la economía y las necesidades sociales y someterlos a la aprobación del órgano estatal competente;
- c) Elaborar, en coordinación con la Junta Central de Planificación, sobre la base de las propuestas de los demás organismos de la Administración Central del Estado y de los órganos provinciales del Poder Popular, para su aprobación por el órgano estatal competente, el proyecto de los planes rectores del desarrollo, el aprovechamiento y la protección de las aguas terrestres;
- ch) Proponer al Consejo de Ministros, o aprobar cuando fueren de su competencia, las modificaciones del plan de asignaciones de agua que considere necesaria, de acuerdo con lo que establece el inciso ch) del artículo 45; y
- d) Revisar las normas de consumo de agua propuestas por los organismos de la Administración Central del Estado y someterlas a la aprobación del organismo estatal competente.

ARTICULO 36.- Todos los usuarios no domésticos presentarán a Recursos Hidráulicos, para la elaboración de los balances hídricos y de los planes de asignación de agua, sus respectivas solicitudes debidamente fundamentadas y de acuerdo con las instrucciones metodológicas establecidas al efecto.

ARTICULO 37.- Todo el que efectúe observaciones, investigaciones, estudios, proyectos o cualquier otro tipo de trabajo o actividad que genere u ofrezca alguna de las informaciones a que se refiere el inciso i) del artículo 34, estará obligada a proporcionarla a Recursos Hidráulicos, para que éste las incorpore al fondo hidroeconómico.

Sección Segunda **De la Administración de los Recursos Hídricos**

ARTICULO 38.- La administración de los recursos hídricos tendrá por objetivo satisfacer las necesidades de agua de las actividades económicas y sociales de acuerdo con el plan, conjugando dicho objetivo con las características de las fuentes, de modo que se asegure tanto el aprovechamiento racional como la conservación de estos recursos.

ARTICULO 39.- El uso de las aguas terrestres requerirá, según lo establecido al efecto, el otorgamiento previo del derecho de uso, siempre de acuerdo con las regulaciones de este Decreto-Ley y su Reglamento.

ARTICULO 40.- Recursos Hidráulicos será el encargado de otorgar o cancelar, según el caso, el derecho de uso de las aguas terrestres, excepto cuando se trate de usuarios vinculados con los sistemas de abastecimiento a la población, puesto que en ese caso la facultad corresponderá a quien administre el servicio.

La facultad de la entidad del que administre el servicio a que se refiere como excepción el párrafo anterior será ejercida de acuerdo con las reglas siguientes:

- a) Cuando se trate de usuarios domésticos aislados e independientes, la ejercerán libremente conforme a lo establecido en el Reglamento de este Decreto-Ley siempre que no exceda la cuantía del derecho de uso de agua a ella concedida;
- b) Si el usuario no fuere doméstico, el ejercicio de esta facultad quedará condicionado a la conformidad previa de Recursos Hidráulicos para cada caso concreto, con arreglo al los límites que fije el Reglamento de este Decreto-Ley.

ARTICULO 41.- No se requerirá del otorgamiento para el uso de aguas con fines domésticos, cuando éstas corran por cauces naturales o por canales, acequias u otros conductos artificiales, al descubierto, el que se ejercerá sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Decreto-Ley y su Reglamento para obras e instalaciones hidráulicas.

ARTICULO 42.- Para otorgar el derecho de uso a que se refiere el artículo 40, se considerarán entre otros, los aspectos fundamentales siguientes:

- La utilización racional de las aguas superficiales y las subterráneas;
- Las prescripciones de los esquemas de aprovechamiento hidráulico y los planes rectores a que se refieren los artículos 32 y 33.

ARTICULO 43.- El derecho de uso de aguas terrestres otorgado se podrá cancelar temporal o definitivamente cuando el usuario no cumpla los requerimientos y condiciones establecidas, así como cuando utilice el agua para fines distintos a los que hayan dado lugar a la concesión de éstos.

ARTICULO 44.- La administración de embalses o de otras obras, destinadas a la captación de aguas superficiales, cuando no se ejecute por Recursos Hidráulico, se llevará a cabo sobre la base de las reglas generales siguientes:

- a) Quien administre y opere no tendrá derecho a extraer volúmenes superiores a los que le hayan sido autorizados específicamente en el plan de asignaciones de agua; y
- b) La operación del embalse u obra estará sujeta a las normas establecidas por Recursos Hidráulicos, en coordinación con los organismos competentes, con la finalidad de:
 - Garantizar la seguridad del embalse o la obra;
 - Asegurar el cumplimiento de los planes de asignación de agua de todos los usuarios vinculados con esa fuente;
 - Proteger la vida acuática y la producción pesquera.

ARTICULO 45.- A fin de garantizar cuanto se refiera a la administración de los recursos hídricos, las instalaciones y las obras hidráulicas, Recursos Hidráulicos, sobre la base de los principios establecidos en la Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, estará obligado a:

- a) Administrar, dentro del marco de los planes de asignación aprobados, los recursos de agua superficiales y subterráneas, así como regular y controlar su explotación;

- b) Controlar el uso y la eficiencia en el aprovechamiento de todas las aguas terrestres, incluidas las residuales y salobres;
- c) Responsabilizarse con la ejecución y el control del cumplimiento, una vez aprobados, de los planes de asignaciones de agua a que se refiere el inciso c) del artículo 35;
- ch) Realizar, y según el caso proponer al organismo competente, los ajustes operativos del plan de asignaciones de agua que se requieran en virtud del comportamiento real de las disponibilidades de ésta durante la ejecución de dicho de acuerdo con lo que al respecto determina el Reglamento de este Decreto-Ley;
- d) Regular y controlar la explotación de las obras e instalaciones hidráulicas que no administra;
- e) Administrar, operar y mantener las obras hidráulicas de captación, conducción y distribución de aguas terrestres fundamentales así como las de protección contra inundaciones y para la recarga artificial de las cuencas subterráneas, con lo que al respecto tenga establecido;
- f) Ejerce la rectoría de la actividad de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial.

ARTICULO 46.- En caso de accidente o desastre natural que reduzca la disponibilidad de las aguas o cree peligro de contaminación, las autoridades provinciales o municipales a cargo de la defensa civil podrán variar temporalmente el plan de asignaciones de agua, para asegurar las necesidades personales y sanitarias de la población, de los servicios y de otras actividades vitales, siempre que no hayan tenido tiempo o posibilidad de hacer las consultas correspondientes. Dichas autoridades deberán además informar de inmediato sus decisiones a Recursos Hidráulicos, a la Junta Central de Planificación y a cuantos otros organismos de la Administración Central del Estado competan dichas decisiones.

ARTICULO 47.- Se faculta al Ministerio de la Industria Básica para realizar la prospección de las aguas termales y mineromedicinales, así como para regular y controlar su uso y explotación cuando constituyan reservas de minerales útiles.

Cuando el Ministerio de la Industria Básica considere que las aguas de determinadas fuentes deban ser declaradas áreas mineras reservadas o cotos mineros, conciliará su propuesta con Recursos Hidráulicos antes de elevarla a la consideración del Consejo de Ministros.

ARTICULO 48.- Las aguas termales y mineromedicinales podrán, con aprobación previa del Ministerio de Salud Pública desde el punto de vista sanitario, ser objeto de uso general, con arreglo a lo dispuesto en este Decreto-Ley, cuando se desechen o salgan de las instalaciones en que se hayan utilizado, con fines curativos u otros.

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: En relación con las disposiciones de la Sección Segunda del Capítulo II de este Decreto-Ley, los Comités Estatales de Finanzas y de Precios quedan encargados, de acuerdo con las facultades que les han sido conferidas, para fijar la cuantía de los pagos que los usuarios deberán efectuar por concepto del derecho de uso, así como la cuantía de las tarifas por el servicio de provisión de agua.

SEGUNDA: También en relación con las referidas disposiciones, los Comités Estatales de Finanzas y Precios quedan encargados de establecer, a propuesta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, las tasas de recargo por excesos de consumo de agua en los casos en que se apliquen el pago por derecho de uso y las tarifas por el servicio de provisión de agua.

TERCERA: El Consejo de Ministros podrá acordar la aplicación progresiva de lo dispuesto en la Sección Segunda del Capítulo II de este Decreto-Ley, a los usuarios no domésticos.

CUARTA: El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos podrá excepcionalmente exonerar del pago del agua a determinados usuarios, en los casos que por interés de la economía nacional así corresponda.

QUINTA: El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos coordinará con el Comité Estatal de Normalización todo lo relacionado con la elaboración, la aprobación, la implantación y la inspección de las normas técnicas requeridas para la aplicación correcta de este Decreto-Ley.

SEXTA: El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos coordinará con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con el Ministerio del Interior, la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones de este Decreto-Ley en las unidades y las dependencias de éstos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Los usuarios actuales de las aguas terrestres, con excepción de los domésticos, estarán obligados a inscribirse como tales en las unidades organizativas provinciales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en el término de dos meses, contados a partir de la fecha de la publicación de este Decreto-Ley en la Gaceta Oficial de la República, a los efectos de concederles, cuando proceda, el derecho de uso a que se refiere el artículo 40.

SEGUNDA: El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, y en coordinación con los demás organismos de la Administración Central del Estado que proceda, determinarán en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la promulgación de este, Decreto-Ley, las normas generales de vertimiento a que se refiere el inciso a) del artículo 29.

TERCERA: Toda entidad o persona que deba cumplir lo establecido en este Decreto-Ley ha de adecuar sus actividades a las disposiciones de éste en el término de doce meses, contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, cuando tales actividades no impliquen la necesidad de realizar inversiones.

Este término no excusa del cumplimiento de las disposiciones que por su naturaleza sea posible cumplir de inmediato.

CUARTA: Cuando en cumplimiento de lo establecido en este Decreto-Ley, conforme a la Disposición Final Segunda de la Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, se requieran nuevas inversiones en instalaciones existentes, los obligados a esto dispondrán de un término de doce meses contados a partir de la fecha en que entre en vigor su Reglamento, para la elaboración de las propuestas de las medidas necesarias y su presentación a la Junta Central de Planificación, la que a su vez, oído el parecer del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, las someterá a la consideración del Consejo de Ministros.

El término conferido no excusará a los obligados, de adoptar o aplicar las medidas que estén a su alcance con el objeto de atenuar los daños que pudieran ocurrir como consecuencia de la inexistencia de la obra o instalación requerida.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos someterá a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Reglamento de este Decreto-Ley en el término de noventa días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

SEGUNDA: La Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, el Decreto-Ley de las Disposiciones Sanitarias Básicas, y el Código Civil serán de aplicación supletoria en lo que no esté previsto en este Decreto-Ley.

TERCERA: Se derogan en todas sus partes:

- I -El Real Decreto de 9 de enero de 1891, que dispuso la vigencia en Cuba de la Ley de Aguas, de 13 de junio de 1879
- El Real Decreto de 13 de enero de 1891, que puso en vigor el Reglamento de la Ley de Aguas.
- II -Orden Militar 47 de 22 de febrero de 1902, sobre el servicio de agua en la Ciudad de La Habana.
- III Leyes:
 - Sin número, de 4 de julio de 1911, que prohíbe arrendar o conceder a particulares o compañías, o controlar servicios de abastecimiento de agua, cuyas obras hubiera costado el Estado;
- IV Acuerdo Ley 39, de 8 de junio de 1958.
- V Decretos Presidenciales:
 - 1789, de 7 de mayo de 1948;
 - 5033, de 12 de noviembre de 1951.
 - 2433, de 9 de agosto de 1955;
 - 290, de 2 de febrero de 1956;
- VI Decretos:
 - 943, de 19 de octubre de 1912;
 - 459, de 25 de marzo de 1929;
 - 66, de 3 de enero de 1934; y
 - 1887, de 9 de mayo de 1952.

Igualmente se derogan cuantas otras disposiciones legales se opongan a lo que por medio de este Decreto-Ley se dispone.

CUARTA: Este Decreto-Ley comenzará a regir a partir de los 30 días de su

publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a 1ro. de julio de 1993.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, LUNES 12 DE Septiembre DE 1994

AÑO XCII

Número 11

Página 161

Decreto-Ley 153.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley 33, de 10 de enero de 1981 de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, en su artículo 95, dispone que la protección de los recursos agropecuarios y la utilización racional de los mismos comprende, entre otros aspectos, la salud vegetal, y establece las disposiciones generales en esta materia.

POR CUANTO: La legislación sobre Sanidad Vegetal vigente en nuestro país data de principios de siglo, que en la actualidad resulta obsoleta.

POR CUANTO: Los avances alcanzados por nuestro país en esa materia y las perspectivas económicas del desarrollo agrícola, requieren la adopción de nuevas regulaciones que le permitan un mejor funcionamiento al sistema fitosanitario en todo el territorio nacional.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las facultades que le han sido conferidas por el artículo 90, inciso e) de la Constitución de la República, resuelve dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 153 DE LAS REGULACIONES DE LA SANIDAD VEGETAL

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- A los efectos de este Decreto-Ley se entenderá por:

- a) Biopreparado: sustancias de naturaleza biológica y tóxica, así como los compuestos elaborados a partir de las mismas, que manifiestan actividad sobre otros organismos vivos;
- b) Cuarentena: al conjunto de medidas oficiales, dirigidas a la protección de los recursos vegetales, productos de origen vegetal y de los organismos beneficiosos a la agricultura del país contra la introducción desde otros estados de plagas y en el caso de que éstas ya hubieran penetrado, a su localización, erradicación y control con el objetivo de salvaguardar los territorios no afectados así como evitar su traslado a otros países en los cuales existen disposiciones legales dirigidas a evitar su introducción y diseminación;
- c) Material subcuarentenado: todo material sujeto a cuarentena entendiéndose por tales:
 - 1. Las especies de plantas vivas y sus partes (posturas, vástagos, raíces, tubérculos, rizomas, flores y otros);
 - 2. Semillas de plantas de cultivo o de plantas silvestres;
 - 3. Los granos, frutas, hortalizas, legumbres, especias, harinas, tortas, sémolas, afrechos, y demás productos alimentarios en estado natural o semielaborados;
 - 4. Los piensos y forrajes (heno, paja, concentrados, lecho de pajas para el transporte de animales y otros);
 - 5. Productos forestales (bolos de madera, traviesas, madera aserrada de todo tipo, madera laminada o plywood) objetos o artículos de madera y otros;
 - 6. Envases o embalajes de cualquier tipo que puedan ser portadores de plagas;
 - 7. Tierra o suelo y abonos orgánicos, monolitos y muestras de suelo para investigaciones;
 - 8. Productos elaborados o materias primas para la fabricación de artículos industriales tales como: (fibras de algodón, lino y otros);
 - 9. Tabaco en rama;
 - 10. Plantas o hierbas medicinales y material herborizado;

11. Organismos y microorganismos, dañinos o beneficiosos a la agricultura; y
 12. Todo lo que pueda ser portador de plagas a las plantas o productos de origen vegetal.
- ch) Medios biológicos: son los elementos que intervienen como reguladores de plagas que ocasionan daños a las plantas, partes de plantas y productos agrícolas o forestales, tales como: depredadores, parásitos, microorganismos y otras sustancias biológicamente activas;
 - d) Notificación de señalización: la información que se emite por las Estaciones Territoriales de Protección de Plantas a las unidades de producción, relativas al momento de aparición, estadio e intensidad de las plagas que puedan ser causantes de daños a los cultivos, a fin de lograr la mayor efectividad técnica y económica en el control de las mismas dentro de un plazo establecido;
 - e) Objeto de cuarentena vegetal: al organismo nocivo a las plantas que no estando presente o diseminado limitadamente por el territorio nacional, pudiera ser introducido o penetrar independientemente desde el exterior y provocar daños considerables a las plantas, partes de plantas, productos agrícolas o forestales y a los organismos beneficiosos a la agricultura;
 - f) Plaga: cualquier forma de vida animal o vegetal, o cualquier agente patógeno, dañino o potencialmente dañino para las plantas o los productos vegetales;
 - g) Plaguicidas: los productos químicos tóxicos, naturales o sintéticos, que se utilizan con fines económicos o sanitarios para combatir o erradicar las plagas de las partes de plantas y productos agrícolas o forestales;
 - h) Plantas: los árboles, arbustos, plantas en general o partes de éstas, incluidas las semillas;
 - i) Protección fitosanitaria: las actividades que se llevan a cabo para combatir todo tipo de plagas de las plantas o productos agrícolas o forestales, así como para garantizar la no propagación interna y desde o hacia el extranjero;
 - j) Régimen de cuarentena vegetal: las medidas o conjunto de medidas de excepción adoptadas con los cultivos agrícolas, sus productos, las personas y los medios relacionados con ellos, en caso de aparición de plagas objeto de cuarentena en el lugar donde se encuentran o de donde procedan;
 - k) Estado de alerta fitosanitario, al conjunto de medidas preventivas y de protección fitosanitaria adoptadas en casos de brotes de plagas en

otros países o por otras causas; y

- l) Estado de emergencia fitosanitario: la medida o conjunto de medidas extremas adoptadas en caso de surgimiento de plagas a escala nacional o local.

ARTICULO 2.- El presente Decreto-Ley tiene como objetivos principales:

- a) Proteger el territorio nacional de la introducción y la diseminación de plagas que dañen a las plantas o subproductos de origen vegetal objeto de cuarentena, así como de agentes que faciliten a éstos su propagación, por vía accidental o intencional;
- b) Lograr un estado fitosanitario satisfactorio en nuestro país, mediante la prevención, localización, control y erradicación de las plagas de las plantas;
- c) Establecer las regulaciones fundamentales, referentes a la sanidad vegetal que comprendan, entre otras, las relativas a la importación de plantas, así como de productos y materias primas de ese origen;
- ch) Determinar el campo de aplicación de las medidas del Servicio Estatal de Protección de Plantas;
- d) Regular el establecimiento o levantamiento de la cuarentena vegetal, y de los estados de alerta y emergencia fitosanitaria.

ARTICULO 3.- Corresponderá al Ministerio de la Agricultura:

- a) Normar, dirigir, ejecutar y controlar el Servicio Estatal de Protección de Plantas, que incluye:
 - 1. La señalización y el pronóstico de las principales plagas de los cultivos, bosques y pastos;
 - 2. Autorizar la importación, exportación y el control de los materiales subcuarentenados de importación y de exportación cuya certificación se requiera; y
 - 3. El muestreo y la inspección fitosanitaria y de cuarentena vegetal en todas las áreas agropecuarias, cañeras o forestales del país, y en cualquier otro lugar donde existen, transporten, benefician, comercialicen, reproduzcan, investiguen o almacenen productos de origen vegetal, plaguicidas y medios biológicos;
- b) La determinación y el control de plaguicidas y medios biológicos que se deban utilizar en la erradicación de plagas;
- c) Determinación y el control de índices para los medios técnicos, manuales, terrestres y aéreos utilizados en la aplicación de plaguicidas y medios biológicos en la protección fitosanitaria de los cultivos;

- ch) Realizar el diagnóstico oficial de las plagas de las plantas o de los productos de origen vegetal;
- d) Dar a conocer las plagas objeto de cuarentena detectadas en el territorio nacional, así como autorizar su traslado al anterior, en los casos que fuera necesario;
- e) Autorizar si procediera, la importación, exportación, reexportación y circulación de plantas, productos agrícolas o forestales, organismos y microorganismos dañinos o beneficiosos a la agricultura, suelo o material orgánico y cualquier otro material subcuarentenado;
- f) Autorizar los materiales de embalaje que se utilizarán en la importación, exportación y transportación dentro del territorio nacional de productos de origen vegetal y forestal;
- g) Dictar las medidas y regulaciones necesarias para garantizar el estado fitosanitario de las plantas y productos agrícolas o forestales, en estado natural o semielaborado; y
- h) Establecer y controlar los requisitos y regulaciones que deben observarse en las instalaciones y por el personal que labora con plagas, a los efectos de prevenir su diseminación al exterior.

ARTICULO 4.- Los organismos estatales competentes y los representantes y agentes de líneas marítimas y aéreas cubanas y extranjeras estarán obligados a suministrar al Ministerio de la Agricultura con la suficiente antelación la información siguiente:

- a) La llegada al país de barcos y aeronaves, especificando el puerto o aeropuerto de arribo;
- b) Copia de los manifiestos de carga de barcos y aeronaves; y
- e) Las plantas y los productos de origen vegetal provenientes del exterior, con expresión de su lugar de destino.

También estará obligado a suministrar al Ministerio de la Agricultura información, quien posea plantas, productos y materiales almacenados de origen vegetal con destino a la exportación y al consumo interno y quien pretenda abrir al tráfico internacional nuevos puertos y aeropuertos.

ARTICULO 5.- Los que organicen eventos internacionales y actividades turísticas deberán enviar al Ministerio de la Agricultura la información requerida y dentro de los términos previstos, para que se puedan adoptar las medidas profilácticas a fin de prevenir la diseminación de plagas.

ARTICULO 6.- Quienes exploten barcos y aeronaves dedicados a la transportación tanto nacional como extranjera, mediante los respectivos capitanes de los barcos o aeronaves que arriben procedentes del exterior, estarán en la obligación de entregar a los inspectores del Servicio Estatal de Protección de Plantas del Ministerio de la Agricultura los documentos acreditativos del estado fitosanitario de los productos que transporten.

ARTICULO 7.- Los inspectores del Ministerio de la Agricultura señalados en el artículo anterior que practiquen inspecciones de cargamentos importados en barcos, aeronaves, vehículos de transporte terrestre, depósitos de alimentos, bultos postales, y equipajes, cuando estimen que en ellos puedan existir organismos, microorganismos u otros portadores o vectores causantes de plagas a las plantas u otros productos agrícolas y forestales, y por tanto ofrezcan peligro de que se puedan introducir, propagar o diseminar en el territorio nacional podrán:

- a) Impedir el desembarco de plantas, productos de origen vegetal y otros materiales subcuarentenados;
- b) Disponer la aplicación de medidas fitosanitarias;
- c) Disponer la medida cautelar de retención de las plantas o sus productos para su investigación, la que se podrá hacer extensiva a los medios de transporte y a los instrumentos;
- ch) Disponer el decomiso, cuando el caso así lo requiera; y
- d) Someter a régimen de cuarentena los cargamentos, barcos y aeronaves, vehículos de transporte terrestre, depósito de alimentos, bultos postales y almacenes.

ARTICULO 8.- Quienes importen productos de origen vegetal brindarán facilidades para realizar las inspecciones, muestreos y análisis a éstos y abonarán los gastos en que se haya incurrido por las actividades que hubiera sido necesario efectuar en el caso de la introducción en el país de esos productos contaminados con plagas, el Ministerio de la Agricultura no asumirá los gastos en que se incurran cuando sea necesaria la adopción de medidas tales como desinfección, devolución, decomiso, incineración, almacenaje y otros.

CAPITULO II

SERVICIO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE PLANTAS

Sección Primera

Disposiciones Comunes

ARTICULO 9.- El Servicio Estatal de Protección de Plantas estará constituido por el conjunto de actividades y medidas dirigidas a la protección fitosanitaria de los cultivos económicos y de la flora en general, así como sus productos, ya sea en estado natural o semielaborado y se desarrollará en dos vertientes, la protección fitosanitaria y la cuarentena vegetal.

ARTICULO 10.- Las disposiciones sobre el Servicio Estatal de Protección de Plantas que se establecen en este Decreto-Ley, y las que se dicten a su amparo por el Ministerio de la Agricultura se aplicarán a:

- a) Los cultivos agrícolas, forestales y sus productos;
- b) Los bosques, jardines, semilleros, viveros, bancos de semillas y áreas de vegetación natural y artificial;
- c) Las flores, plantas ornamentales, medicinales y material herborizado;
- ch) Las semillas en cualquier estado, materiales de propagación, frutos, tubérculos, bulbos, rizomas, raíces y otras partes de plantas;
- d) Los organismos y microorganismos nocivos a las plantas, en cualquiera de los estados de su ciclo de vida, y los medios biológicos de lucha contra ellos;
- e) Las personas naturales, cubanas o extranjeras y sus pertenencias, que puedan ser portadoras de materiales subcuarentenados o de plagas a la agricultura;
- f) Tierra, abonos orgánicos y cualquier producto u objeto que pueda servir de vehículo o huésped de plagas a la agricultura;
- g) Los medios de transporte que se utilicen para el traslado de pasajeros y materiales subcuarentenados y sus terminales y almacenes, así como las aduanas y oficinas de correo;
- h) Las unidades de producción, almacenes y otros locales y medios en que se reciban, conserven, procesen y mantengan productos agrícolas y forestales o materiales subcuarentenados;
- i) Estaciones de cuarentena de postentrada y áreas colindantes;
- j) Las áreas adyacentes a los puestos fronterizos;
- k) Los materiales que se utilicen para envase, embalaje o aseguramiento de las cargas de productos agrícolas y forestales o de cualquier material subcuarentenado;

- l) Los demás materiales, materias o subproductos que sirvan como reservorios o sean portadores de plagas, para la agricultura;
- ll) Los medios manuales, terrestres o aéreos que se utilicen para la aplicación de plaguicidas y de otros productos fitosanitarios, así como los medios biológicos; y
- m) Instituciones de investigación.

Sección Segunda

Protección Fitosanitaria

ARTICULO 11.- El Ministerio de la Agricultura establecerá las medidas correspondientes a fin de impedir la realización de prácticas que obstaculicen la protección fitosanitaria de las áreas agropecuarias y forestales.

ARTICULO 12.- En función de evitar la diseminación de plagas a los cultivos, se prohibirá la siembra cuando se incumplan las disposiciones relativas a la protección fitosanitarias en general.

ARTICULO 13.- Queda prohibida la utilización de medios de aplicación de productos fitosanitarios con desperfectos que impidan el control de la cantidad de producto a aplicar o que por sus derrames puedan contaminar los suelos, las aguas y el medio ambiente en general.

ARTICULO 14.- Dentro del ámbito de la protección fitosanitaria corresponderá al Ministerio de la Agricultura:

- a) Emitir las notificaciones de señalización y pronóstico de plagas a los efectos de la correcta aplicación de plaguicidas y medios de lucha biológica;
- b) Velar porque se cumplan las disposiciones legales establecidas tanto por el propio Ministerio como por el de Salud Pública, la Aduana General de la República y otros órganos u organismos del Estado competentes, en lo relativo a importación, transporte, almacenamiento, manipulación y aplicación de plaguicidas, y medios de lucha biológica, con el objetivo de, entre otras, coadyuvar a la protección del medio ambiente;
- c) Dirigir y controlar el funcionamiento de los registros fitosanitarios de plaguicidas y de plagas a las plantas;
- ch) Aprobar los plaguicidas de uso agrícola y forestal, así como otros productos fitosanitarios y medios biológicos que se utilicen en las técnicas fitosanitarias;

- d) Impedir, mediante los mecanismos de vigilancia y control que las prácticas de protección fitosanitaria se lleven a cabo contra la fauna silvestre, los biorreguladores naturales, la salud humana, los cultivos agrícolas, el agua y el medio ambiente en general;
- e) Establecer medidas de control contra las epifitias que se presenten o se puedan presentar en el territorio nacional;
- f) Dictar las disposiciones que regulen las actividades de protección fitosanitaria, índices de control de plagas de las plantas, dosis de utilización e índices de aplicación de plaguicidas y medios biológicos; y
- g) Realizar el diagnóstico oficial o su confirmación de las plagas de las plantas o partes de éstas.

ARTÍCULO 15.- El Ministerio de la Agricultura ejercerá el control de las investigaciones sobre las plagas objeto de cuarentena, u otras que expresamente así se establezcan y determinará las entidades encargadas de ello en el territorio nacional.

ARTICULO 16.- Se prohíbe la utilización de microorganismos y plagas que tengan como objetivo la obtención de nuevas especies, razas, u otras con mayor potencial de virulencia y plasticidad ecológica, u otros huéspedes diferentes que los existentes en el territorio nacional.

ARTICULO 17.- Todo material subcuarentenado de importación con fines de investigación científica, relacionado con la sanidad vegetal, se deberá utilizar exclusivamente en las instalaciones de los centros de investigación para los cuales haya sido expedida la autorización por el Ministerio de la Agricultura, y al concluir las pruebas se deberá disponer de ellos en la forma que se determine en cada caso por la autoridad competente del propio Ministerio.

Sección Tercera **Cuarentena Vegetal**

ARTICULO 18.- Dentro del ámbito de la cuarentena vegetal corresponderá al Ministerio de la Agricultura:

- a) Autorizar, controlar, limitar y prohibir la importación y exportación de plantas, productos agrícolas, forestales y otros materiales subcuarentenados;
- b) Supervisar y controlar toda clase de instalaciones o locales donde se reciban o almacenen productos agrícolas y forestales, naturales, pro-

cesados, semielaborados, y todo tipo de plantas susceptibles de ser atacadas por plagas;

- e) Controlar y regular la circulación en el territorio nacional de plantas, partes de plantas, productos agrícolas o forestales y en general, otras materias o materiales relacionados con esa circulación;
- ch) Controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un estado de cuarentena o la adopción de medidas de cuarentena en cualquier lugar del territorio nacional; y
- d) Confeccionar y circular las listas que contengan debidamente precisadas las plagas objeto de cuarentena, así como actualizarlas periódicamente.

ARTICULO 19.- En cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, el Ministerio de la Agricultura podrá declarar los estados de cuarentena y de alerta fitosanitarios, así como su cese, dictando las acciones o medidas que sean necesarias adoptar en cada caso, las que serán de obligatorio cumplimiento.

ARTICULO 20.- A propuesta del Ministro de la Agricultura el Presidente del Consejo de Estado declarará el Estado de Emergencia Fitosanitaria en todo o en parte del territorio nacional y se pondrán en vigor las estructuras previstas por el Sistema Nacional de Defensa Civil para casos de catástrofe y se movilizarán los recursos humanos y materiales para enfrentar las mismas en los distintos niveles; asimismo dispondrá la terminación del referido estado de emergencia.

ARTICULO 21.- Al decretarse un Régimen de Cuarentena y un Estado de Alerta o Emergencia Fitosanitaria se precisarán las responsabilidades de las entidades estatales dentro del marco de sus respectivas atribuciones y funciones, así como de las restantes instituciones y de la ciudadanía en general.

ARTICULO 22.- El Ministerio de la Agricultura, divulgará de inmediato, para conocimiento de todos a quienes concierna, las disposiciones que establezcan un régimen de cuarentena y un estado de alerta o de emergencia fitosanitaria, correspondiéndole cumplir y hacer cumplir las disposiciones que se dicten al efecto.

ARTICULO 23.- En las disposiciones que establezcan un régimen de cuarentena o un estado de alerta o de emergencia fitosanitario, se podrá disponer:

- a) La suspensión temporal o definitiva del acopio de productos vegetales, forestales y de materias primas de origen vegetal, de envases o embalajes contaminados que puedan producir la diseminación de plagas; y
- b) El control del personal relacionado con los cultivos o el foco de la plaga y los medios de transporte, aperos y útiles de labranza.

CAPITULO III

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN, CIRCULACIÓN INTERNA Y CERTIFICADOS

ARTICULO 24.- Los productos de origen vegetal con destino a exportación o importados, así como el material de envase o embalaje, los almacenes e instalaciones y los medios de transporte que se utilicen para ello serán sometidos a saneamiento y descontaminación, siempre y cuando las circunstancias lo requieran.

ARTICULO 25.- Para la exportación, e importación de plantas y productos agrícolas o forestales, será obligatorio el uso de los certificados y permisos que establezca el Ministerio de la Agricultura.

ARTICULO 26.- Los materiales subcuarentenados destinados a la exportación deberán reunir los requisitos de cuarentena establecidos por las autoridades competentes del país receptor y los previstos en los tratados internacionales de los que la República de Cuba sea Parte.

ARTICULO 27.- Cuando por las características de su actividad, se deban establecer contratos o convenios en los cuales se exija el cumplimiento de requisitos fitosanitarios y de desinfección respecto a exportaciones que se pretendan realizar de plantas, partes de plantas productos agrícolas o forestales en estado natural o semielaborados, se deberá solicitar, previamente a la concertación de los contratos, la autorización correspondiente del Ministerio de la Agricultura.

ARTICULO 28.- El que se proponga exportar plantas o partes de plantas, productos agrícolas o forestales en estado natural o semielaborados, amparados por un certificado fitosanitario de exportación, solicitará la correspondiente autorización, cualquiera que sea la cantidad que se pretenda exportar, dentro de los términos y con las formalidades que al efecto establezca el Ministerio de la Agricultura.

ARTICULO 29.- A los efectos de su supervisión, quien posea áreas o cultivos destinados a los fondos exportables, los informará al Ministerio de la Agricultura en las oportunidades que al efecto determine ese organismo.

ARTICULO 30.- Quien se proponga importar plantas u otros materiales subcuarentenados, estará obligado a solicitar previamente el permiso correspondiente y se deberá interesar por los requisitos cuarentenarios que deban cumplimentar los productos que se disponga importar, según lo que al efecto establezca el Ministerio de la Agricultura.

ARTICULO 31.- Los materiales subcuarentenados objeto de importación, a su llegada a nuestro país deberán reunir los requisitos que especifique el permiso correspondiente y además los que se hubieran establecido contractualmente.

ARTICULO 32.- Se considerarán válidos únicamente, a los efectos de acreditar las condiciones fitosanitarias de las importaciones, los certificados expedidos por autoridades extranjeras que:

- a) Correspondan a lo establecido en los tratados internacionales de los que Cuba es parte sobre la materia; y
- b) Se ajusten a los requerimientos vigentes en Cuba.

ARTICULO 33.- Los certificados y permisos fitosanitarios serán expedidos por el Ministerio de la Agricultura, y a esos efectos podrá determinar la necesidad de someter a pruebas de laboratorio muestras de los productos que requieran comprobaciones o de cualquier otra investigación fitosanitaria.

ARTICULO 34.- Todo traslado de material vegetal destinado a la multiplicación agámica, requerirá el correspondiente certificado fitosanitario de libre tránsito cuando se trate de plagas cuarentenadas o peligrosas declaradas como tales de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de la Agricultura.

CAPITULO IV

PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y DE MEDIOS BIOLÓGICOS

ARTICULO 35.- Los productores agropecuarios, forestales y de medios biológicos estarán obligados a:

- a) Cumplir las normas técnicas, disposiciones, programas de defensa e

instrucciones y metodológicas técnicas dictadas por el Ministerio de la Agricultura para regir en el ámbito de la Sanidad Vegetal;

- b) Cumplir en los plazos que se establezcan, las orientaciones técnicas sobre las notificaciones de señal de pronósticos de plagas de las plantas;
- c) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad y productividad de los medios de aplicación de productos fitosanitarios;
- ch) Informar a las instancias correspondientes del Servicio Estatal de Protección de Plantas la aparición y diseminación de plagas en los cultivos a su cargo, su intensidad, así como las medidas adoptadas para su control;
- d) Cumplir las disposiciones de los Ministerios de Salud Pública, del Interior y de la Agricultura, y cualesquiera otras referentes a la protección del medio ambiente y de la salud humana en el almacenamiento, el transporte, la manipulación y la aplicación de plaguicidas y medios biológicos, así como su recuperación y destrucción; y
- e) Disponer, según se establezca, del personal técnico, así como de los productos fitosanitarios y medios técnicos necesarios para la protección y el control de las plagas de las plantas.

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: Sin perjuicio de la atribución general del Ministerio de la Agricultura de dirigir y controlar la aplicación de las disposiciones legales de Sanidad Vegetal, se autoriza al Ministerio del Azúcar, que tiene el control de la actividad fitosanitaria del cultivo de la caña de azúcar, aprobar y establecer los registros fitosanitarios, programas de defensa, normas técnicas y metodologías y dictar cuantas disposiciones sean necesarias para combatir plagas que afecten al cultivo de la caña de azúcar, y no se consideren objeto de cuarentena vegetal bajo la rectoría del Ministerio de la Agricultura, el que como autoridad estatal única en esta materia establecerá las vías y términos mediante los cuales ejercerá el Ministerio del Azúcar estas facultades y promoverá el desarrollo del potencial científico técnico que posee en favor del fortalecimiento del Sistema en la esfera de su atención.

Cuando algunas de las disposiciones a que hace referencia el párrafo precedente pudiera tener efecto en algún cultivo no cañero, la facultad de dictarla corresponderá al Ministerio de la Agricultura oído el parecer del Ministerio del Azúcar.

SEGUNDA: El Ministerio de la Agricultura en coordinación con el Ministerio de Finanzas y Precios establecerá las regulaciones para la indemnización, en el caso que proceda, a propietarios por la aplicación de programas de defensa contra plagas.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Ministerio de la Agricultura para dictar cuantas disposiciones complementarias sean necesarias para la mejor aplicación de este Decreto-Ley.

SEGUNDA: Se derogan:

- 1) La Orden Militar número 214, de 7 de octubre de 1901;
- 2) La Ley de 16 de julio de 1906, referente a prohibición de importar plantas cítricas;
- 3) La Ley de 13 de diciembre de 1910;
- 4) El Decreto 383 de 24 de junio de 1913;
- 5) El Decreto número 1428, de 31 de diciembre de 1913;
- 6) El Decreto número 67, de 24 de enero de 1914;
- 7) El Decreto número 1133, de 23 de noviembre de 1914;
- 8) El Decreto número 1175, de 15 de diciembre de 1914;
- 9) El Decreto número 838, de 3 de julio de 1916;
- 10) El Decreto número 715, de 17 de mayo de 1917;
- 11) El Decreto número 1317, de 12 de septiembre de 1917;
- 12) El Decreto número 6, de 4 de enero de 1919;
- 13) El Decreto número 299, de 7 de marzo de 1921;
- 14) El Decreto número 1222, de 25 de junio de 1921;
- 15) El Decreto número 120, de 18 de enero de 1922;
- 16) El Decreto número 735, de 18 de mayo de 1923;
- 17) El Decreto número 736, de 18 de mayo de 1923;
- 18) El Decreto número 799, de 26 de mayo de 1923;
- 19) El Decreto número 1285, de 30 de agosto de 1923;
- 20) El Decreto número 1850, de 12 de noviembre de 1923;
- 21) El Decreto número 1260, de 20 de septiembre de 1924;
- 22) El Decreto número 1371, de 2 de octubre de 1924;
- 23) El Decreto número 1751, de 11 de diciembre de 1924;
- 24) El Decreto número 421, de 20 de marzo de 1925;
- 25) El Decreto número 1314, de 11 de agosto de 1926;
- 26) El Decreto número 1541, de 27 de septiembre de 1926;

- 27) El Decreto número 1013, de 30 de junio de 1927;
- 28) El Decreto número 1145 de 2 de agosto de 1927;
- 29) El Decreto número 1551, de 17 de septiembre de 1927;
- 30) El Decreto número 1555, de 19 de octubre de 1927;
- 31) El Decreto número 1556, de 19 de octubre de 1927;
- 32) El Decreto número 1557, de 19 de octubre de 1927;
- 33) El Decreto número 1558, de 19 de octubre de 1927;
- 34) El Decreto número 1559, de 19 de octubre de 1927;
- 35) El Decreto número 1730, de 20 de octubre de 1928;
- 36) El Decreto número 1752, de 22 de octubre de 1928;
- 37) El Decreto número 740, de 10 de mayo de 1929;
- 38) El Decreto número 861, de 29 de mayo de 1929;
- 39) El Decreto número 997, de 12 de junio de 1929;
- 40) El Decreto número 1550, de 27 de septiembre de 1929;
- 41) El Decreto número 92, de 23 de diciembre de 1929;
- 42) La Ley del 5 de junio de 1930, referente a la extinción de plagas en pastos;
- 43) El Decreto número 1377, de 16 de octubre de 1930;
- 44) El Decreto número 338, de 10 de febrero de 1931;
- 45) El Decreto número 429, de 20 de marzo de 1931;
- 46) El Decreto número 560, de 24 de abril de 1931;
- 47) El Decreto número 1201, de 26 de agosto de 1932;
- 48) El Decreto número 1135, de 3 de agosto de 1933;
- 49) El Decreto número 64, de 2 de enero de 1934;
- 50) El Decreto número 1787, de 28 de junio de 1935;
- 51) El Decreto-Ley número 546, de 29 de diciembre de 1935;
- 52) El Decreto número 3272, de 1ro. de diciembre de 1936;
- 53) El Decreto número 1882, de 26 de mayo de 1937;
- 54) El Decreto número 2037, de 23 de septiembre de 1938;
- 55) El Decreto número 1441, de 13 de junio de 1939;
- 56) El Decreto número 3084, de 13 de diciembre de 1939;
- 57) El Decreto número 2745, de 4 de octubre de 1940;
- 58) El Decreto número s/n de 6 de marzo de 1942;
- 59) El Decreto número 1418, de 5 de mayo de 1913;
- 60) El Decreto número 235, de 21 de enero de 1947;
- 61) El Decreto número 4206, de 21 de noviembre de 1947;
- 62) El Decreto número 1195, de 19 de abril de 1950; y
- 63) El Decreto número 3667, de 29 de agosto de 1951.

TERCERA: Se derogan también cuantas otras disposiciones legales se opongan al cumplimiento de este Decreto-Ley, que comenzará a regir a partir de los 30 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los 31 días del mes de agosto de 1994.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, LUNES 22 DE Julio DE 1996

AÑO XCIV

Número 26

Página 405

Decreto-Ley 164.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: EL artículo 11 inciso c) de la Constitución de la República de Cuba establece que el Estado ejerce su soberanía sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, el lecho y el subsuelo de la zona económica marítima de la República, en la extensión que fija la ley, conforme a la práctica internacional.

POR CUANTO: El Ministerio de la Industria Pesquera es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en cuanto a investigación, conservación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros.

POR CUANTO: Es necesario desarrollar sobre bases científico-técnicas la política del Estado y del Gobierno en la rama de la industria pesquera, para garantizar en correspondencia con los preceptos contenidos en la Ley No. 33 de 10 de enero de 1981, "Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales" la investigación, conservación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros, siendo facultad del Ministerio de la Industria Pesquera dirigir y controlar la aplicación de esta política, según lo establecido en el Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 1994, dictado al amparo del Decreto-Ley No. 147, De la Reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado, de 21 de abril de 1994.

POR CUANTO: El vigente régimen de infracciones y sanciones administrativas de la pesca no comercial contenido en el Decreto número 103 de 2 de abril de 1982 no se corresponde con la actualidad nacional e internacional y se hace necesario actualizar el mismo en correspondencia con el Decreto-Ley número 99, De las Contravenciones Personales, de 25 de diciembre de 1987.

POR CUANTO: Es necesario unificar en un sólo cuerpo legal los aspectos regulados en el Decreto-Ley No. 704 de 28 de marzo de 1936, conocido por Ley General de Pesca, su reglamento puesto en vigor por el Decreto No. 2724 de 5 de octubre de 1956 y el Decreto número 103 de 2 de abril de 1982, Reglamento para la pesca no comercial.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas por el inciso c) del artículo 90 de la Constitución de la República, adopta el siguiente:

DECRETO-LEY No.164 REGLAMENTO DE PESCA

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- A los efectos del presente Decreto-Ley se considera:

1. **Recursos acuáticos:** Los integrantes del conjunto compuesto por todas las especies de la flora y la fauna acuática, cualquiera que sea su ubicación en las aguas marítimas y las aguas terrestres.
2. **Pesca:** El acto de extraer, capturar, coleccionar, o cultivar por cualquier procedimiento, en medio acuático, especies o elementos biogenéticos cuyo medio de vida parcial, total o temporal sea el agua así como los actos previos y posteriores relacionados con ella.
3. **Aguas terrestres:** Las aguas no marítimas constituidas por cuerpos de aguas naturales o artificiales.
4. **Aguas marítimas:** Las aguas interiores, el mar territorial y la zona económica.
5. **Pesca comercial:** Es la pesca que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos. En la pesca comercial se pueden distinguir las siguientes modalidades:
 - a) Pesca comercial de carácter empresarial, caracterizada por la obtención de grandes volúmenes de captura destinados a su ulterior

comercialización y realizada por diferentes tipos de empresas pesqueras especializadas.

- b) Pesca de autoconsumo social, que tiene como objetivo satisfacer necesidades específicas de consumo social.
 - e) Pesca comercial que se realiza con otra finalidad que no sea el consumo humano: en esta modalidad se incluyen la extracción de organismos acuáticos para artesanía, exhibiciones públicas, extracción de sustancias químicas y otros propósitos.
6. **Pesca deportivo-recreativa:** es la captura de organismos acuáticos para el consumo doméstico sin que medie ánimo de lucro, con fines recreativos y de esparcimiento y con fines competitivos.
 7. **Pesca de investigación:** es la que se realiza con el fin de obtener información científico-técnica en correspondencia con los planes de investigación aprobados por los organismos correspondientes y los estudios, trabajos y experimentos para el desarrollo de sistemas, métodos y artes, equipos y embarcaciones de pesca.
 8. **Pesquerías principales:** son aquellas dirigidas a la captura de especies de alto valor económico ya sea por ser rubro exportable o por su importancia para la alimentación de la población.
 9. **Veda:** es la prohibición temporal o permanente de pescar, recolectar, desembarcar transportar, industrializar y comercializar o tener el recurso acuático que se especifique.
 10. **Talla mínima:** regulación que se establece para precisar la talla o el peso mínimo de cualquier especie acuática por debajo del cual no se autoriza su pesca.
 11. **Artes de pesca:** cualquier estructura de diferentes dimensiones, diseños y materiales de que se vale el pescador para la captura de especies acuáticas.

ARTICULO 2.- Los recursos acuáticos de la República de Cuba forman parte del patrimonio nacional y corresponde al Estado cubano establecer las condiciones para su protección, uso y aprovechamiento racional.

ARTICULO 3.- Las disposiciones del presente Decreto-Ley se aplican a todas las actividades de pesca que se realizan tanto en aguas marítimas como terrestres sujetas a la jurisdicción nacional.

CAPITULO II

COMISION CONSULTIVA DE PESCA

ARTICULO 4.- La Comisión Consultiva de Pesca es el máximo órgano consultivo del Ministerio de la Industria Pesquera en materia de ordenamiento y administración de los recursos acuáticos de las aguas marítimas y terrestres.

ARTICULO 5.- Corresponde a la Comisión Consultiva de Pesca, analizar el estado de explotación de los recursos acuáticos en zonas bajo la jurisdicción nacional y proponer las regulaciones y medidas de ordenamiento y protección necesarias para lograr una explotación económica sostenible, que pueden incluir cuotas de pesca, vedas, tallas o pesos mínimos, requisitos para los artes de pesca y otras regulaciones.

ARTICULO 6.- La Comisión Consultiva de Pesca propondrá las tareas y trabajos de investigación-desarrollo necesarios para el logro de los objetivos anteriores y analizará y emitirá criterios sobre cualquier otro asunto relacionado con la protección y administración de los recursos acuáticos que le encargue el Ministro de la Industria Pesquera.

ARTICULO 7.- La Comisión Consultiva de Pesca tendrá un Reglamento aprobado por el Ministro de la Industria Pesquera y se auxiliará en sus funciones por grupos especializados según lo requiera el tipo de pesca.

ARTICULO 8.- Serán miembros permanentes de la Comisión Consultiva de Pesca, los representantes designados por los ministerios de Turismo; de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Agricultura y del Interior; por los Estados Mayores de la Marina de Guerra Revolucionaria, y de la Defensa Civil, y por los Institutos Nacionales de Recursos Hidráulicos, y de Deportes, Educación Física y Recreación; así como del Instituto de Medicina Veterinaria.

ARTICULO 9.- Para su funcionamiento, la Comisión Consultiva de Pesca convocará a investigadores y técnicos de alta calificación, pescadores experimentados, del sector empresarial y de organizaciones e instituciones relacionadas con el uso sostenible del medio acuático y de instituciones de salud animal del país.

ARTICULO 10.- Los acuerdos de la Comisión Consultiva de Pesca adquieren carácter legal, mediante resoluciones emitidas por el Ministro de la Indus-

tria Pesquera. El resto de los acuerdos tomados se considerarán opiniones o recomendaciones.

CAPITULO III

AUTORIZACIONES DE PESCA

ARTICULO 11.- La pesca que se practica en aguas bajo jurisdicción nacional y que se realiza desde el litoral o la orilla, sin el auxilio de medios flotantes y mediante varas, carretes, cordel y anzuelo, es libre para todos los ciudadanos y no requiere de ninguna autorización, excepto en aquellas áreas sujetas a regímenes especiales.

ARTICULO 12.- Las restantes modalidades de pesca, no incluidas en el artículo anterior, así como la explotación acuícola, requieren de la autorización correspondiente.

ARTICULO 13.- El Ministerio de la Industria Pesquera es el Organismo de la Administración Central del Estado facultado para conceder, renovar, modificar y cancelar las autorizaciones de pesca, las que comprenden concesiones, licencias o permisos de pesca estableciendo los requisitos y mecanismos correspondientes para su otorgamiento y control. En el ejercicio de estas funciones, el Ministerio de la Industria Pesquera tendrá en cuenta los intereses de la defensa y compatibilizará con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de las Reservas Estatales para determinar de antemano aquellos sitios que dentro de las zonas autorizadas no tendrán libre acceso o el acceso estará completamente prohibido.

ARTICULO 14.- Las autorizaciones constituyen la base principal para el ordenamiento de la actividad pesquera.

La emisión, renovación y cancelación de cualquier tipo de autorización de pesca será tramitada por las Oficinas Provinciales de Inspección Pesquera y será aprobada por el Ministro de la Industria Pesquera.

ARTICULO 15.- Las concesiones de pesca son aquellas autorizaciones que con tales fines, se emiten por un período mínimo de cinco años. Podrán ser objeto de concesiones: las personas naturales, las entidades nacionales, extranjeras, o de capital mixto, tanto para la explotación pesquera como para la acuicultura.

ARTICULO 16.- Las licencias de pesca son autorizaciones que se emiten anualmente y podrán tener un carácter renovable. La obtención de estas licencias será requisito indispensable para realizar la pesca deportivo-recreativa y la pesca comercial.

ARTICULO 17.- Las licencias de pesca se otorgarán:

1. A las personas naturales que practican la pesca submarina; y
2. A las personas naturales o jurídicas propietarias de embarcaciones. En este caso, para otorgar la licencia de pesca, será indispensable presentar la certificación de que la embarcación está registrada en la Capitanía de Puerto y tener el correspondiente Certificado de Navegabilidad.

ARTICULO 18.- Los permisos de pesca son aquellas autorizaciones que se otorgan solamente con carácter temporal y para fines específicos.

CAPITULO IV ZONAS DE PESCA

ARTICULO 19.- Zonas de gran interés económico-pesquero: están sujetas a regímenes generales donde se autoriza preferentemente la pesca comercial y las constituyen las aguas sobre la plataforma submarina, hasta la isobata de los doscientos metros que se extiende desde:

1. El Cabo Francés hasta Playa Girón;
2. La Punta de María Aguilar hasta Cabo Cruz;
3. La Punta de Prácticos hasta la Punta de la Península de Hicacos;
4. El Cabo de San Antonio hasta la Punta de Gobernadora.

ARTICULO 20.- Zonas abiertas de menor interés económico pesquero: en las que se otorgará la preferencia a la pesca deportivo-recreativa y a la pesca de autoconsumo social, son las aguas marítimas comprendidas en los siguientes tramos del litoral:

1. Desde Punta Gobernadora hasta la Punta de la península de Hicacos;
2. Desde la Punta de Prácticos hasta la Punta de Maisí;
3. Desde la Punta de Maisí hasta Cabo Cruz;
4. Desde el Cabo de San Antonio hasta el Cabo Francés;
5. Desde Playa Girón hasta la Punta de María Aguilar.

ARTICULO 21.- Zonas vedadas: Se trata de áreas enclavadas en las zonas anteriores y que por intereses nacionales de protección de los recursos natura-

les y del patrimonio quedará prohibido todo tipo de pesca.

Se declara como área vedada, por constituir el refugio más virgen y rico de la biodiversidad marina del país, donde habitan y se reproducen especies acuáticas de alto valor, la región ubicada al sur de Matanzas, delimitada por las coordenadas geográficas siguientes:

22°04.30	Latitud Norte	80°29.20	Longitud Oeste
22°04.30	Latitud Norte	80°49.00	Longitud Oeste
22°18.52	Latitud Norte	81°49.00	Longitud Oeste
21°47.30	Latitud Norte	81°18.10	Longitud Oeste
21°42.40	Latitud Norte	81°02.12	Longitud Oeste
21°56.18	Latitud Oeste	80°33.35	Longitud Oeste

La ubicación geográfica y los límites de otros vedados serán establecidos mediante resoluciones del Ministerio de la Industria Pesquera en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

ARTICULO 22.- Zonas bajo régimen especial de uso y protección: se trata de áreas protegidas legalmente establecidas en las cuales las actividades pesqueras se rigen por disposiciones especiales.

ARTICULO 23.- Las regulaciones para la pesca en embalses de interés económico serán establecidas mediante resoluciones del Ministro de la Industria Pesquera.

ARTICULO 24.- Según el interés nacional y las normas jurídicas vigentes, oído el parecer del Ministerio de la Industria Pesquera, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros podrá autorizar el aprovechamiento de los recursos acuáticos existentes en la zona de jurisdicción nacional por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras.

CAPITULO V

MODALIDADES DE PESCA

ARTICULO 25.- De acuerdo con la finalidad, la pesca se clasifica en:

1. Comercial;
2. Deportivo-recreativa;
3. De investigación.

Sección Primera

Pesca Comercial

ARTICULO 26.- El aprovechamiento de la pesca comercial sólo puede ser efectuado por las entidades subordinadas al Ministerio de la Industria Pesquera o las autorizadas por éste, o por las personas naturales y jurídicas extranjeras autorizadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

ARTICULO 27.- Los métodos y artes de pesca deberán reunir los requisitos establecidos en cuanto a dispositivos, tipo, dimensiones, poder de captura y selectividad, así como las demás regulaciones que a tales efectos establezca el Ministerio de la Industria Pesquera.

ARTICULO 28.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en coordinación con el Ministerio de la Industria Pesquera, establecerá las disposiciones que deberán cumplir las entidades promoventes de nuevas inversiones que puedan alterar el ecosistema y los recursos acuáticos de interés económico.

ARTICULO 29.- La pesca desde buques u otras embarcaciones extranjeras requerirá de una autorización previa, así como el pago, por el sistema de cuotas de pesca, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de la Industria Pesquera.

ARTICULO 30.- Las entidades extranjeras autorizadas a efectuar la pesca comercial dentro de la zona de jurisdicción nacional estarán obligadas a cumplir las regulaciones contenidas en el presente Decreto-Ley, en el acuerdo específico para ejercerla, y en cualquier otra disposición que dicte el Ministerio de la Industria Pesquera.

ARTICULO 31.- Los buques o embarcaciones extranjeros que realicen la pesca comercial dentro de la zona de jurisdicción nacional estarán sometidos a las demás regulaciones que le sean aplicables.

ARTICULO 32.- El Ministerio de la Industria Pesquera, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Medicina Veterinaria, estará facultado para habilitar, autorizar, declarar y registrar las entidades económicas destinadas a la transformación y elaboración del pescado y los mariscos para la exportación y el consumo nacional.

Sección Segunda

Pesca Deportivo-Recreativa

ARTICULO 33.- El Ministerio de la Industria Pesquera apoyará la práctica y el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y el Ministerio del Turismo en el ejercicio de sus funciones rectoras sobre la pesca deportivo-recreativa coordinarán con el Ministerio de la Industria Pesquera en su carácter de organismo rector de la pesca en general.

ARTICULO 34.- La pesca deportivo-recreativa podrá efectuarse:

1. Desde el litoral y la orilla de las aguas marítimas y terrestres;
2. Desde embarcaciones;
3. Mediante la pesca submarina.

ARTICULO 35.- En la pesca deportivo-recreativa que se practique tanto en aguas marítimas como terrestres, sólo se podrán utilizar como artes o avíos, el carrete, la vara, el cordel y el alambre con anzuelo. Se autoriza el uso de la atarraya exclusivamente en aguas marítimas y con el único fin de obtener carnada.

ARTICULO 36.- Se prohíbe la utilización de artes de pesca tales como nasas, palangres, redes de enmalle, tranques, chinchorros u otros artes de pesca masivos.

ARTICULO 37.- La pesca submarina sólo podrá practicarse en zonas marítimas abiertas según se especifica en el Capítulo IV de este Reglamento.

ARTICULO 38.- La pesca submarina sólo podrá realizarse mediante buceo a pulmón libre y con escopetas de liga o resorte, oleoneumáticas y arpón, siempre en cantidades unitarias.

ARTICULO 39.- Los productos de la pesca deportivo-recreativa son para el consumo personal o familiar y no podrán utilizarse con fines de lucro.

ARTICULO 40.- El Ministerio de la Industria Pesquera, de conjunto con el Ministerio del Comercio Interior y en coordinación con los Consejos de Administración Provinciales, podrán autorizar la comercialización de los pro-

ductos de la pesca deportivo-recreativa, determinando su destino de consumo, sujetos al control sanitario, inspección y correspondiente pago de la licencia.

ARTICULO 41.- El Ministerio de la Industria Pesquera, oído el parecer del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, establecerá las regulaciones en cuanto a especies a capturar, y cantidades permisibles de cada una de ellas.

Sección Tercera Pesca de Investigación

ARTICULO 42.- El Ministerio de la Industria Pesquera en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, autorizará la pesca de investigación a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de conformidad con lo establecido en este Reglamento y demás disposiciones legales vigentes.

ARTICULO 43.- Cuando la pesca de investigación se realice por entidades nacionales no subordinadas al Ministerio de la Industria Pesquera o por entidades extranjeras, los resultados serán informados a dicho Ministerio.

ARTICULO 44.- En aquellos casos que por la naturaleza de las investigaciones resulte necesario el empleo de artes o procedimientos de pesca no reglamentados, será requisito indispensable la presentación de la fundamentación científico-técnica que avale dicha solicitud.

ARTICULO 45.- El Ministerio de la Industria Pesquera, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, podrá autorizar, con carácter excepcional, la pesca con fines de investigación, de cualquier especie amenazada o en peligro de extinción dentro de los límites que estos organismos establezcan.

ARTICULO 46.- Los productos que se obtengan de la pesca de investigación no podrán ser objeto de apropiación personal ni de lucro.

CAPITULO VI PROTECCION SANITARIA DE LAS ESPECIES ACUATICAS

ARTICULO 47.- El Ministerio de la Industria Pesquera, conjuntamente con

el Instituto de Medicina Veterinaria, establecerá todas las regulaciones sanitarias orientadas a proteger al país de la penetración de las enfermedades exóticas que puedan afectar a los recursos acuáticos.

ARTICULO 48.- El Ministerio de la Industria Pesquera, en coordinación con el Instituto de Medicina Veterinaria establecerá los sistemas de vigilancia epizootiológica y otras acciones veterinarias orientadas a implementar los programas de salud para mantener el estado reproductivo y productivo de todas las especies acuáticas, brindando atención priorizada a aquellas que se destinan a la pesca comercial o al cultivo.

ARTICULO 49.- El Ministerio de la Industria Pesquera queda responsabilizado con el financiamiento requerido para el aseguramiento de las medidas veterinarias en sus entidades subordinadas y laboratorios y centros especializados que trabajan en interés de la protección de los recursos acuáticos.

CAPITULO VII

DE LAS INFRACCIONES DEL REGIMEN DE PESCA Y SUS SANCIONES

ARTICULO 50.- Las sanciones aplicables a las infracciones y violaciones del presente Decreto-Ley serán:

1. Multas;
2. Obligación de hacer;
3. Decomisos;
4. Suspensión o Cancelación de la autorización de pesca.

ARTICULO 51.- Constituyen violaciones del presente Reglamento de Pesca y se le impondrá la multa que en cada caso se señala, al que:

1. Sin la correspondiente autorización del Ministerio de la Industria Pesquera, capture, desembarque, transporte, procese, comercialice, o consuma las especies amenazadas o en peligro de extinción siguientes:
 - a) El manatí, el delfín, el cocodrilo, el caimán; desde 500 hasta 5 000 pesos;
 - b) El carey, la tortuga, la caguama y el tinglado; desde 400 hasta 4 000 pesos;
 - c) El paiche, de 500 hasta 5 000 pesos;
 - d) El coral negro, desde 300 hasta 3 000 pesos;
 - e) La, jicotea, desde 200 hasta 2 000 pesos;
 - f) El cobo, desde 100 hasta 1 000 pesos.

En todos estos casos se considerará como una infracción la captura o extracción de cada espécimen.

2. Recolecte, conserve o comercialice huevos de tortugas marinas, desde 500 hasta 5 000 pesos;
3. Tenga a bordo de las embarcaciones, o a una distancia menor de 50 metros de la orilla, o el litoral, artes y avíos de pesca no autorizados, desde 200 hasta 2 000 pesos;
4. Capture o desembarque las especies que el Ministerio de Salud Pública haya determinado como tóxicas, desde 200 hasta 2 000 pesos;
5. Capture o desembarque especies acuáticas que estén por debajo de la talla o peso mínimos establecidos, desde 200 hasta 2 000 pesos;
6. Emplee explosivos y sustancias químicas durante las operaciones de pesca, desde 500 hasta 5 000 pesos;
7. Abandone nasas, redes, tranques o cualquier otro arte de pesca que pueda provocar la muerte de peces y demás recursos pesqueros, o alterar el ecosistema acuático, desde 500 hasta 5 000 pesos;
8. Pesque sin la debida autorización o con ésta vencida, desde 200 hasta 2 000 pesos;
9. Exceda las cuotas de captura previamente autorizadas, desde 200 hasta 2 000 pesos;
10. Utilice el producto de la pesca deportivo-recreativa o investigativa con fines de lucro, sin la debida autorización para su comercialización, desde 200 hasta 2 000 pesos;
11. Oculte o falsee las informaciones sobre la pesca que sean requeridas por las autoridades competentes, desde 200 hasta 2 000 pesos;
12. Capture, desembarque o comercialice las siguientes especies destinadas exclusivamente para la Pesca comercial;
 - a) Langosta, langostino, cangrejo moro, desde 500, hasta 5 000 pesos;
 - b) Camarones, desde 500 hasta 5 000 pesos;
 - c) Anguila, guabina y manjuarí, desde 500 hasta 5 000 pesos;
13. Capture, desembarque, o comercialice cualquier especie durante la época de veda;
 - a) Especies de escama, desde 200 hasta 2 000 pesos;
 - b) Crustáceos, desde 500 hasta 5 000 pesos;
 - c) Moluscos y esponjas, desde 300 hasta 3 000 pesos;
14. Capture, desembarque o comercialice cualquier especie utilizando artes de pesca prohibidos por la legislación vigente, o que no cumplan con los requisitos establecidos, desde 100 hasta 5 000 pesos;
15. Capture, desembarque, procese, comercialice o tenga ejemplares de

- langosta, cangrejo de tierra y cangrejo moro con freza o chapa;
- a) Langosta, desde 100 hasta 1 000 pesos;
 - b) Cangrejo moro, desde 50 hasta 500 pesos;
 - c) Cangrejo de tierra, desde 30 hasta 300 pesos;
- 16. Pesque sin la correspondiente autorización en zonas vedadas o bajo régimen especial de uso y protección, desde 500 hasta 5 000 pesos;
 - 17. Practique la pesca en pesqueros artificiales u otro tipo de arte de pesca comercial sin la debida autorización para este tipo de pesquería, desde 100 hasta 1 000 pesos;
 - 18. Utilice equipos de respiración artificial para la pesca submarina o utilice escopetas que no sean las permitidas, desde 100 hasta 1 000 pesos;
 - 19. Transforme o elabore pescado y productos pesqueros en condiciones que afecten la calidad del producto y la seguridad del consumidor, desde 500 hasta 5 000 pesos;
 - 20. Produzca daños a arrecifes por las embarcaciones que utiliza para la realización de la Pesca en cualquiera de sus modalidades, desde 500 hasta 5 000 pesos.

ARTICULO 52.- En todos estos casos, y tomando en cuenta la gravedad de la infracción, además de las multas indicadas en el artículo anterior, se aplicarán como accesorias: la obligación de hacer ajustada a la naturaleza de la infracción, el retiro o suspensión de la licencia, y el decomiso del producto, las artes y avíos de pesca, e incluso de las embarcaciones u otro medio utilizado para cometer la infracción.

ARTICULO 53.- Los bienes ocupados producto de las sanciones aplicadas de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento serán entregados a la autoridad pesquera provincial cuando se trate de especies acuáticas, artes, avíos de pesca, incluso las embarcaciones u otro medio utilizado para cometer la infracción.

En el caso de las embarcaciones y cualquier otro medio de transporte decomisado se entregará, de acuerdo a las características del mismo al Ministerio de la Industria Pesquera, al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación o al Ministerio de Turismo.

ARTICULO 54.- En todos los casos, en que la infracción sea cometida por persona natural o jurídica extranjera o empresa mixta, las multas establecidas

en el presente Decreto-Ley se abonarán en moneda libremente convertible, según la tasa de cambio oficial establecida por el Banco Nacional de Cuba.

CAPITULO VIII DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 55.- Las autoridades facultades para comprobar la comisión de las infracciones a que se refiere el presente Reglamento, y para imponer las sanciones correspondientes, son los inspectores autorizados por el Ministerio de la Industria Pesquera y las designadas por el Ministerio del Interior.

ARTICULO 56.- La persona inconforme con la sanción o sanciones impuestas en virtud de lo regulado en el presente Reglamento, podrá establecer el correspondiente recurso ante la Autoridad Pesquera Provincial designada dentro de los tres días hábiles siguientes a la imposición de la misma.

ARTICULO 57.- Corresponderá a la autoridad pesquera provincial designada, resolver los recursos presentados contra las sanciones impuestas en el territorio a su cargo, dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción del recurso. Contra la decisión de la autoridad pesquera provincial no cabrá recurso alguno en lo administrativo ni en lo judicial.

CAPITULO IX INSPECCION PESQUERA

ARTICULO 58.- Corresponde al Ministerio de la Industria Pesquera ejercer la inspección y vigilancia del cumplimiento de las medidas de regulación pesquera, y otras disposiciones contenidas en este Decreto-Ley, referentes a la conservación de los recursos acuáticos así como a la inspección higiénica y tecnológica de acuerdo a la legislación nacional e internacional vigentes.

ARTICULO 59.- Los Ministerios de Salud Pública, del Comercio Interior, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y los Institutos Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y de Medicina Veterinaria, contribuirán al ejercicio de la inspección y vigilancia de lo establecido en el presente Decreto-Ley.

ARTICULO 60.- Cualquier persona natural o jurídica sujeta a las disposiciones del presente Decreto-Ley, estará obligada a facilitar la labor de inspección

requerida por los inspectores estatales debidamente acreditados para realizar dichas funciones, permitiendo su acceso a las embarcaciones y lugares donde se lleve a cabo la pesca o alguna de sus actividades conexas.

DISPOSICION ESPECIAL

UNICA: El importe de las multas administrativas a que se refiere el presente Decreto-Ley se ingresará al presupuesto del Estado.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Ministerio de la Agricultura, en coordinación con el Ministerio de la Industria Pesquera, velará por la protección de manglares y cualquier otra vegetación costera y faja hidrológica que sirva de refugio a los recursos pesqueros y preserve su ecosistema.

SEGUNDA: El Ministerio de la Industria Pesquera, en coordinación con otros organismos competentes de la Administración Central del Estado, definirá los parámetros sobre la calidad del agua en las zonas de pesca.

TERCERA: Se faculta al Ministro de la Industria Pesquera, a dictar otras normas complementarias a los efectos del mejor cumplimiento del presente Decreto-Ley.

CUARTA: Se deroga el Decreto-Ley No. 704 de 28 de marzo de 1936, Ley General de Pesca, su Reglamento puesto en vigor por el Decreto No. 2724 de fecha 5 de octubre de 1956 y el Decreto Número 103 de 2 de abril de 1982, Reglamento para la pesca no comercial y cuantas otras disposiciones legales de igual o inferior jerarquía se opongan al cumplimiento del presente Decreto-Ley.

QUINTA: Este Decreto-Ley comenzará a regir a 60 días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los 28 días del mes de mayo de 1996.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL



DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, 19 DE Mayo DE 1997

AÑO XCV

Número 16

Página 242

Decreto-Ley 170.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley No. 75 de la Defensa Nacional, del 21 de diciembre de 1994, define en su artículo 111 que: “La Defensa Civil es un sistema de medidas defensivas de carácter estatal, llevadas a cabo en tiempo de paz y durante las situaciones excepcionales, con el propósito de proteger a la población y a la economía nacional contra los medios de destrucción del enemigo y en los casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes, así como de las consecuencias del deterioro del medio ambiente. También comprende la realización de los trabajos de salvamento y reparación urgente de averías en los focos de destrucción o contaminación”.

POR CUANTO: La propia Ley No. 75 en su artículo 5 expresa que “Todos los recursos y actividades del país, independientemente de su naturaleza, podrán ser puestos por el Gobierno de la República en función de satisfacer las necesidades de la defensa nacional durante las situaciones excepcionales”.

POR CUANTO: Es necesario desarrollar un sistema de medidas de defensa civil que permita prever y minimizar las afectaciones por la ocurrencia de desastres naturales u otros tipos de catástrofes que ocasionan al país cuantiosas pérdidas humanas, materiales y otros trastornos sociales, económicos y ambientales, que inciden negativamente en el desarrollo y requieren para su reducción de la acción coordinada de las fuerzas y recursos existentes en el territorio nacional, así como de la ayuda y cooperación internacional para

de este modo complementar lo dispuesto en el Capítulo XIV de la Ley de la Defensa Nacional.

POR TANTO: El consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 90 del inciso c) de la Constitución de la República de Cuba, acuerda dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 170 DEL SISTEMA DE MEDIDAS DE DEFENSA CIVIL

ARTICULO 1.- El presente Decreto-Ley regula:

- a) El papel y lugar de los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales en relación con el cumplimiento de las medidas de defensa civil;
- b) La organización y ejecución de las medidas de defensa civil para la protección de la población y de la economía;
- c) El establecimiento de fases para la protección de la población y de la economía en casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes, o ante la inminencia de estos;
- d) El financiamiento de los planes y medidas de defensa civil.

ARTICULO 2.- A los efectos de este Decreto-Ley, se entiende por reducción de desastres, al conjunto de actividades preventivas, de preparación, respuesta y recuperación, que se establecen con la finalidad de proteger a la población, la economía y el medio ambiente, de los efectos destructivos de los desastres naturales u otros tipos de catástrofes.

ARTICULO 3.- El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las medidas de defensa civil, las normas y convenios internacionales relativos a la protección civil de los que la República de Cuba sea parte y de coordinar con el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica los programas de cooperación y ayuda internacional en caso de desastres naturales u otros tipos de catástrofes. Además, tiene como atribuciones y funciones las de organizar, coordinar y controlar el trabajo de los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales en interés de proteger a la población y la economía, en condiciones normales y situaciones excepcionales y para ello debe:

- a) Identificar y evaluar, en coordinación con los órganos y organismos es-

- tatales, las entidades económicas e instituciones sociales, los factores de peligro, vulnerabilidad y riesgo, así como determinar los elementos de planificación necesarios para enfrentarlos;
- b) Organizar, en coordinación con los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales, el cumplimiento de medidas de prevención, preparación y enfrentamiento para la protección de la población y la economía;
 - c) Exigir el cumplimiento del proceso de compatibilización del desarrollo económico- social del país con los intereses de la Defensa Civil, establecidos en la legislación vigente;
 - d) Establecer los principios de preparación y equipamiento y las formas de actuación de las fuerzas que participan en el cumplimiento de las medidas de la defensa civil;
 - e) Dirigir, sobre la base de su estructura y la participación de los órganos y organismos estatales seleccionados, el Puesto de Dirección Nacional para Casos de Catástrofes;
 - f) Controlar el cumplimiento de las actividades del sistema de medidas de defensa civil;
 - g) Crear grupos de expertos para asesorar al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en el estudio y análisis de medidas y tareas específicas de la Defensa Civil;
 - h) Aprobar, en primera instancia, los programas, proyectos y planes para la reducción de desastres y en coordinación con el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, los relacionados con la cooperación internacional, que se canalizarán a través de este organismo a las distintas fuentes de financiamiento bilaterales oficiales, multilaterales y no gubernamentales. En las esferas científico-tecnológicas, de protección del medio ambiente y uso pacífico de la energía nuclear, la aprobación y coordinación de los programas, proyectos y planes, se hará en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente;
 - i) Representar al Estado cubano ante los órganos, organismos, organizaciones y agencias internacionales y ante otros gobiernos, en todo lo referido a la reducción de desastres naturales u otros tipos de catástrofes;
 - j) Establecer los signos distintivos de las personas y bienes civiles sujetos a protección especial según los convenios internacionales relativos a la protección civil de los que la República de Cuba sea parte, así como establecer las regulaciones de las zonas de desastres.

ARTICULO 4.- Los aseguramientos para el cumplimiento de las medidas de defensa civil son organizados por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, con la participación de los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales, en especial en lo referido a comunicaciones y aviso, salvamento, médico-sanitario y de medicina legal, del transporte y evacuación, ingeniero, seguridad pública y regulación del tránsito, protección contra incendios, de enmascaramiento y oscurecimiento de la luz, de víveres, vestuario, combustibles y lubricantes, hidrológico, meteorológico, sismológico, químico, radiológico, veterinario, fitosanitario, de exploración y señalización de zonas peligrosas y cuantos otros sean necesarios.

Los jefes de los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales, son los jefes de la Defensa Civil a su nivel, siendo los máximos responsables del cumplimiento del sistema de medidas de defensa civil.

ARTICULO 5.- El aviso de defensa civil para la protección de la población y los trabajadores forma parte del sistema de aviso del país. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias constituye el órgano rector encargado de su perfeccionamiento, desarrollo y mantenimiento, de conjunto con el Ministerio de Comunicaciones, el Instituto Cubano de Radio y Televisión y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, empleando para ello los recursos propios y las posibilidades existentes en éstos así como en otros órganos y organismos estatales.

Los objetivos con peligro químico y radiológico, así como otras obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, están en la obligación de garantizar el aviso a sus trabajadores y a la población de las áreas de mayor riesgo, sobre el peligro de accidentes, escape de sustancias peligrosas o contaminación.

ARTICULO 6.- En previsión de la ocurrencia de desastres naturales u otros tipos de catástrofes y durante las situaciones excepcionales, los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales, están obligados a poner a disposición de los órganos de dirección de la Defensa Civil, los medios de comunicación que garanticen el intercambio de información, así como otros recursos materiales, transporte y bienes de consumo para auxiliar a la población afectada. El empleo de estos recursos será coordinado oportunamente por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los jefes de la Defensa Civil en cada instancia y reflejado en los documentos establecidos para estos fines.

ARTICULO 7.- Las acciones encaminadas al aseguramiento médico de toda la población en casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes, se organiza por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y con la participación de los órganos, organismos estatales, y demás entidades de investigación, docencia y servicios que aseguren la participación multidisciplinaria y multisectorial para garantizar las actividades de prevención, vigilancia higiénico epidemiológica, asistenciales y de rehabilitación.

Si fuera necesario, el Ministerio de Salud Pública solicitará la participación de la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja y mediante ésta, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

ARTICULO 8.- El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil organiza desde tiempo de paz las medidas para asegurar la vitalidad de la población en situaciones excepcionales y en coordinación con los órganos y organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales, determinará la forma de su aseguramiento, para garantizar la protección y la evacuación de los ciudadanos de sus lugares de residencia hacia sitios más seguros con las condiciones necesarias para su supervivencia, incluyendo la protección de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. Estas acciones serán plasmadas en los planes de medidas de defensa civil tanto para tiempo de guerra como para casos de catástrofes, a todos los niveles.

ARTICULO 9.- Las acciones encaminadas a la protección de los animales, las plantas y las producciones agropecuarias, piscícolas y forestales, en previsión de desastres naturales u otros tipos de catástrofes y durante las situaciones excepcionales, las organizan y ejecutan los ministerios de la Agricultura, del Azúcar, de la Industria Pesquera, en coordinación con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil con la participación de los órganos, organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales y centros de investigación, de docencia o de servicios, que aseguran la participación multidisciplinaria y multisectorial para realizar la vigilancia fitosanitaria y epizootiológica, la prevención y control de enfermedades graves, así como la asistencia técnica y rehabilitación de las áreas afectadas.

ARTICULO 10.- La preservación del patrimonio cultural de la nación y de la humanidad, en casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes y durante las situaciones excepcionales, es responsabilidad de los órganos compe-

tentes encargados de su conservación y protección. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en coordinación con estos órganos, determina las medidas para lograrlo y controla su cumplimiento, así como supervisa la inscripción en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial, de los centros históricos, monumentos y otros bienes, muebles e inmuebles de gran importancia.

ARTICULO 11.- Los Estados Mayores Provinciales y Municipales, basados en el trabajo de sus especialistas y de los órganos de Defensa Civil a su nivel, así como de los órganos, organismos y entidades económicas e instituciones sociales en los territorios, tienen a su cargo la coordinación y control del cumplimiento de las medidas de defensa civil, sobre la base de las disposiciones vigentes.

Los presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular son los jefes de la Defensa Civil en los territorios correspondientes y se apoyan para su trabajo en los órganos de la Defensa Civil de los Estados Mayores Provinciales y Municipales. Los jefes de la Defensa Civil podrán activar el Puesto de Dirección para Casos de Catástrofes a su nivel, con el objetivo de organizar la adopción de las medidas de defensa civil que correspondan.

ARTICULO 12.- El Jefe del Ejército es la autoridad coordinadora del cumplimiento del sistema de medidas de defensa civil en el territorio de su responsabilidad. El órgano de Defensa Civil del Estado Mayor del Ejército, apoyado por jefes y oficiales del mismo, es el encargado de organizar, coordinar y controlar la ejecución de las medidas de defensa civil en las unidades militares, entidades e instituciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en su territorio y prestar ayuda a los jefes provinciales y municipales de la Defensa Civil para el cumplimiento de las medidas establecidas por el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, así como controlar el trabajo de los Estados Mayores correspondientes, durante la ejecución de dichas medidas y de las establecidas por los jefes de la Defensa Civil de esos niveles.

ARTICULO 13.- Para la protección de la población y la economía en casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes, o ante la inminencia de éstos, se establecen fases, con el propósito de aplicar, de forma ágil y escalonada, según la evolución de la situación, las medidas que permitan reducir las consecuencias de estos fenómenos. Estas son:

- a) Fase Informativa, tiene como objetivo informar a los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales y a la ciudadanía en general, la posibilidad de la ocurrencia de un desastre natural o hecho catastrófico. Implica la movilización parcial de los órganos de dirección para casos de catástrofes, y de limitados recursos, así como la toma de medidas preventivas;
- b) Fase de Alerta, se establece al incrementarse la probabilidad de la ocurrencia de desastres naturales u otros tipos de catástrofes. Implica la movilización de los órganos de dirección para casos de catástrofes y recursos planificados para la misma, así como el incremento de las medidas preventivas, incluida la evacuación de la población residente en lugares de mayor riesgo. Estará siempre acompañada del nombre del tipo de desastre natural o catástrofe en cuestión;
- c) Fase de Alarma, se establece ante la inminencia de desastres naturales u otros tipos de catástrofes o una vez ocurridos éstos. Implica la realización de todo el contenido de los planes confeccionados para enfrentarlos. Estará siempre acompañada del nombre del tipo de desastre natural o catástrofe en cuestión;
- d) Fase Recuperativa, se establece después de la ocurrencia de desastres naturales u otros tipos de catástrofes y en ella se realizan los trabajos necesarios para el restablecimiento de la normalidad en los territorios afectados, incluyendo la desmovilización de los órganos de dirección y los recursos empleados en las fases precedentes.

La implantación de estas fases, la decide el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a propuesta del Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Excepcionalmente, dada la situación concreta en un territorio determinado, el Jefe de la Defensa Civil en la provincia afectada está facultado para establecer las fases correspondientes e informar a la mayor brevedad la medida tomada al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a través del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. En caso de estar activado el Consejo de Defensa Provincial, su Presidente asume esta responsabilidad.

De ser necesario, de acuerdo con la magnitud del desastre u otro tipo de catástrofe y sus consecuencias previsibles, el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias podrá proponer al Presidente del Consejo de Estado, la declaración del estado de emergencia para todo el territorio nacional o la parte de él afectada por el desastre natural o catástrofe en cuestión.

ARTICULO 14.- Los trabajos de salvamento y reparación urgente de averías en situaciones excepcionales y durante el cumplimiento de otras medidas de defensa civil, son organizados y dirigidos por los jefes de la Defensa Civil a su nivel y en su realización participan formaciones especiales, fuerzas y servicios especializados, Brigadas de Producción y Defensa, unidades de las Milicias de Tropas Territoriales, unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, así como otras entidades y fuerzas organizadas del pueblo, conforme a los planes establecidos al efecto.

ARTICULO 15.- La preparación de Defensa Civil de la población, atendiendo a las diferentes categorías en que ha sido organizada y de los órganos de dirección en los territorios, se lleva a cabo permanentemente bajo la dirección y control de los respectivos jefes de la Defensa Civil y los Estados Mayores Provinciales y Municipales, así como por los jefes de órganos y organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales, empleando todas las formas y vías posibles y una amplia utilización de los medios de difusión masiva. Se fundamenta en su carácter diferenciado y selectivo y se desarrolla sobre la base de los lineamientos de trabajo que establece el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

ARTICULO 16.- Las investigaciones científicas a realizar, relativas al sistema de medidas de defensa civil, así como sus objetivos y contenidos, son propuestos por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, el que participa en la organización y dirección de su ejecución conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, tomando en cuenta los proyectos presentados por los órganos y organismos estatales y otras instituciones del país.

El financiamiento y otras acciones a ejecutar para la realización de estas investigaciones, se atenderán a lo dispuesto por los ministerios de Finanzas y Precios y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

ARTICULO 17.- Los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales que responden por inversiones tanto nacionales como extranjeras, adquisición y producción de equipos, prestación de servicios y realización de otras producciones, estudios e investigaciones científico-técnicas, de requerirlo, deben realizar en el transcurso del proceso de compatibilización y de control de las medidas de defensa civil, estudios, evaluaciones de peligro, vulnerabilidad, riesgo natural y tecnológico y presentarán sobre

esta base, propuestas de planes de reducción de desastres, al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Los estudios, evaluaciones y planes a los que se hace referencia en el párrafo anterior, serán realizados por entidades cuyo objeto social corresponda y fueran reconocidas por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. En caso de que no exista este servicio a nivel nacional, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil podrá autorizar la contratación en el exterior.

ARTICULO 18.- Los órganos y organismos estatales, las entidades económica e instituciones sociales presentarán, en los plazos que se establezcan, al Estado Mayor Nacional u órganos territoriales de la Defensa Civil, la documentación contentiva de los estudios, evaluaciones y planes a que se refiere el artículo anterior, para certificar y autorizar la inversión, adquisición y producción de equipos, prestación de servicios y realización de otras producciones, estudios e investigaciones científico-técnicas.

ARTICULO 19.- Los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales, aseguran los recursos materiales y financieros, así como el personal calificado y otros necesarios para el cumplimiento de las medidas de defensa civil que tienen asignadas y aprobadas en sus respectivos planes.

Los gastos que son ocasionados por las acciones del enemigo en caso de agresión armada o por desastres naturales u otros tipos de catástrofes, siempre que se hayan cumplido las medidas preventivas de defensa civil, serán financiados según las disposiciones que en esta materia sean dictadas por los ministerios de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para dictar las disposiciones que resulten necesarias para el cumplimiento de lo que por el presente Decreto-Ley se establece, quien podrá delegar esta facultad en el Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

SEGUNDA: Se derogan cuantas disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley que comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los 8 días del mes de mayo de 1997.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, 15 DE Febrero DE 1999

AÑO XCVII

Número 7

Página 114

Decreto-Ley 190.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley de Medio Ambiente, de fecha 11 de julio de 1997, establece los principios que rigen la política ambiental del país y las normas básicas para regular las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general, a fin de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del país y por su artículo 12, inciso h, dispone que corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en coordinación con otros Órganos y Organismos competentes, instrumentar la política ambiental en materia de seguridad biológica y controlar su implementación.

POR CUANTO: El Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual Cuba es signataria, refiere como deber de las partes contratantes el establecimiento y mantenimiento de los medios para regular, y controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología.

POR CUANTO: La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción, de la cual Cuba es Estado Parte, refiere como deber de las Partes adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Convención en el plano interno.

POR CUANTO: El crecimiento de las instalaciones de investigación, producción, diagnóstico y docencia en nuestro país, y con éstas la complejidad de las investigaciones y la diversidad de organismos y microorganismos con potencial de riesgo de contaminación biológica para el medio ambiente y en particular para la población, los trabajadores, las plantas y los animales demanda la existencia de un marco jurídico adecuado en materia de seguridad biológica.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 90 inciso c) de la Constitución de la República, resuelve dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 190 DE LA SEGURIDAD BIOLÓGICA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente Decreto-Ley tiene como objetivo establecer los preceptos generales que regulan en el territorio nacional:

- a) El uso, investigación, ensayo, producción importación y exportación de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética;
- b) Las liberaciones al medio ambiente de agentes biológicos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Cubano en materia de seguridad biológica o relacionados con ella, la prevención de accidentes que pudieran originarse y la adopción de medidas destinadas a proteger el medio ambiente y en particular a la población, los trabajadores, los animales y las plantas, de los efectos adversos que puedan provocar las actividades relacionadas con agentes biológicos, organismos y fragmentos de éstos con información genética.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto-Ley se aplica a todas las personas naturales y jurídicas, que realicen en el territorio nacional las actividades relacionadas en el artículo 1.

ARTÍCULO 3.- A los efectos de la interpretación y aplicación del presente Decreto-Ley se definen los términos siguientes:

Agentes Biológicos: Microorganismos viables o sus productos, priones y otros organismos que causen o puedan causar enfermedades al hombre, a los animales y a las plantas.

Area de Liberación: Zona definida en el medio ambiente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en coordinación con los órganos y organismos competentes, donde se produce la introducción de agentes biológicos, de organismos y de fragmentos de éstos con información genética.

Autorización de Seguridad Biológica: Modalidad de la Licencia Ambiental, a través de la cual, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, previa evaluación del riesgo, autoriza a una persona natural o jurídica a realizar las actividades previstas en ella bajo las condiciones y requisitos que establece.

Barreras de contención: Todo lo que se interpone a la propagación de los materiales potencialmente peligrosos. Pueden ser primarias y secundarias. Contiene, entre otros elementos el sistema de tratamiento de desechos.

Instalaciones: Laboratorios, que realicen actividades biotecnológicas, de diagnóstico, investigación, producción y docencia, así como los locales y áreas en los cuales el riesgo biológico está presente.

Organismo: Toda entidad biológica modificada genéticamente o exótica para el país, capaz de reproducirse o de transferir material genético.

Organismo Modificado Genéticamente: Organismo cuyo material genético ha sido modificado por el hombre de una forma diferente a la natural.

Seguridad Biológica: Conjunto de medidas científico-organizativas, entre las cuales se encuentran las humanas, y técnico-ingenieras que incluyen las físicas, destinadas a proteger al trabajador de la instalación, a la comunidad y al medio ambiente de los riesgos que entraña el trabajo con agentes biológicos o la liberación de organismos al medio ambiente ya sean estos modificados genéticamente o exóticos; disminuir al mínimo los efectos que se puedan presentar y eliminar rápidamente sus posibles consecuencias en caso de contaminación, efectos adversos, escapes o pérdidas.

Uso: El empleo, la manipulación, el almacenamiento, la transportación y el control de agentes biológicos y organismos modificados genéticamente o no.

CAPITULO II COMPETENCIA

Sección Primera Del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

ARTÍCULO 4.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es el Organismo de la Administración Central del Estado encargado de trazar, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en relación con la seguridad biológica. A estos fines, en coordinación con los Órganos y Organismos competentes tendrá las funciones y atribuciones siguientes:

- a) Evaluar, orientar la gestión de los riesgos, y aprobar los ensayos o investigaciones sobre el terreno y las liberaciones al medio ambiente de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, con independencia del grupo de riesgo al cual puedan pertenecer;
- b) Organizar, dirigir y ejecutar inspecciones a las instalaciones y a toda área del territorio nacional donde se empleen o liberen agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética;
- c) Otorgar, suspender y revocar autorizaciones para la realización de actividades relacionadas con el uso, la investigación, el ensayo, la producción, la liberación, la importación y exportación de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética;
- d) Establecer las clasificaciones relativas a:
 - Los organismos que se liberen al medio ambiente sobre la base de su origen y el riesgo que representan para la salud humana y el medio ambiente;
 - Los agentes biológicos que afectan al hombre, los animales y las plantas y su distribución en grupos de riesgo;
 - Las instalaciones que manipulan agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética;
- e) Establecer, los mecanismos de estudio, evaluación y gestión de los riesgos por la liberación al medio ambiente de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética y los procedimientos de control, mitigación y tratamiento de los desechos biológicos peligrosos;

- f) Establecer el Sistema Nacional de Contabilidad y Control de los agentes biológicos y tóxicos y de los organismos que serán liberados al medio ambiente;
- g) Dirigir y ejecutar las comprobaciones a las barreras de contención existentes en las instalaciones que hacen uso de agentes biológicos y organismos;
- h) Disponer el cierre total o parcial de las instalaciones que hacen uso de agentes biológicos y organismos, que no cuenten con las medidas de seguridad y que puedan poner en peligro la salud humana y el medio ambiente;
- i) Estudiar, evaluar, organizar, coordinar, promover, participar y ejecutar según sea el caso, toda la actividad derivada de las responsabilidades y funciones asignadas a Cuba como Estado Parte de Convenios Internacionales sobre la materia o relacionados con ésta;
- j) Designar centros de referencia pertenecientes a diferentes órganos u organismos según sus condiciones científico técnicas y precisar las funciones a desarrollar en coordinación con los mismos;
- k) Adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y controlar el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o retención de:
 - Agentes biológicos y tóxicos, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificadas para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados;
- l) Establecer los procedimientos adecuados en la esfera de transferencia, manipulación y utilización de organismos, que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y en particular de los productos agrícolas;
- m) Las demás que le asignen el Estado y el Gobierno.

Sección Segunda

De los Demás Órganos y Organismos Estatales

ARTÍCULO 5.- Sin perjuicio de la acción rectora del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; los Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado y en particular, los que tienen a su cargo instalaciones y áreas de liberación, tendrán los deberes, atribuciones y funciones siguientes:

- a) Establecer las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para la realización de cualquier actividad relacionada con el uso de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, así como, para el establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Biológica;
- b) Incorporar los aspectos relacionados con la seguridad biológica en sus programas de investigación y desarrollo, inspecciones, inversiones y regulaciones internas, destinando los recursos necesarios para ello, así como, promover la realización de investigaciones puras en materia de seguridad biológica;
- c) Realizar una adecuada divulgación y preparación del público previo a toda liberación de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética al medio ambiente;
- d) Enviar al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente los datos que resulten de las investigaciones de los accidentes e infecciones ocurridas en las áreas de riesgo biológico, las emergencias fitosanitarias, epizootiológicas y epidemiológicas, así como cualquier otra información que se requiera relacionada con la Seguridad Biológica;
- e) Promover la capacitación y recalificación del personal que trabaje en las instalaciones y áreas de liberación en materia de seguridad biológica;
- f) Elaborar y organizar, en coordinación con la Defensa Civil, los planes de emergencia a desarrollar en sus respectivas instalaciones y áreas.

CAPÍTULO III DE LAS INSTALACIONES

ARTÍCULO 6.- Los titulares de las entidades que tengan a su cargo instalaciones en las cuales se hace uso de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, están en la obligación de cumplir con las medidas y requisitos de seguridad biológica establecidos para las actividades siguientes:

- a) Los niveles de seguridad biológica en las instalaciones de acuerdo al grupo de riesgo al que pertenezcan los organismos que se manipulen y teniendo en cuenta las prácticas, equipos de seguridad y diseño de la instalación;
- b) La manipulación, transportación y envío de muestras;
- c) El trabajo con plantas y animales de laboratorio;
- d) El establecimiento de estructuras que apoyen la seguridad biológica en

las instalaciones y la determinación de sus atribuciones y funciones de conformidad con la legislación vigente;

- e) La calificación, formación e información del personal;
- f) Los planes y simulacros de emergencia;
- g) El tratamiento y la disposición de desechos biológicos peligrosos; y
- h) El establecimiento de los procedimientos adecuados para garantizar la salvaguardia y la seguridad.

CAPÍTULO IV

DE LA LIBERACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS Y SUS PRODUCTOS, ORGANISMOS Y FRAGMENTOS DE ESTOS CON INFORMACION GENETICA AL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 7.- Las entidades que tienen a su cargo áreas de liberación estarán sujetas a un proceso de evaluación y gestión de riesgos que comprende un análisis multidisciplinario, sobre bases científicas para caracterizar e identificar la naturaleza y la magnitud de las situaciones hipotéticas de peligro, si las hubiera, su probabilidad de ocurrencia y la posible magnitud de los daños que ocasionen las actividades relacionadas con el uso y la liberación de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética y las medidas encaminadas a garantizar que dicha liberación se realice en condiciones de seguridad.

ARTÍCULO 8.- Los titulares de las entidades a que se refiere el artículo anterior, que se propongan liberar agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, estarán en la obligación de presentar al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para su aprobación:

- a) El expediente técnico de la liberación que se pretende realizar;
- b) Las recomendaciones pertinentes para la protección del trabajador y el medio ambiente en general y para la liquidación de cualquier posible repercusión negativa, con independencia de los avales y autorizaciones que corresponda otorgar a otros Organismos de la Administración Central del Estado.

ARTÍCULO 9.- Los representantes de los Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado, de las entidades referidas en los artículos anteriores, y el investigador, en lo que a cada cual compete y oído el parecer del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, estarán en la obligación

de desarrollar una adecuada divulgación y preparación de la población, que de una forma u otra, tendrá relación directa o indirecta con la liberación una vez aprobada. Para ello deberán apoyarse en los servicios que brinda el Sistema Nacional de Salud, las organizaciones políticas y de masas y los medios de comunicación masiva.

CAPÍTULO V

DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL ESTATAL DE LA SEGURIDAD BIOLÓGICA

ARTÍCULO 10.- Son objeto de Inspección Ambiental Estatal de la Seguridad Biológica las entidades que tienen a su cargo instalaciones donde se hace uso de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, que puedan afectar al hombre, los animales y las plantas, y áreas donde éstos se liberen al medio ambiente.

ARTÍCULO 11.- La Inspección de la Seguridad Biológica se realiza por los inspectores del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En caso de requerirse la participación de inspectores pertenecientes a otros Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado dicho Ministerio realizará la solicitud correspondiente y una vez autorizado por el Órgano u Organismo en cuestión procederá a su designación.

ARTÍCULO 12.- La Inspección de la Seguridad Biológica tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de las regulaciones vigentes en la materia y abarcará, entre otros, los aspectos siguientes:

- a) Verificación de las barreras de contención;
- b) Cumplimiento de las prácticas apropiadas;
- c) Cumplimiento de los planes de formación y actualización del personal en materia de seguridad biológica;
- d) Organización, recepción y destino final de muestras y agentes biológicos;
- e) Verificación de las normas y procedimientos para el uso de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, su liberación al medio ambiente, así como la verificación de su cumplimiento;
- f) Verificación del registro y control de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética existente en las instalaciones;

- g) Verificación del programa de seguridad biológica de la instalación, así como su plan de seguridad y protección física y su cumplimiento;
- h) Verificación de las condiciones de vigencia de las autorizaciones de seguridad biológica otorgadas;
- i) Cumplimiento de los compromisos del país en virtud de las Convenciones y Acuerdos Internacionales en materia de Seguridad Biológica o relacionados con ella, en los cuales sea Estado Parte.

CAPÍTULO VI

DE LAS AUTORIZACIONES DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

ARTÍCULO 13.- La realización de las actividades que por el presente artículo se dispone, requerirán de las autorizaciones que para cada tipo de actividad y para cada etapa expedirá el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, sin perjuicio de las que corresponda otorgar a otros Órganos u Organismos de la Administración Central del Estado:

- a) El emplazamiento, diseño, proyecto, construcción, remodelación, puesta en servicio, explotación y proceso de cierre de las instalaciones donde se hace uso de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética;
- b) La recepción o envío, transferencia previa solicitud y evaluación por las entidades pertinentes, de agentes biológicos y tóxicos, y organismos pertenecientes a los grupos de riesgo que previamente se determine, así como de equipos, tecnologías y materiales en general, entre instalaciones nacionales que los utilicen o entre Cuba y otros Estados, con el fin de asegurar que no sean utilizados para llevar a cabo actividades prohibidas nacional o internacionalmente;
- c) Los procedimientos para la destrucción o inutilización de agentes biológicos y tóxicos, cuando por su volumen, características y ubicación se consideren peligrosos o puedan ser violatorios de tratados internacionales de los que Cuba sea parte;
- d) La investigación, producción y ensayos sobre el terreno que involucren agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética;
- e) La liberación al medio ambiente de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética;
- f) La importación y exportación de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética;
- g) La transportación de desechos biológicos peligrosos; y

- h) Otras relacionadas con el cumplimiento de los compromisos contraídos por la República de Cuba en instrumentos jurídicos internacionales sobre la materia o relacionados con ella.

ARTÍCULO 14.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, propondrá a los Organismos competentes las condiciones y exigencias de conocimientos, incluyendo el establecimiento de cursos oficiales en la materia, que debe cumplir el personal que trabaje en instalaciones que, por su riesgo, requieran de un alto nivel de seguridad biológica.

CAPÍTULO VII DE LOS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS

ARTÍCULO 15.- Los titulares de las entidades que tengan a su cargo instalaciones y áreas de liberación, cuyas operaciones generen desechos biológicos peligrosos, entendiéndose por estos, los que contienen agentes biológicos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, que representen un peligro real o potencial para la salud humana y el medio ambiente en general, serán responsables por su uso, tratamiento, transportación y disposición en condiciones de seguridad y en correspondencia con las disposiciones ambientales vigentes, de forma que se garantice la protección del medio ambiente y en particular de la población y los trabajadores.

ARTÍCULO 16.- Las autoridades referidas en el artículo anterior que están responsabilizadas con el uso, tratamiento, transportación y disposición de desechos, deberán planificar dentro de su presupuesto de gastos los recursos financieros necesarios, a los efectos de garantizar la cobertura de los costos que generen dichas operaciones.

CAPÍTULO VIII DE LAS EMERGENCIAS BIOLÓGICAS

ARTÍCULO 17.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en coordinación con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, participará en la elaboración, ejecución y control de un Plan Nacional frente a la declaración de un Estado de Emergencia u otras situaciones provocadas por la ocurrencia de sucesos que pueden derivar en un daño con repercusión adversa inmediata o diferida en el medio ambiente en general, la población y los trabajadores en particular debido al escape o la liberación de organismos.

Asímismo, asesorará técnicamente a la Defensa Civil desde el punto de vista de la Seguridad Biológica en estas actividades, incluyendo la evaluación de la situación existente.

ARTÍCULO 18.- Los titulares de las entidades que tengan a su cargo instalaciones que hagan uso de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos con información genética, así como áreas donde estos se liberen al medio ambiente, estarán responsabilizadas con la elaboración, organización y preparación de planes de emergencia a desarrollar en sus respectivas instalaciones y áreas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA: Los centros, instituciones y los Organismos de la Administración Central del Estado presentarán al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en un plazo de noventa días, contados a partir de la promulgación de este Decreto-Ley, una información relativa a las liberaciones de organismos al medio ambiente realizadas en el país durante los últimos cinco años, con el objetivo de hacer la evaluación correspondiente del riesgo que representan, recomendar las medidas para su gestión y habilitar su registro. La información contendrá:

- Nombre científico y común;
- Designación;
- Hectáreas tratadas o plantadas;
- Cantidades liberadas por años; y
- Evaluación del riesgo para el trabajador y el medio ambiente.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Los Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado, oído en cada caso, el parecer del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, garantizarán la existencia de las estructuras organizativas, asesoras y consultivas que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto-Ley.

SEGUNDA: Se faculta al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para dictar cuantas regulaciones sean necesarias para el mejor cumplimiento de lo que por este Decreto-Ley se dispone.

TERCERA: El presente Decreto-Ley entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los 28 días del mes de Enero de 1999.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL



DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, 23 de Diciembre de 1999

AÑO XCVII

Número 83

Página 1139

Decreto-Ley No. 200.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley del Medio Ambiente, Ley No. 81, de 11 de julio de 1997, estableció en su Disposición Transitoria Segunda, que en el término de 180 días siguientes a su promulgación el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente presentaría al Consejo de Ministros la propuesta correspondiente en materia de contravenciones administrativas aplicables, de conformidad con lo expresado en la propia Ley.

POR CUANTO: A los fines de instrumentar la política ambiental nacional mediante una gestión ambiental adecuada, es esencial contar con un sistema de medidas administrativas ágil, eficaz y flexible, de modo que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que infrinja la legislación ambiental vigente, poniendo en peligro o dañando el medioambiente, sea sancionada administrativamente en esta vía con independencia de otras responsabilidades que pudieran derivarse.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el artículo 90, inciso c), de la Constitución de la República, resuelve dictar el siguiente:

DECRETO LEY No. 200 DE LAS CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El objetivo del presente Decreto-Ley es el de establecer contravenciones aplicables en materia de medio ambiente, sin perjuicio de las disposiciones vigentes o que oportunamente se establezcan, en lo relativo a determinados sectores de protección ambiental.

ARTICULO 2.1.- El régimen de medidas administrativas en materia de protección del medio ambiente que por el presente Decreto-Ley se dispone, incluye a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que incurran en las contravenciones que por esta norma se sancionan.

2.- La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas sujetos de este Decreto-Ley es exigible cuando la conducta sea consecuencia de un acto administrativo.

ARTICULO 3.- Las referencias que aparecen hechas a la Ley, corresponden a la Ley del Medio Ambiente, Ley 81 de 11 de julio de 1997. Las referencias al Ministerio, se entienden hechas al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

CAPITULO II CONTRAVENCIONES Y MEDIDAS APLICABLES

ARTICULO 4.1.- Las conductas relacionadas en el presente Capítulo se consideran contravenciones sancionables al amparo del presente Decreto-Ley y podrán ser objeto de las multas que en cada caso se señalan, en las que el valor primero es aplicable a las personas naturales y el segundo a las personas jurídicas.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser aplicables, de conjunto o con independencia a la multa, las medidas siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Prestación comunitaria, entendido como actividades relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente;

- c) Obligación de hacer lo que impida la continuidad de la conducta infractora;
- d) Prohibición de efectuar determinadas actividades;
- e) Comiso o resignación de los medios utilizados para cometer la contravención y de los productos obtenidos de ésta;
- f) Suspensión temporal o definitiva de licencias, permisos y autorizaciones; y
- g) Clausura temporal o definitiva.

ARTICULO 5.- Respecto al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y al otorgamiento de la Licencia Ambiental, se consideran contravenciones las siguientes y se impondrán las multas y medidas que para cada caso se establecen:

- a) No someter a consideración del Ministerio los nuevos proyectos de obras o actividades que aparecen refrendados en el artículo 28 de la Ley, previo a su ejecución y para la realización del proceso de evaluación de impacto ambiental, 250 pesos y 5 000 pesos;
- b) Realizar otras actividades cuya ejecución esté precedida o su desarrollo requerido de una Licencia Ambiental, de conformidad con las disposiciones que establezca el Ministerio al amparo del artículo 24 de la Ley, sin haber obtenido previamente dicha Licencia, o habiéndose denegado ésta, 250 pesos y 5 000 pesos;
- c) No someter al proceso de evaluación de impacto ambiental, cuando así lo disponga el Ministerio, de conformidad con el artículo 29 de la Ley:
 1. la expansión o modificación de obras o actividades en curso o la reanimación de procesos productivos, 200 pesos y 2 500 pesos;
 2. las obras o actividades en curso susceptibles de generar un impacto ambiental negativo significativo, 200 pesos y 2 500 pesos;
- d) Ejecutar una obra o realizar una actividad para la cual haya obtenido previamente la correspondiente Licencia Ambiental, contraviniendo los términos y condiciones estipulados en dicha licencia, 200 pesos y 5 000 pesos;
- e) No proporcionar la información que le sea debidamente requerida, entregar información inexacta u ocultar datos u otras informaciones solicitadas en el proceso de otorgamiento de la Licencia Ambiental, 200 pesos o 5 000 pesos.

ARTÍCULO 6.- Se consideran contravenciones respecto a la inspección

ambiental estatal y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) Dificultar o impedir el acceso de los inspectores ambientales estatales a las áreas o lugares a ser inspeccionados, 200 pesos y 2 250 pesos;
- b) Incumplir con las medidas dictadas por la inspección ambiental estatal para la adopción de medidas correctivas de adecuación a las disposiciones ambientales vigentes, 200 pesos y 2 250 pesos;
- c) No proporcionar la información que le sea debidamente requerida por los inspectores ambientales estatales en el desempeño de sus funciones, entregar información inexacta u ocultar datos u otras informaciones solicitadas para el normal desempeño de la inspección ambiental estatal, 200 pesos y 2 250 pesos;
- d) Continuar desarrollando un proceso o actividad pese a haberse determinado por el inspector ambiental competente su paralización o suspensión, de conformidad con el artículo 43 de la Ley, 250 pesos y 5 000 pesos.

ARTICULO 7.- Se consideran contravenciones respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) Acceder a áreas protegidas sin la debida autorización en los casos en que se requiera, 200 pesos y 2 250 pesos;
- b) Sin contar con la autorización correspondiente:
 - 1. Altere senderos, linderos, señales o avisos, 50 pesos y 1 000 pesos;
 - 2. Fije carteles, anuncios o vallas, 50 pesos y 1 000 pesos;
 - 3. Realice investigaciones, 200 pesos y 2 250 pesos;
- c) No elaborar en los plazos establecidos el Plan de Manejo o el Plan Operativo, según corresponda a su cargo la administración de un área protegida, 200 pesos y 2 250 pesos; y
- d) Infringir las prohibiciones, normas o especificaciones técnicas establecidas en el Plan de Manejo o el Plan Operativo, 250 pesos y 5 000 pesos.

ARTICULO 8.- Se consideran contravenciones respecto a la zona costera y su zona de protección, cuando sin contar con la autorización correspondiente se realicen las siguientes actividades, y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) Dañar o destruir especies de especial significado u objeto de protección específica, 250 pesos y 5 000 pesos;

- b) Colectar ejemplares de flora y fauna sin la debida autorización, 250 pesos y 2 250 pesos;
- c) Violar las disposiciones establecidas para la exportación de especies sujetas a regulaciones especiales, 250 pesos y 5 000 pesos; y
- d) Acceder a los recursos de la diversidad biológica sin tener la autorización correspondiente, 250 pesos y 5 000 pesos.

ARTICULO 9.- Se consideran contravenciones respecto a la zona costera y su zona de protección, cuando sin contar con la autorización correspondiente se realicen las siguientes actividades, y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) Altere o destruya los hitos de las señalizaciones, 50 pesos y 1 000 pesos;
- b) Realice actividades de equitación sobre las dunas y las playas, 50 pesos y 1000 pesos;
- c) Estacione o circule vehículos, motos o ciclos, excepto los equipos especializados de limpieza, vigilancia y salvamento, 50 pesos y 1000 pesos;
- d) Construya muros de contención para la protección de las edificaciones, 50 pesos y 1000 pesos;
- e) Extraiga arena de las playas y de sus fuentes de alimentación, 200 pesos y 2 250 pesos;
- f) Extraiga ejemplares de coral, gorgonias u otras especies marinas, que no sean objeto de protección en la legislación relativa a la pesca, 200 pesos y 2 250 pesos;
- g) Cemente los senderos o paseos marítimos que se establezcan en la zona costera y los cayos, 200 pesos y 2250 pesos;
- h) Vierta desechos de cualquier naturaleza a la zona costera, 200 pesos y 2 250 pesos;
- i) Interrumpa los accesos públicos y limite el derecho de paso, uso y disfrute, 250 pesos y 2 500 pesos;
- j) Fondee embarcaciones, o hunda o deposite objetos sobre las barreras coralinas, 250 pesos y 2 250 pesos;
- k) Rellene áreas de la zona costera, 250 pesos y 2 250 pesos;
- l) Queme, remueva, tale, destruya o de cualquier otra forma dañe la vegetación original de estas zonas, 250 pesos y 2 500 pesos; y
- m) Instale o construya nueva edificación, excepto en los casos previstos en la legislación específica, 250 pesos y 5 000 pesos.

ARTICULO 10.- Se consideran contravenciones respecto a la protección del

medio ambiente ante desastres naturales u otro tipo de catástrofes susceptibles de afectar el medio ambiente y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) No tener debidamente elaborados y actualizados los planes establecidos al respecto por la Defensa Civil, 200 pesos y 2 250 pesos; y
- b) No aplicar las medidas contenidas en los planes establecidos por la Defensa Civil al ocurrir las situaciones previstas, 200 pesos y 5 000 pesos.

ARTICULO 11.- Se consideran contravenciones respecto a los ruidos, vibraciones y otros factores físicos y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) Infringir las normas relativas a los niveles permisibles de sonidos y ruidos, 200 pesos y 2 250 pesos; y
- b) Infringir las normas relativas a las vibraciones mecánicas, energía térmica, energía lumínica, radiaciones ionizantes y contaminación por campo electromagnético, 200 pesos y 2 250 pesos.

ARTICULO 12.- Se consideran contravenciones respecto a la protección de la atmósfera y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) Infringir las normas técnicas relativas a la calidad del aire y los niveles permitidos de sustancias extrañas, 200 pesos y 5 000 pesos; y
- b) No aplicar las medidas orientadas para la recuperación, regeneración, reciclaje y destrucción de las sustancias refrigerantes con potencial de agotamiento de la capa de ozono, 250 pesos y 2 250 pesos.

ARTICULO 13.- Se consideran contravenciones respecto a los productos químicos tóxicos y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) La fabricación, importación y exportación de productos químicos tóxicos declarados como severamente restringidos, sin el permiso correspondiente, 200 pesos y 2 250 pesos; y
- b) La infracción de las disposiciones dictadas por el Ministerio relativas a la protección del medio ambiente contra los efectos de los productos químicos tóxicos capaces de ocasionar daños de consideración.

ARTICULO 14.- Se consideran contravenciones respecto a los desechos peligrosos y se impondrán las multas que para cada caso se establecen:

- a) Recoger, transportar, disponer, almacenar, o eliminar los desechos peligrosos fuera de la unidad generadora, sin el permiso correspondiente,

- 200 pesos y 5 000 pesos;
- b) No rendir la información requerida por el Ministerio relativa al inventario sobre estos desechos, 200 pesos y 2 000 pesos;
 - c) Incumplir con los términos de los Planes de Manejo de desechos peligrosos, 200 pesos y 5 000 pesos;
 - d) No informar en el plazo de 24 horas al Ministerio de la ocurrencia de un accidente durante las actividades de generación, transportación, almacenaje o eliminación de estos desechos, 200 pesos y 5 000 pesos.

ARTICULO 15.1.- La cuantía de las multas podrá ser disminuida en la mitad o aumentada al doble de su importe, atendiendo a las características del obligado a satisfacerla y a las consecuencias de la contravención.

2.- La aplicación de las medidas que bajo el régimen administrativo se impongan no exime de la responsabilidad civil y penal, cuando proceda.

CAPITULO III AUTORIDADES Y SUS FACULTADES

ARTICULO 16.1.- Las autoridades facultadas para imponer las medidas previstas en este Decreto-Ley, son:

- a) El jefe de Inspección Ambiental, los Jefes Provinciales de Inspección y los Inspectores Ambientales Estatales del Sistema del Ministerio;
- b) Los inspectores estatales de los Sistemas de Inspección Estatal de los Organismos de la Administración Central del Estado, cuya actividad repercuta sobre la protección del medio ambiente, los del Cuerpo de Guardabosques, los de la Defensa Civil y los de la Aduana General de la República.

2. Las Autoridades relacionadas en el inciso b) están facultadas, dentro de las esferas de competencia de sus respectivos organismos para imponer multa, amonestación, comiso o resignación de los medios utilizados para cometer la contravención y de los productos obtenidos de ésta, y la obligación de hacer lo que impida la continuidad de la conducta infractora.

3. Cuando por las circunstancias o trascendencia de la infracción se considere necesaria la aplicación de algunas de las medidas sobre las que el inspector actuante no tenga facultad, se dará traslado de inmediato a las Autoridades facultadas del Ministerio para que procedan según corresponda.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LAS MEDIDAS Y RECURSOS ANTE LAS INCONFORMIDADES

Sección Primera

Procedimiento para Imponer las Medidas

ARTICULO 17.1.- Las conductas que configuran contravenciones se conocen por la vía de la inspección estatal o por la vía de la denuncia ante la autoridad facultada.

2. La autoridad facultada, en los casos en que reciba denuncia y en los previstos en el artículo 16.3, realizará la comprobación que proceda y podrá disponer la retención provisional de los medio utilizados para cometer la contravención y de los productos de ésta.

ARTICULO 18.- Al detectarse por cualquiera de las autoridades facultadas en el presente Decreto-Ley una conducta que constituya una contravención, ésta se notificará de inmediato por escrito al representante de la entidad infractora o a la persona natural según proceda. El escrito contendrá, sin perjuicio de cualquier otra información pertinente, los siguientes datos:

- a) Del infractor: identificación, domicilio legal, conducta infractora, firma;
- b) Del inspector: nombre y apellidos, dependencia a la que se subordina, fecha y firma.

ARTICULO 19.- Atendiendo a la naturaleza de la infracción, la autoridad facultada cuenta con un plazo máximo de hasta 10 días para aplicar la medida correspondiente.

ARTICULO 20.- La reasignación de los medios utilizados para cometer la contravención y de los productos obtenidos de ésta, será ejecutada por la entidad que decida el Consejo de la Administración Provincial correspondiente, excepto cuando se trate de animales vivos extraídos de su entorno natural que se puedan poner en libertad de inmediato, en cuyo caso el inspector queda facultado para ejecutar la medida.

Sección Segunda

Recursos ante las Inconformidades

ARTICULO 21.- Contra las medidas impuestas por las autoridades facultadas se podrá establecer recurso de apelación ante el jefe inmediato superior de la autoridad que impuso la medida. El recurso se interpondrá dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de la medida y se resolverá dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de interpuesto. Contra lo resuelto no cabe ningún recurso en la vía administrativa.

ARTICULO 22.- La presentación del recurso no tiene efecto suspensivo, excepto cuando la Autoridad ante quien se interpuso disponga lo contrario.

CAPITULO V

DEL PROCESO DE REVISIÓN

ARTICULO 23.- El proceso extraordinario de revisión contra las medidas firmes como consecuencia de la comisión de una contravención procede cuando se conozcan hechos de los que no se tuvo noticia antes, aparezcan nuevas pruebas o se demuestre la improcedencia, ilegalidad, arbitrariedad o injusticia notoria en la imposición de la medida.

ARTICULO 24.- El proceso de revisión se solicitará al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, dentro del término de 180 días posteriores a la firmeza de la medida. Admitida la solicitud, el proceso será resuelto dentro del término de los 45 días posteriores.

CAPITULO VI

DEL PAGO DE LA MULTA Y CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS MEDIDAS

ARTICULO 25.1.- Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que operen total o parcialmente en divisas, pagarán las multas en dicha moneda.

2. Las personas naturales o jurídicas que no operen en divisas pagarán la multa en moneda nacional.

ARTICULO 26.- Las multas se pagarán en la oficina de cobros del municipio donde reside el infractor o la persona obligada a responder por él. Para ello presentará el comprobante de imposición, y en el acto se le entregará recibo acreditativo del pago, o copia del convenio de pago, que se podrá establecer entre el infractor y la oficina.

ARTICULO 27.- El responsable de la contravención efectuará el pago o establecerá el convenio de pago de la multa, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación.

ARTICULO 28.- Si no se abonare la multa o no se estableciera el convenio de pago después de transcurrido el plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de imposición de la medida, se tramitará la vía de apremio para su cobro.

ARTICULO 29.- En los casos en que se haya impuesto al infractor una obligación de hacer, atendiendo a la complejidad de la medida, la autoridad facultada le concederá un plazo para su cumplimiento. Si el infractor no cumple la obligación de hacer en dicho plazo, la autoridad competente gestionará que se cumpla la obligación mediante una entidad debidamente habilitada para ello, con cargo al infractor. El precio o tarifa correspondiente deberá ser satisfecho por el infractor inmediatamente que se le de a conocer, a no ser que por su elevada cuantía, la entidad correspondiente le otorgue plazos para abonarlo.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de conjunto con los órganos y organismos que corresponda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.2, en el término de un año siguiente a la promulgación del presente Decreto-Ley, establecerán las conductas específicas sobre las que tendrán competencia los inspectores de sus respectivos sistemas de inspección.

DISPOSICIÓN ESPECIAL

UNICA: Los inspectores ambientales estatales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, previa coordinación con el Jefe del Organismo correspondiente, quedan facultados para aplicar las medidas previstas en la legislación sectorial complementaria a la derogada Ley 33, de 10 de enero de 1981, en la medida que la contravención afecte al Medio Ambiente.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Ministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la mejor aplicación del presente Decreto-Ley.

SEGUNDA: Se deroga cualquier disposición de igual o inferior jerarquía que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, el que entrará en vigor a los 30 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los 22 días del mes de diciembre de 1999.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, 24 DE Diciembre DE 1999

AÑO XCVII

Número 84

Página 1355

Decreto-Ley 201.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un eslabón esencial para garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en nuestro país y constituye un objetivo importante de la política ambiental nacional y una responsabilidad internacional para la República de Cuba, como Parte Contratante del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

POR CUANTO: La Ley de Medio Ambiente, del 11 de julio de 1997, establece los objetivos básicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y dispone que corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente dirigir y controlar las actividades relacionadas con dicho Sistema, su gestión ambiental integral en el ámbito nacional en coordinación con otros órganos y organismos competentes, su dirección técnica y metodológica, el control del cumplimiento de los objetivos específicos por los cuales fueron declaradas las áreas protegidas y la administración de aquellas áreas que la Ley determine.

POR CUANTO: A los efectos de cumplir los objetivos recogidos en la citada Ley, relativos a la protección y conservación de la naturaleza y de los valores y recursos histórico-culturales vinculados, resulta necesario promover la protección especial de ecosistemas y hábitat naturales de alta diversidad genética o frágiles, de las especies, de los procesos evolutivos y de los recur-

sos genéticos, así como determinar las categorías que comprenden el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y regular su organización y su administración, aumentando el papel protector de las áreas adyacentes.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas por el artículo 90, inciso c) de la Constitución de la República, resuelve dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 201 DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El objeto del presente Decreto-Ley, es el de establecer el régimen legal relativo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual incluye las regulaciones del ejercicio de su rectoría, control y administración, las categorías de las áreas protegidas, su propuesta y declaración, el régimen de protección y el otorgamiento de las autorizaciones para la realización de actividades en dichas áreas.

ARTÍCULO 2.- Las áreas protegidas son partes determinadas del territorio nacional, declaradas con arreglo a la legislación vigente, e incorporadas al ordenamiento territorial, de relevancia ecológica, social e histórico-cultural para la nación y en algunos casos de relevancia internacional, especialmente consagradas, mediante un manejo eficaz, a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales, históricos y culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación y uso sostenible.

Estas áreas ordenadamente relacionadas entre sí conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual funciona como un sistema territorial, que a partir de la protección y manejo de sus unidades individuales, contribuye al logro de determinados objetivos de conservación de la naturaleza.

Para lograr un adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, podrán estructurarse subsistemas sobre la base de categorías de manejo, ecosistemas, provincias, regiones y entidades administrativas.

ARTÍCULO 3.- Para la estructuración y funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y atendiendo a la connotación de las áreas que lo componen, se establecen los siguientes niveles de clasificación:

- a) Áreas protegidas de significación nacional: Son aquéllas que por la connotación o magnitud de sus valores, representatividad, grado de conservación, unicidad, extensión, complejidad u otros elementos relevantes, se consideran de importancia internacional, regional o nacional, constituyendo el núcleo fundamental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas;
- b) Áreas protegidas de significación local: Son aquéllas que en razón de su extensión, grado de conservación o repetibilidad, no son clasificadas como áreas protegidas de significación nacional;
- c) Regiones especiales de desarrollo sostenible: Son extensas regiones donde, por la fragilidad de los ecosistemas y su importancia económica y social, se toman medidas de atención y coordinación de carácter estructural a nivel nacional, para el logro de objetivos de conservación y desarrollo sostenible.

Estas áreas también son denominadas áreas protegidas de uso múltiple y por sus características y para su gestión integral se regirán por su legislación específica y por lo establecido en el presente Decreto-Ley en los Capítulos III y VI.

ARTÍCULO 4.- A los efectos del presente Decreto-Ley, se entenderá por:

- a) Manejo: Formas y métodos de administración, conservación y utilización de los recursos de un área protegida, que se ejercen con el fin de lograr su aprovechamiento sostenible, preservando sus características y propiedades fundamentales;
- b) Categorías de manejo: Formas en que se clasifican las áreas protegidas sometidas a determinados tipos de manejo, según sus características y valores naturales e histórico-culturales. Cada categoría posee una definición y objetivos propios y su administración y manejo se realiza de acuerdo a determinados patrones;
- c) Plan de manejo: Instrumento rector que establece y regula el manejo de los recursos de un área protegida y el desarrollo de las acciones requeridas para su conservación y uso sostenible, teniendo en cuenta las características del área, la categoría de manejo, sus objetivos y los restantes planes que se relacionan con el área protegida. En el mismo se define qué, dónde y cómo realizar las actividades en cada área, se

preparan para cubrir un periodo de trabajo de 5 a 10 años y se insertan en el marco del ordenamiento territorial;

- d) Zona de amortiguamiento: Territorio contiguo al área protegida, cuya función es minimizar los impactos producto de cualquier actividad proveniente del exterior, que pueda afectar la integridad del área protegida en cuestión;
- e) Servicios medioambientales: Beneficios directos o indirectos que se obtienen de las áreas protegidas. Pueden ser de carácter espiritual, educativo, recreativo, científico, económico, ecológico, cultural u otro y contribuyen a mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y de la vida en general;
- f) Uso público: Todas aquellas actividades relacionadas con el manejo de visitantes a las áreas protegidas, en funciones recreativas, educativas, investigativas o interpretativas.

CAPITULO II

CATEGORIZACION DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

ARTÍCULO 5.- Las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con excepción de las Regiones Especiales de Desarrollo Sostenible, tendrán asignadas una de las categorías que se relacionan a continuación:

- a) Reserva Natural;
- b) Parque Nacional;
- c) Reserva Ecológica;
- d) Elemento Natural Destacado;
- e) Reserva Florística Manejada;
- f) Refugio de Fauna;
- g) Paisaje Natural Protegido;
- h) Área Protegida de Recursos Manejados.

ARTÍCULO 6.- Las categorías antes relacionadas están ordenadas en forma creciente, de acuerdo a la intensidad del manejo y a la posibilidad de intervención humana. La delimitación y categorización de las áreas, así como sus modificaciones, se realizarán sobre la base de evaluaciones científicas y compatibilización con los organismos y entidades implicadas atendiendo a:

- a) La magnitud y significación de sus valores y recursos naturales, especialmente en relación con la diversidad biológica;
- b) El ordenamiento territorial;
- c) El grado de naturalidad del área, considerando la incidencia de

- impactos ambientales;
- d) Los objetivos de manejo previstos y sus prioridades en base a las potencialidades naturales del área;
 - e) El potencial natural del área para el desarrollo de diferentes actividades socioeconómicas, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población;
 - f) La presencia, significación y grado de conservación de sus valores histórico-culturales; y
 - g) Su contribución a la recuperación, restauración, protección, conservación y uso racional de sus recursos y de los demás valores que sirven de base a su definición y categorización.

CAPITULO III

PROPUESTA Y DECLARACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

ARTÍCULO 7.- El Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo, es el órgano encargado de aprobar la declaración o modificación de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

ARTÍCULO 8.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, previo a realizar la propuesta a que se refiere el artículo anterior, efectuará un proceso de compatibilización con los órganos, organismos u otras entidades que ejecuten o tengan previsto ejecutar actividades en el área, o que ostenten responsabilidades estatales o de gobierno al respecto, en particular, las relativas a la defensa y el ordenamiento territorial, con los titulares de derechos en el territorio, la entidad propuesta para administrar el área y el Consejo de la Administración del territorio dónde se encuentre ubicada el área.

Asimismo, otros órganos, organismos y entidades podrán solicitar al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente proponer al Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo, otras áreas que resulten de interés ambiental, y la modificación o cambio de categoría de las ya declaradas.

En caso de no ser posible alcanzar una total compatibilización, las discrepancias subsistentes se elevarán acompañadas por un dictamen del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo para su definitiva solución.

ARTÍCULO 9.- La propuesta de área protegida deberá cumplir los requisitos siguientes:

- a) Realizarse sobre la base de evaluaciones científicas, debiendo especificar la magnitud y significación de sus valores y recursos naturales, diversidad biológica, grado de naturalidad, impactos ambientales que inciden, incluyendo afectaciones económicas y sociales, los objetivos de manejo previstos y sus prioridades, presencia, significación y grado de conservación de sus valores histórico, culturales, límites (derroteros), zona de amortiguamiento y categoría de manejo;
- b) Especificar el nivel jerárquico del área protegida, es decir, si se trata de un área protegida de significación nacional o de significación local;
- c) Fundamentar en qué forma la declaración del área como protegida, contribuye a conservar, proteger, recuperar, restaurar y utilizar racionalmente sus recursos naturales y demás valores que sirven de base para su definición y categorización; y
- d) Precisar cual será la entidad encargada de su administración.

CAPITULO IV CATEGORIAS DE MANEJO

Sección Primera Reserva Natural

ARTÍCULO 10.- La reserva natural es un área terrestre, marina o una combinación de ambas, en estado natural y sin población humana, de importancia nacional, regional o internacional, destinada principalmente a actividades de protección, investigación científica y monitoreo ambiental, que contiene elementos físico-geográficos, especies, comunidades o ecosistemas de flora y fauna de valor único o en peligro de extinción, que por su valor para la conservación de recursos genéticos o por su vulnerabilidad, precisan de una protección estricta.

En las reservas naturales solo se podrán realizar las actividades requeridas para su administración y manejo.

ARTÍCULO 11.- La reserva natural tiene como objetivos específicos los siguientes:

- a) Servir de banco genético a través de la protección de las especies, poblaciones;

- a) Comunidades o ecosistemas valiosos;
- b) Mantener los recursos genéticos en un estado dinámico y evolutivo;
- c) Preservar los hábitats, ecosistemas y especies representativas en su estado natural;
- d) Salvaguardar y mantener, respectivamente, las características estructurales del paisaje;
- e) Y los procesos ecológicos establecidos; y
- f) Proporcionar ejemplos de medio ambiente natural para la realización de estudios científicos, monitoreo ambiental y acciones de educación y formación.

ARTÍCULO 12.- Son directrices para designar un área como reserva natural las siguientes:

- a) El área debe estar exenta de intervención humana salvo la requerida para su administración y manejo y debe ser capaz de permanecer en esas condiciones;
- b) La conservación de la diversidad biológica del área, tiene que lograrse a través de la protección, sin realizar actividades de manejo o manipulación del hábitat, salvo las necesarias para cumplir sus objetivos.

Sección Segunda

Parque Nacional

ARTÍCULO 13.- El parque nacional es un área terrestre, marina, o una combinación de ambas, en estado natural o seminatural, con escasa o nula población humana, designada para proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas de importancia internacional, regional o nacional y manejada principalmente con fines de conservación de ecosistemas.

ARTÍCULO 14.- El parque nacional tiene como objetivos específicos los siguientes:

- a) Conservar la diversidad y estabilidad ecológica y los factores que influyen en la regulación del medio ambiente;
- b) Preservar en su estado natural ejemplos representativos de regiones físico-geográficas, comunidades bióticas, recursos genéticos y especies; permitir su evolución natural y garantizar la conservación de la diversidad biológica;
- c) Promover el respeto por los atributos ecológicos, geomorfológicos, culturales o estéticos que han justificado la designación, en un ambien-

te natural, conjugado con la educación del público en el sentido de interpretar la naturaleza y la historia para su conocimiento, apreciación y disfrute;

- d) Satisfacer las necesidades de las poblaciones autóctonas a través de prácticas sostenibles de uso de los recursos, garantizando que no se afecten los objetivos de manejo;
- e) Proporcionar oportunidades para la recreación y el turismo;
- f) Proteger y mostrar a visitantes y estudiosos para fines de educación, investigación y recreación, los valores culturales, históricos y arqueológicos como elementos de la herencia cultural de la nación; y
- g) Proteger, manejar y fomentar los recursos naturales y escénicos, con fines espirituales, científicos, educativos, recreativos y turísticos, para garantizar la preservación de dichos valores a un nivel que permita mantener el área en estado natural o seminatural.

ARTÍCULO 15.- Son directrices para la identificación del parque nacional las siguientes:

- a) El área debe contener ejemplos representativos de importantes regiones, características o escenarios naturales, en las cuales las especies de animales y plantas, los hábitats y los elementos geomorfológicos revisitan especial importancia científica, educativa, recreativa y turística;
- b) El área debe contener uno o más ecosistemas completos que no hayan sido materialmente alterados por la explotación o la ocupación humana.

Sección Tercera Reserva Ecológica

ARTICULO 16.- La reserva ecológica es un área terrestre, marina o una combinación de ambas, en estado natural o seminatural, designada para proteger la integridad ecológica de ecosistemas o parte de ellos, de importancia internacional, regional o nacional y manejada principalmente con fines de conservación de ecosistemas.

Las reservas ecológicas, a diferencia de los parques nacionales, pueden o no contener ecosistemas completos y presentan un grado de naturalidad menor o son relativamente de menor tamaño.

ARTÍCULO 17.- La reserva ecológica tiene los mismos objetivos específicos que el parque nacional.

ARTÍCULO 18.- Son directrices para la identificación de la reserva ecológica las siguientes:

- a) El área debe contener ejemplos representativos de importantes regiones, características o escenarios naturales, en las cuales las especies de animales y plantas, los hábitats y los elementos geomorfológicos, revisten especial importancia científica, educativa, recreativa y turística;
- b) Tendrá un relativo balance de valores naturales considerados de gran importancia para el país;
- c) Contendrá ecosistemas o parte de ellos materialmente poco alterados.

Sección Cuarta **Elemento Natural Destacado**

ARTÍCULO 19.- El elemento natural destacado es un área que contiene una o más características naturales de valor destacado o excepcional, por su rareza implícita y sus cualidades representativas o estéticas y que puede contener valores histórico-culturales asociados, siendo manejada con el fin de conservar dichas características y valores.

ARTÍCULO 20.- El elemento natural destacado tiene como objetivos específicos los siguientes:

- a) Proteger o preservar a perpetuidad las características destacadas que son específicas del área, a causa de su importancia natural y su calidad excepcional o representativa;
- b) Brindar oportunidades para la investigación, la educación, la interpretación y la apreciación del público, en un grado compatible con el objetivo precedente;
- c) Eliminar e impedir la explotación u ocupación hostiles al propósito de la designación;
- d) Proporcionar oportunidades para el desarrollo de actividades de recreación y turismo.

ARTÍCULO 21.- Son directrices para la identificación del elemento natural destacado las siguientes:

- a) El área tendrá relación con un monumento nacional o local, aprobado o propuesto, que cumpla las características de esta categoría;
- b) El área debe contener uno o más rasgos naturales de importancia notable;

- c) Puede incluir o no, asociado a los rasgos naturales anteriores o a estados de naturaleza conservada, valores histórico-culturales de importancia notable.

Sección Quinta

Reserva Florística Manejada

ARTÍCULO 22.- La reserva florística manejada es un área natural o semi-natural que necesita intervenciones activas de manejo para lograr la protección y mantenimiento de complejos naturales o ecosistemas, que garanticen la existencia y el buen desarrollo de determinadas comunidades vegetales o especies florísticas.

La reserva florística manejada, a diferencia de las categorías anteriormente establecidas, podrá presentar desequilibrios por ocurrir procesos dañinos, o rasgos particulares que requieran la manipulación del hábitat o las especies, con el fin de proveer condiciones óptimas, para su recuperación o adecuada protección, de acuerdo con circunstancias específicas.

ARTÍCULO 23.- La reserva florística manejada tendrá los objetivos específicos siguientes:

- a) Mantener o manejar el hábitat, de forma que se garanticen las condiciones necesarias para proteger a importantes especies, grupo de especies o comunidades vegetales;
- b) Proteger comunidades vegetales o especies florísticas de significación regional, nacional o local, que constituyen elementos o muestras representativas de unidades fitogeográficas de interés;
- c) Preservar el material genético existente, garantizando su evolución a partir del adecuado manejo de las poblaciones biológicas;
- d) Conservar diversos ecosistemas para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y los patrones del flujo genético;
- e) Mejorar y rehabilitar determinados hábitat o recursos naturales que sean importantes por su interrelación con comunidades vegetales o especies florísticas de interés;
- f) Propiciar la investigación y el monitoreo ambiental, especialmente en lo relativo al mantenimiento y recuperación de las comunidades vegetales a partir de su regeneración natural;
- g) Propiciar oportunidades para la educación ambiental; y
- h) Proporcionar oportunidades para el desarrollo de actividades de

recreación y turismo.

ARTÍCULO 24.- Son directrices para la identificación de la reserva florística manejada las siguientes:

- a) El área debe desempeñar una función importante en la protección de la naturaleza y la supervivencia de especies de la flora; y
- b) La conservación de los hábitats y especies dependerá de la intervención activa de la autoridad encargada del manejo, si es necesario a través de la manipulación del hábitat o de las propias especies.

Sección Sexta **Refugio de Fauna**

ARTÍCULO 25.- El refugio de fauna es un área terrestre, marina o una combinación de ambas, donde la protección y el manejo de los hábitats o especies resulte esencial para la subsistencia de poblaciones de fauna silvestre migratoria o residente de significación.

Los refugios de fauna no requerirán ser necesariamente territorios totalmente naturales, por lo que puede existir en ellos actividad humana vinculada al manejo de sus recursos, siempre que no contravenga las regulaciones establecidas y esté, en todo caso, en función de los objetivos específicos del área.

ARTÍCULO 26.- El refugio de fauna tendrá como objetivos específicos los siguientes:

- a) Mantener o manejar el hábitat de forma que se garanticen las condiciones necesarias para proteger a importantes especies, grupos de especies o comunidades zoológicas;
- b) Conservar diversos ecosistemas o hábitats para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones de animales y los patrones de flujo genético;
- c) Proteger especies, grupos de especies o comunidades bióticas de la fauna de significación regional, nacional o local, que constituyan elementos representativos de la fauna silvestre de Cuba;
- d) Preservar el material genético existente garantizando su evolución a partir del adecuado manejo de las poblaciones biológicas;
- e) Propiciar la investigación y el monitoreo ambiental, específicamente en lo relativo al mantenimiento y recuperación de las poblaciones animales;

- f) Propiciar oportunidades para la educación ambiental; y
- g) Proporcionar oportunidades para el desarrollo de actividades de recreación y turismo.

ARTÍCULO 27.- Son directrices para la identificación del refugio de fauna las siguientes:

- a) El área debe desempeñar una función importante en la protección de la naturaleza y la supervivencia de las especies animales;
- b) La conservación de estos hábitats y especies dependerá de la intervención activa de la autoridad encargada del manejo.

Sección Séptima **Paisaje Natural Protegido**

ARTÍCULO 28.- El paisaje natural protegido es un área terrestre, marina o una combinación de ambas, en estado natural o seminatural que es manejada principalmente con fines de protección y mantenimiento de condiciones naturales, servicios medioambientales y desarrollo del turismo sostenible.

Los paisajes naturales protegidos se localizan generalmente en territorios de interés ecológico, ambiental y turístico, tales como áreas costeras y marinas, montañas, cuencas de ríos y embalses, la periferia de zonas urbanizadas y otras. El valor de sus recursos podrá no ser notable, pero facilitan un flujo de servicios y procesos ecológicos vitales, tales como servir de corredores biológicos, mantener la pureza del aire y el agua, proteger contra la erosión, mantener valores naturales estéticos, u otras funciones de similar naturaleza.

ARTÍCULO 29.- Los paisajes naturales protegidos tendrán los objetivos siguientes:

- a) Mantener los ecosistemas en las condiciones necesarias para la continuación de los procesos naturales;
- b) Mantener o recuperar creativamente un entorno natural, atractivo, así como mejorar las condiciones ambientales en un área dada;
- c) Propiciar la protección y mejoramiento de áreas que poseen valores naturales o histórico-culturales;
- d) Proteger y manejar el paisaje para asegurar la calidad del medio ambiente, considerando el desarrollo de actividades económicas y productivas de forma sostenible;
- e) Proteger y fomentar las bellezas escénicas terrestres y marítimas;

- f) Proporcionar oportunidades para el desarrollo de actividades de recreación y turismo;
- g) Desarrollar actividades de educación ambiental; y
- h) Mantener la calidad del paisaje mediante prácticas de ordenamiento adecuadas.

ARTÍCULO 30.- Son directrices para la identificación del paisaje natural protegido las siguientes:

- a) El área debe tener funciones ecológicas y medioambientales bien definidas;
- b) Las actividades económicas y productivas sostenibles no tendrán un peso considerable dentro del área.

Sección Octava

Área Protegida de Recursos Manejados

ARTÍCULO 31.- Es aquella área terrestre, marina o una combinación de ambas, que contiene sistemas naturales o seminaturales y que es objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y proporcionar, al mismo tiempo, un flujo sostenible de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades locales o nacionales. A los fines de su funcionamiento, deberán contener en su interior otras áreas protegidas de categoría más estricta.

Las áreas protegidas de recursos manejados podrán ser denominadas de forma diferente, siempre que dicha denominación no coincida con las restantes categorías establecidas en este Decreto-Ley.

ARTÍCULO 32.- El área protegida de recursos manejados tendrá los objetivos siguientes:

- a) Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales del área;
- b) Propiciar diversos usos de los recursos naturales y prácticas de manejo racionales, para la obtención sostenida de variadas producciones;
- c) Promover la obtención y extensión de resultados científico-técnicos vinculados al aprovechamiento integral de recursos naturales en territorios de alta fragilidad ecológica;
- d) Proteger valores naturales e histórico-culturales de significación regional, nacional y local;

- e) Propiciar la elevación del nivel de vida y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales;
- f) Promover actividades de educación ambiental;
- g) Propiciar oportunidades para el desarrollo de actividades de recreación y el turismo;
- h) Proteger y mantener la diversidad biológica y otros valores naturales del área; e
- i) Preservar la base de recursos naturales contra modalidades de uso de los recursos que sean perjudiciales para la diversidad biológica del área.

ARTÍCULO 33.- Son directrices para identificar un área protegida de recursos manejados las siguientes:

- a) Por lo menos dos terceras partes de su superficie deben estar en condiciones naturales o seminaturales, pero puede contener también zonas limitadas de ecosistemas modificados;
- b) El área debe estar en condiciones de tolerar la utilización sostenible de sus recursos, sin que ello vaya en detrimento de sus valores naturales.

CAPITULO V

OTROS TITULOS QUE IDENTIFICAN O JERARQUIZAN LAS ÁREAS PROTEGIDAS

ARTÍCULO 34.- La identificación con arreglo al presente Decreto-Ley de una categoría de manejo a un área protegida, es compatible con el otorgamiento a la misma, a sus partes o elementos de otros títulos o distinciones otorgados con arreglo a la legislación nacional o los emitidos por organismos internacionales, como pudieran ser entre otros: monumento nacional o local, reserva de la biosfera o sitio de patrimonio mundial.

ARTÍCULO 35.- Las propuestas para que un área protegida o parte integrante de ésta, sea distinguida con alguno de los títulos o distinciones que se establezcan por los organismos especializados de las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales, deben ser avalados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

CAPITULO VI

REGION ESPECIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ARTÍCULO 36.- La región especial de desarrollo sostenible, también denominada área de uso múltiple, constituye una clasificación especial de área protegida, que por sus características de gran extensión, alto grado de influencia humana, potencialidad económica e importantes valores naturales y ecosistemas frágiles, se diferencia substancialmente del resto de las categorías de manejo establecidas en este Decreto-Ley.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las mismas podrán contener en su interior, áreas protegidas con categorías de manejo establecidas en este propio Decreto-Ley y podrán tener, de acuerdo con sus valores y objetivos específicos, una zona de amortiguamiento.

ARTÍCULO 37.- Las regiones especiales de desarrollo sostenible tienen, entre otros, los objetivos específicos siguientes:

- a) Ajustar las producciones locales a formas racionales y sostenibles;
- b) Elevar el nivel de vida de las poblaciones rurales;
- c) Proteger los suelos, controlando las actividades o procesos que causen erosión, sedimentación y otros procesos degradantes;
- d) Conservar los recursos hídricos;
- e) Incrementar la reforestación y el uso de los productos no madereros del bosque;
- f) Proteger la flora y la fauna, los ecosistemas y los paisajes, conservando en general la diversidad biológica;
- g) Destacar los sitios de valor histórico-cultural;
- h) Posibilitar y promover la educación y la interpretación ambiental;
- i) Posibilitar y promover la recreación y el turismo; y
- j) Proteger las costas contra los procesos erosivos del mar y las afectaciones debido a los cambios climáticos globales.

CAPITULO VII

REGIMEN DE VIGILANCIA Y PROTECCION

Sección Primera

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 38.- El régimen de vigilancia y protección del Sistema Nacional

de Áreas Protegidas es el que se establece en este Decreto-Ley y en las restantes disposiciones legales vigentes que resulten de aplicación, de acuerdo con los fines y objetivos del Sistema y comprende el conjunto de acciones y medidas que se adoptan en un área protegida encaminadas a conservar, vigilar, proteger y mantener la integridad de sus valores y a asegurar el adecuado uso de sus recursos naturales.

ARTÍCULO 39.- Las personas naturales o jurídicas encargadas de la administración de un área protegida, serán responsables de su protección.

ARTÍCULO 40.- En las áreas protegidas cuya categoría de manejo permita la realización de actividades económicas y sociales, estas se llevarán a cabo utilizando técnicas ambientalmente aceptables y adecuadamente integradas al entorno natural.

ARTÍCULO 41.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, queda facultado para establecer, en coordinación con los órganos, organismos y entidades competentes, regímenes especiales de vigilancia y protección de carácter más estrictos para la realización de determinadas actividades en las áreas protegidas, a fin de garantizar que dichas actividades no causen perjuicios al medio ambiente.

ARTÍCULO 42.- Las administraciones de las áreas protegidas podrán proponer a los órganos y organismos competentes, otras normas y regulaciones encaminadas a garantizar de manera coordinada la protección y el manejo eficaz de las áreas protegidas.

Sección Segunda

Cuerpo de Guardabosques y otras Fuerzas Especializadas

ARTÍCULO 43.- Para conservar y proteger la integridad de los valores protegidos en las áreas, actuarán en estrecha colaboración con la administración del área el Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior y los cuerpos de inspectores del Ministerio de la Industria Pesquera y del Ministerio de la Agricultura, así como cualquier otro personal que la entidad administradora designe, quienes sin interferir en las funciones de los cuerpos anteriormente mencionados, apoyen a la administración del área en su gestión, sin perjuicio de las actividades de inspección, supervisión y control ambiental o de cualquier otro tipo que corresponda al Ministerio de Ciencia, Tecnología y

Medio Ambiente y a otros órganos y organismos estatales en el ejercicio de sus atribuciones.

ARTÍCULO 44.- La administración del área deberá contribuir, además, a la preparación del personal al que se hace referencia en el artículo anterior, dándole participación en programas de capacitación en relación a la protección de los recursos naturales y de la diversidad biológica en general.

CAPITULO VIII GENERALIDADES

Sección Primera El plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

ARTÍCULO 45.- Para garantizar la preservación de los valores enmarcados dentro de las áreas protegidas, estas contarán con:

- a) El Plan del Sistema Nacional de Areas Protegidas, el cual establece el marco programático y la estrategia de actividades del sistema y de las áreas que lo componen;
- b) El Plan de Manejo; y
- c) La Zona de Amortiguamiento.

ARTÍCULO 46.- El Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se establece por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y es el documento rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual establece las acciones a realizar a corto y mediano plazo, a través de objetivos, normas y programas, es un instrumento de carácter normativo metodológico para la coordinación de la actividad y de la política ambiental en las áreas protegidas y sus elementos se incorporan y sirven de guía a los planes ambientales y territoriales y a los planes de manejo de las áreas protegidas.

El Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas será elaborado mediante el principio de la planificación participativa en un plazo máximo de un año a partir de la aprobación de este Decreto-Ley y actualizado en periodos de 5 años.

Sección Segunda Plan de Manejo

ARTÍCULO 47.- La administración del área protegida será responsable de

la elaboración de su plan de manejo o en su defecto el plan operativo, y de la presentación del mismo al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para su aprobación, en un plazo máximo de 2 años contados a partir de la fecha de su creación.

El Plan de Manejo incluirá los correspondientes estudios económicos para la conservación, uso sostenible o recuperación de los recursos naturales del área.

Provisionalmente y mientras no exista Plan de Manejo, podrá ser sustituido por un Plan Operativo, el cual se elaborará para un período de hasta dos años.

ARTÍCULO 48.- Los Planes de Manejo se implementarán a través de Planes Operativos que contendrán los indicadores para el Plan de la Economía Nacional que se elabore para el área protegida.

ARTÍCULO 49.- Los planes de manejo se compatibilizarán de forma armónica y ambientalmente sostenible con el ordenamiento territorial, de conformidad con las categorías y objetivos de las áreas.

ARTÍCULO 50.- El cumplimiento del plan de manejo y del plan operativo será controlado por el organismo encargado de la administración del área y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que correspondan a otros órganos u organismos estatales.

Sección Tercera

Zona de Amortiguamiento

ARTÍCULO 51.- La zona de amortiguamiento tiene como finalidad facilitar la protección, el control, la vigilancia, la inspección y la mitigación de los impactos externos sobre el área protegida y su extensión estará en dependencia de la dimensión y de la categoría del área protegida y de las características de las actividades a controlar en cada caso.

ARTÍCULO 52.- Las zonas de amortiguamiento estarán sujetas a regulaciones específicas según los objetivos y funciones inherentes a dicha zona y en correspondencia con la categoría de manejo del área protegida.

Estas regulaciones y lineamientos se establecerán en el Plan de Manejo del

área para ser introducido en los planes de ordenamiento territorial y en los Planes Ramales de los organismos con incidencia en la misma.

CAPITULO IX

REGIMEN PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN AREAS PROTEGIDAS Y SUS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

ARTÍCULO 53.- Toda obra o actividad que se pretenda desarrollar en un área protegida o en su zona de amortiguamiento, podrá estar sujeta a una previa Licencia Ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, salvo que resulte expresamente exenta de tal requisito, conforme a lo que se disponga en el plan de manejo.

ARTÍCULO 54.- El desarrollo de proyectos, obras o actividades en áreas protegidas, se realizará siempre en coordinación con la administración del área y garantizando la obtención de beneficios para dicha área y los pobladores locales.

CAPITULO X

RECTORIA, CONTROL Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

ARTÍCULO 55.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es el Organismo de la Administración Central del Estado, encargado de dirigir y controlar las actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de su gestión ambiental integral en el ámbito nacional en coordinación con otros órganos y organismos competentes, de su dirección técnica y metodológica y del control del cumplimiento de los objetivos específicos por los cuales fueron declaradas dichas áreas.

ARTÍCULO 56.- A los efectos expresados en el artículo anterior y sin perjuicio de las funciones y atribuciones conferidas a otros órganos y organismos estatales, corresponderá al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente:

- a) Controlar que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas logre los objetivos establecidos, para lo cual dictará en el ámbito de su competencia, las regulaciones correspondientes y propondrá las que resulten necesarias a los órganos y organismos competentes;

- b) Coordinar con los organismos especializados y con las administraciones locales del Poder Popular, la determinación y delimitación de las distintas áreas protegidas solicitadas para su declaración;
- c) Establecer los requerimientos y formalidades a cumplir en toda solicitud de propuesta de áreas protegidas;
- d) Realizar los estudios de proyectos globales del Sistema Nacional y coordinar y controlar el estado y ejecución de los proyectos específicos de cada actividad;
- e) Conciliar, coordinar o controlar según corresponda la elaboración de los planes económicos y ejercer el control de las actividades de aprovechamiento que se realicen en las áreas protegidas con potencialidades para esto;
- f) Participar en el diseño y evaluar la eficacia del sistema de vigilancia y protección en coordinación con el Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior, otras fuerzas especializadas y las administraciones locales del Poder Popular;
- g) Establecer los lineamientos generales para la elaboración de los planes de manejo de cada categoría de área protegida;
- h) Coordinar y propiciar la participación efectiva de las organizaciones de masas y sociales, en el estudio, conocimiento y manejo coordinado de las áreas protegidas;
- i) Representar o coordinar la representación de la República de Cuba ante las organizaciones internacionales vinculadas a la gestión de áreas protegidas, así como proponer al Gobierno la participación en programas de colaboración internacional en esta materia;
- j) Elaborar y proponer programas de capacitación y superación del personal vinculado con la actividad de protección del medio ambiente: y especialmente con la protección y manejo de áreas protegidas;
- k) Dictaminar sobre las propuestas de áreas protegidas que reúnan condiciones para optar por reconocimiento a nivel internacional; y
- l) Establecer las disposiciones que se requieran para la adecuada conservación de las áreas propuestas y en proceso de declaración, hasta tanto concluya dicho proceso.

ARTÍCULO 57.- Las personas naturales y jurídicas que tengan bajo su administración áreas protegidas, están obligadas a cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Decreto-Ley y las que dicte el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y a ejecutar las acciones aprobadas en el plan de manejo para cada área en específico.

ARTÍCULO 58.- Respecto a las áreas protegidas con los valores naturales más sobresalientes del país, las ubicadas en ecosistemas particularmente frágiles, las que impliquen categorías de manejo de protección estricta, las áreas terrestres y marítimas que no pueden ser administradas como un todo por un solo organismo ramal y en especial las Reservas Naturales, los Parques Nacionales y las Reservas Ecológicas, se considerará en primer término la conveniencia de su administración por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, salvo cuando resulte pertinente que se realice de modo diferente, conforme al análisis que en cada caso tenga lugar de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Decreto-Ley.

ARTÍCULO 59.- La administración de las áreas protegidas podrá realizarse en las formas siguientes:

- a) Individual: cuando se designa a una persona natural o jurídica única responsable. Es la forma de administración que se aplica a las categorías de manejo comprendidas en los incisos a), b), c), d), e) y f), del artículo 5, salvo cuando en casos excepcionales se determine de forma diferente;
- b) Coordinada: cuando se designan varias personas naturales o jurídicas con grandes intereses en el área para que de conjunto la administren. En este caso dichas personas, de común acuerdo, podrán crear una Junta de Administración. Es la forma de administración que se aplica en las categorías de manejo comprendidas en los incisos g) y h) del artículo 7, salvo cuando en casos excepcionales se determine de forma diferente.

ARTÍCULO 60.- Toda discrepancia que surja entre entidades dentro del perímetro de un área protegida respecto al uso y explotación de los recursos naturales de dicha área, será puesta en conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el que conciliará las discrepancias y resolverá lo que proceda, adoptando las decisiones pertinentes o elevando al Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo las propuestas de medidas que correspondan en cada caso.

CAPITULO XI

FINANCIAMIENTO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

ARTÍCULO 61.- Los gastos que genere el control y manejo de las áreas protegidas se financiarán con cargo al presupuesto de los órganos, organismos o

entidades que administran dichas áreas.

Asimismo, estos órganos, organismos y entidades podrán propiciar y obtener financiamiento por otras vías, siempre que cumplan con lo establecido en las regulaciones y disposiciones vigentes al respecto y se realice en cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos en los planes de manejos para las áreas protegidas.

ARTÍCULO 62.- El financiamiento obtenido por otras vías, será invertido en beneficio de los objetivos generales y específicos establecidos para cada área protegida y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en correspondencia con lo que al efecto se disponga por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, sobre las bases generales acordadas con el Ministerio de Finanzas y Precios y en coordinación con otros órganos y organismos competentes.

ARTÍCULO 63.- Las entidades encargadas de la administración de las áreas protegidas cumpliendo con las disposiciones y regulaciones vigentes al respecto, podrán promover actividades y cobrar por la prestación de determinados servicios que permitan obtener fondos para la conservación, el manejo, la vigilancia y la protección de dichas áreas, las que siempre estarán en correspondencia con la categoría y objetivos específicos de manejo del área.

CAPITULO XII

REGULACIONES PARA EL USO PÚBLICO EN ÁREAS PROTEGIDAS

ARTÍCULO 64.- Las zonas de uso público serán identificadas en el ordenamiento territorial.

ARTÍCULO 65.- Las áreas protegidas tienen dentro de sus funciones, la de brindar oportunidades de realizar determinadas actividades públicas acordes con su categoría de manejo y objetivos específicos, las que deben ser realizadas de forma controlada teniendo en cuenta las siguientes regulaciones:

- a) El uso público deberá contar con administración, infraestructura adecuada, personal calificado y plan de manejo o al menos un plan operativo;
- b) Los proyectos constructivos dentro de las áreas protegidas deberán realizarse con criterios de sostenibilidad, de forma tal que garanticen

- la preservación de los valores que caractericen dichas áreas, el equilibrio con el entorno y no se contradigan con sus objetivos de manejo;
- c) Se realizará el monitoreo dinámico del impacto en los sitios a visitar, con vistas a actualizar las regulaciones de uso y protección que resulten necesarias;
 - d) Los senderos a recorrer dentro de cada área deberán ser diseñados sobre bases científicas, de modo que permitan la observación, sin alterarlos, de los valores naturales e histórico-culturales;
 - e) Las entidades turísticas y otras instituciones deben convenir previamente con la administración del área las visitas, número de visitantes, periodicidad y actividades a realizar;
 - f) Se requerirá que los visitantes sean acompañados de un guía cuando visiten lugares sensibles;
 - g) La observación de fauna silvestre por los visitantes se realizará desde senderos o puestos de observación designados al efecto, o en las zonas señaladas en el plan de manejo; y
 - h) El sistema de zonificación del área protegida y su señalización en el terreno, debe contribuir a que la presencia de los visitantes y sus desplazamientos, se realicen según lo establecido en el plan de manejo.

Las regulaciones para el uso público de cada área en específico se deberán incluir en el plan de manejo del área en cuestión y formarán parte del mismo.

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, por su función rectora en materia de medio ambiente y su protección y dentro de ello por su responsabilidad de dirigir y controlar las actividades relacionadas con las áreas protegidas, participará activamente en la elaboración de las regulaciones que sean necesarias para el desarrollo de las actividades, particularmente las mineras, agropecuarias, turísticas e hidroenergéticas, que tengan lugar dentro de las áreas protegidas, las que deberán estar en correspondencia con las categorías de manejo establecidas. Además, podrá elaborar las regulaciones necesarias para minimizar los efectos adversos que pudieran generarse de estas actividades.

SEGUNDA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en los casos de áreas protegidas donde coincida un monumento nacional, monumen-

to local o sitio de Patrimonio Mundial, coordinará con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura para cualquier aspecto del manejo aplicable a los títulos de referencia.

TERCERA: El Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo, al declarar un área protegida o con posterioridad a su declaración, podrá establecer prohibiciones o regulaciones adicionales y específicas, con vistas a la protección y uso racional de esas áreas y sus recursos, con independencia de las disposiciones generales vigentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de publicación de este Decreto-Ley, deberá elaborar una relación de todas las áreas con valores dignos de ser protegidos para conocimiento de los órganos, organismos u otras entidades, que ejecuten o tengan previsto ejecutar actividades en las áreas u ostenten responsabilidades estatales o de gobierno al respecto, en especial al Instituto de Planificación Física, a fin de que en lo posible esto sea tomado en cuenta a los efectos de la planificación, uso y manejo de las mismas. La relación de las áreas contendrá los límites correspondientes, así como los de sus áreas de amortiguamiento.

SEGUNDA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el término de un año contado a partir de la publicación del presente Decreto-Ley, someterá a la aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo aquellas áreas que hasta el presente se les ha brindado algún grado de amparo legal para su protección. Transcurrido ese período sin que se haya iniciado dicho trámite, quedará sin efecto el régimen legal anterior.

Hasta tanto culmine el trámite de aprobación, los administradores o titulares de derechos de las áreas a que se refiere el párrafo anterior, están obligados a cumplir las disposiciones establecidas por el presente Decreto-Ley y estarán sujetos al régimen de sanciones que al respecto se establezca.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se deroga la Ley No. 27 del 8 de enero de 1980, De la Comisión Rectora del Gran Parque Nacional “Sierra Maestra” y cuantas otras disposi-

ciones se opongan a lo que por el presente se regula.

SEGUNDA: El presente Decreto-Ley entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los 23 días del mes de diciembre de 1999.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, 14 DE AGOSTO DE 2000,

AÑO XCVIII

Número 68

Página 373

Decreto-Ley 212.

CONSEJO DE ESTADO.

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley No. 81 de 11 de julio de 1997, Ley del Medio Ambiente, incluye entre los recursos marinos la zona costera y su zona de protección, las bahías, los estuarios y las playas, la plataforma insular, los fondos marinos y los recursos naturales vivos y no vivos contenidos en las aguas marítimas y sus zonas emergidas y establece los principios generales para su conservación y mejora conforme a la política integral de desarrollo sostenible del país y los principios enunciados en el capítulo 17 del Programa 21, adoptado en la Conferencia de Naciones Unidas, sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992.

POR CUANTO: Las zonas costeras constituyen el hábitat de un número significativo de especies marinas durante las fases primarias, las más vulnerables de su ciclo de vida, por lo que la erosión, la contaminación, el desmonte de los manglares, el incremento de asentamientos humanos en esta zona, las construcciones sobre las dunas, la actividad marítimo portuaria, la siembra de plantas inapropiadas, la extracción de áridos para la construcción, la destrucción de dunas litorales, el relleno de lagunas costeras, la ejecución de obras marítimas y la sobreexplotación de los recursos marinos, entre otros factores, conducen a su modificación y a la pérdida de la diversidad biológica.

POR CUANTO: Nuestras costas, con una extensión superior a los 5 746 kilómetros de longitud y la existencia de más de 4 000 cayos e islotes, donde se manifiesta una diversidad biológica abundante, han venido recibiendo durante años impactos que inciden negativamente sobre la conservación de este escenario natural, provocado por los usos industriales, agrícolas, de transporte, pesqueros, turísticos, entre otros.

POR CUANTO: La explotación sostenible de nuestros recursos naturales, entre los que se encuentran los ubicados en la cayería, constituyen un imperativo para el desarrollo económico-social del país, por lo que es necesario establecer los principios y regulaciones sobre la que se realizará la misma, de forma tal que se preserve este sensible ecosistema.

POR CUANTO: Las condiciones antes referidas, unido a la tendencia del crecimiento demográfico en la zona costera y la ocurrencia de diversos fenómenos naturales, exige el establecimiento de medidas dirigidas a la utilización económica planificada y ambientalmente racional de nuestras costas, islas, cayos y penínsulas en correspondencia con la naturaleza de estos recursos y con una proyección perspectiva encaminada a la protección de sus valores naturales y culturales, su aprovechamiento racional y la adopción de acciones encaminadas a su restauración y mejoramiento.

POR CUANTO: La legislación vigente para la regulación del uso, manejo y protección de las costas es muy diversa y heterogénea, encontrándose consagrada en instrumentos jurídicos de diferentes fechas y rangos, de modo que no comprende todos los aspectos necesarios para la adecuada gestión ambiental de las costas y resulta insuficiente e ineficaz para el cumplimiento de tales objetivos, todo lo cual aconseja su modificación integral.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en virtud de las facultades que le están conferidas por el artículo 90, inciso c) de la Constitución de la República, adopta el siguiente:

DECRETO LEY No. 212 GESTION DE LA ZONA COSTERA

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Sección Primera Objetivo

ARTÍCULO 1.- El presente Decreto Ley tiene como objeto establecer las disposiciones para la delimitación, la protección y el uso sostenible de la zona costera y su zona de protección, conforme a los principios del manejo integrado de la zona costera.

Sección Segunda Límites

ARTÍCULO 2.- Se define como zona costera, la franja marítimo terrestre de ancho variable, donde se produce la interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, mediante procesos naturales. En la misma se desarrollan formas exclusivas de ecosistemas frágiles y se manifiestan relaciones particulares económicas, sociales y culturales.

ARTÍCULO 3.- Toda extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar, incluyendo aquellas donde no existan condiciones para mantener habitación humana o vida económica, tendrá determinada su zona costera y su zona de protección, según corresponda.

ARTÍCULO 4.- Los límites de la zona costera se establecen atendiendo a la estructura y configuración de los distintos tipos de costas según se describe a continuación:

El límite interior de la zona costera, hacia tierra, se establece en cada caso como se dirá:

- a) **Terraza baja**, la constituida por rocas carbonatadas, incluyendo el camellón de materiales sueltos tales como cantos, guijarros, gravas y arenas formados durante los temporales, y regularmente cubiertos de vegetación. Su límite se establece en el borde extremo hacia tierra del camellón.

En ausencia del camellón:

- I. El límite será la línea ubicada a 20 metros hacia tierra, medidos a partir del inicio de la franja de vegetación natural consolidada más próxima al mar sobre la terraza;
 - II. En presencia del acantilado en un segundo nivel de terraza, ubicado a menos de 20 metros hacia tierra, medidos a partir del inicio de la franja de vegetación natural más próxima al mar sobre la terraza, el límite hacia tierra estará dado por la cima de dicho acantilado;
 - III. Si el área colindante a la terraza baja es una laguna costera con manglar, el límite hacia tierra será el definido en el inciso d).
- b) **Costa acantilada**, el área con acantilados cuya cima no sea sobrepasada por las marejadas o penetraciones del mar. Se extenderá 20 metros hacia tierra, a partir de dicha cima.
- c) **Playa**, ecosistema de la zona costera, constituido por materiales sueltos de diferentes espesor en áreas emergidas y submarinas que manifiesta procesos de erosión y acumulación por alteraciones de origen natural o antrópico, con cambios en la dinámica de su perfil; pertenecen a ella las barras submarinas, las bermas y las dunas. Su límite se establece en el borde extremo hacia tierra de la duna más próxima al mar.

En ausencia de dunas:

- I. El límite será la línea ubicada a 40 metros hacia tierra, medidos a partir del inicio de la franja de vegetación natural consolidada más próxima al mar;
 - II. Si apareciera el acantilado, ubicado a menos de 40 metros hacia tierra, medidos a partir del inicio de la franja de vegetación natural más próxima al mar, el límite hacia tierra estará dado por la cima de dicho acantilado;
 - III. Si el área colindante a la berma, resultara ser una laguna costera con manglar, el límite será definido en el inciso d).
- d) **Costa baja de manglar**, el área que comprende las extensiones de manglar asociadas con las ciénagas, esteros, lagunas costeras, y en general, los terrenos bajos que reciben la influencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua de mar. Su límite hacia tierra está dado por la penetración máxima del bosque de mangle: Si apareciere vegetación de ciénaga, el límite será fijado por el borde externo hacia tierra de dicho bosque.
- e) **En el caso de las desembocaduras de los ríos**, la zona costera se extiende trescientos metros en línea recta hacia tierra, partiendo de la

desembocadura siguiendo la sección longitudinal del río y 60 metros tierra adentro por ambos márgenes, hacia tierra por sus márgenes hasta donde llegue el efecto de las mareas.

f) **En los sectores de zona costera que, por causas naturales o artificiales, no sea posible la identificación de los tipos descritos en los incisos anteriores**, el límite hacia tierra se extiende 20 metros a partir de donde hayan alcanzado las olas de los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, la línea de pleamar máxima equinoccial.

- El límite exterior de la zona costera hacia el mar, será el borde de la plataforma insular del territorio, regularmente a profundidades entre 100 y 200 metros;

Artículo 5.1.- La zona de protección, es el espacio terrestre y marítimo aledaño a la zona costera que amortigua los efectos negativos de las acciones antrópicas y cuyos límites se establecen en dependencia de la tipología establecida en el Artículo anterior.

2.- Los límites hacia tierra, quedan fijados de la siguiente manera:

Para los tipos indicados en los incisos a), b) y e) del artículo 4, se establece una anchura mínima de 20 metros, medidos a partir del límite hacia tierra de la zona costera.

Para los tipos indicados en los incisos c), d) y f), del artículo 4, se establecerá una anchura mínima de 40 metros, medidos a partir del límite hacia tierra de la zona costera.

Sección Tercera

Componentes que Integran la Zona Costera

ARTÍCULO 6.1.- Los componentes que integran la zona costera, son los siguientes:

- a) Todos los elementos físico geográficos relacionados en el artículo 4 de este Decreto-Ley;
- b) Las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por la legislación vigente;
- c) Los recursos naturales vivos y no vivos contenidos en esta zona, incluyendo los bosques protectores;
- d) Las áreas que se forman por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas;

- e) Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y los desecados;
- f) Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa;
- g) Los estuarios, bahías, radas y ensenadas.

2.- Se consideran también componentes de la zona costera, las obras e instalaciones emplazadas sobre los elementos que se relacionan en el presente artículo.

CAPITULO II

AUTORIDADES RESPONSABLES

ARTÍCULO 7.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el Organismo de la Administración Central del Estado encargado de proponer la política y las estrategias de manejo integrado de la zona costera, encaminadas al logro del objetivo expresado en el artículo 1 del presente Decreto-Ley y del control de su ejecución, así como de organizar, dirigir y controlar, según proceda, la gestión ambiental necesaria a esos fines, en coordinación con los órganos y organismos competentes y sin perjuicio de las atribuciones y funciones que a éstos correspondan.

ARTÍCULO 8.- En cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo anterior, corresponderá al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente:

- a) Participar en el proceso de discusión, evaluación y aprobación de los planes de Ordenamiento Territorial y en la etapa de evaluación de proyectos urbanísticos y de toda clase, y en su modificación o revisión, en todo lo que afecte a la zona costera o de protección, con vistas a introducir las modificaciones que pudieran resultar procedentes;
- b) Evaluar los impactos ambientales y otorgar las Licencias Ambientales, cuando corresponda, para los proyectos de obras y actividades que se desarrollen en dicha zona y en la de protección, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley No. 81 de 1997, De Medio Ambiente;
- c) Participar en la vigilancia de las zonas costera y de protección, a los efectos de impedir la comisión de contravenciones y de imponer las sanciones correspondientes;
- d) Participar en investigaciones o inversiones relativas a proyectos de

- obras de protección, regeneración, saneamiento, mejora y conservación de la zona costera, paseos, senderos costeros y accesos públicos, puentes, instalaciones náutico-deportivas e instalaciones hidrotécnicas;
- e) Aprobar, dirigir y controlar la elaboración de planes de manejo integrado de la zona costera, así como controlar su implementación;
 - f) Coordinar con los órganos y organismos correspondientes la participación de la comunidad en la ejecución de los planes y programas de desarrollo de la zona costera y su zona de protección;
 - g) Velar porque se cumplan las medidas que garanticen que la comunidad se mantenga debidamente informada y participar en el proceso de evaluación de los proyectos a ejecutar en la zona costera y su zona de protección;
 - h) Aprobar, oído el parecer de otros órganos y organismos competentes, la ampliación de los límites hacia tierra de la zona de protección cuando por razones fundamentadas se requiera;
 - i) Autorizar, coordinando con órganos y organismos competentes, la extracción de áridos y dragados de las cuencas de depósito próximas a las playas, si estas actividades se realizan con el objetivo de la alimentación artificial, regeneración, remodelación, mejoramiento o restitución de las condiciones naturales de las playas y siempre que no se afecte su estabilidad;
 - j) Establecer el sistema de monitoreo ambiental, con especial atención a las playas y cayos, con vistas a su conservación, protección y restauración en los casos que sea necesario;
 - k) Prohibir los procesos industriales en la zona costera y de protección cuyas características físico-geográficas así lo determinen, si sus efluentes, a pesar de estar tratados, pudieran constituir un riesgo significativo de contaminación;
 - l) Conciliar las discrepancias entre los órganos y organismos respecto a los conflictos que se deriven de los usos múltiples de la zona costera.

ARTÍCULO 9.- El Ministerio de Economía y Planificación, es el rector de la política nacional de ordenamiento territorial, en la que se consideran integralmente los aspectos ambientales y su vínculo con los factores económicos, demográficos y sociales, por lo que dentro de sus funciones a través del Instituto de Planificación Física, queda encargado de:

- a) Dirigir, formular y controlar el Ordenamiento Territorial y el Urbanismo de la zona costera y de protección, en consulta con los órganos y organismos competentes;
- b) Establecer en los planes de ordenamiento territorial y el urbanismo los

- límites de la zona costera y su zona de protección, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto-Ley;
- c) Realizar la señalización, ampliación y control de la línea que marca en la parte terrestre la zona costera y su zona de protección;
 - d) Realizar en coordinación con los órganos y organismos competentes, la delimitación de la zona de protección, cuando el límite sea mayor que el establecido en el artículo 5 del presente Decreto-Ley;
 - e) Incorporar las correcciones correspondientes en los límites de la zona costera y la zona de protección, cuando por causa de fenómenos naturales se modifique la configuración de la zona costera;
 - f) Incorporar en el correspondiente Esquema o Plan de Ordenamiento Territorial o proyecto urbanístico las ampliaciones de los límites hacia tierra de la zona de protección.

ARTICULO 10.- El límites hacia tierra de la zona de protección podrá coincidir con la línea de construcción, sin que ésta en ningún caso pueda estar por delante de los límites de dicha zona.

ARTÍCULO 11.- Las autoridades competentes para la vigilancia de la zona costera a los efectos de su protección, lo constituyen los inspectores estatales ambientales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, los inspectores estatales de los diferentes órganos y organismos estatales vinculados a los recursos costeros y marinos, que hayan sido debidamente acreditados y los miembros del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que tengan asignada esta función.

CAPITULO III USOS DE LA ZONA COSTERA

ARTÍCULO 12.- La utilización de la zona costera será libre, pública y gratuita para los usos comunes de acuerdo con su naturaleza, tales como pasear, permanecer, bañarse, pescar, navegar, varar y otros semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de conformidad con este Decreto-Ley y demás legislación sobre la materia, excepto en las áreas destinadas o de interés de la defensa, la seguridad y el orden interior, instalaciones portuarias, áreas protegidas con categorías estrictas de manejo, instalaciones productivas y científicas y las señales marítimas.

ARTÍCULO 13.1.- Las, obras, proyectos u actividades que se ejecuten en la

zona costera, tendrán que garantizar el acceso a la zona costera y su zona de protección desde la vía pública más cercana.

2.- El Ministerio de Economía y Planificación, deberá garantizar que los planes de desarrollo en la zona costera incluyan servidumbres de paso que permitan el acceso libre y público a dicha zona.

3.- Las entidades que utilizan los recursos de la zona costera, quedan obligadas a financiar la creación de los pasos peatonales, los que en todos los casos serán rústicos, de forma tal que se ocasione el menor daño al ecosistema.

4.- Cuando una entidad desarrolle un proyecto o actividad que implique la afectación o destrucción de infraestructuras de uso público ubicadas en zona costera, quedará obligada a habilitar un área costera para la ubicación de nuevas estructuras de uso público atendiendo a lo que ese efecto le imponga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

ARTÍCULO 14.- Los usos y actividades en las zonas costeras y su zona de protección, en áreas destinadas o de interés para la defensa, la seguridad nacional y el orden interior, serán autorizadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

ARTÍCULO 15.1.- La zona costera permanecerá preferentemente desocupada, autorizándose solamente el desarrollo o la ejecución de actividades o instalaciones que por su propia naturaleza no admiten otra ubicación, tales como puertos, embarcaderos, astilleros, marinas, varaderos, termoeléctricas, cultivos marinos, emisarios submarinos, parques submarinos, plataformas de perforación de petróleo, señales de ayuda a la navegación, salinas, obras de defensa, regeneración, mejora y conservación de dicha zona, actividades de forestación y reforestación y otras de similar naturaleza, siempre y cuando se haya cumplido con el proceso de evaluación de impacto ambiental.

2.- En los espacios de la zona costera que se desocupen por cualquier causa no se permitirá la ubicación de nuevas instalaciones permanentes, excepto en los casos debidamente justificados por utilidad pública o interés social, o para las actividades previstas en el apartado anterior.

ARTÍCULO 16.- Se prohíbe en la zona costera, sin perjuicio de otras prohi-

bicciones específicas:

- a) La instalación de toda nueva edificación, excepto los casos previstos en el artículo 15 del presente Decreto-Ley;
- b) La extracción de áridos;
- c) El estacionamiento y la circulación de vehículos terrestres, salvo equipos especializados de seguridad, limpieza, vigilancia, salvamento, los de mantenimiento y los relacionados con la actividad de ayuda a la navegación, hidrografía y de investigaciones científicas. Se exceptúan los casos de embarcaciones en arribada “forzosa” y los vehículos para realizar actividades forestales, que estén debidamente autorizadas;
- d) La creación de nuevos áreas residenciales o de alojamiento y la ampliación de los ya existentes hacia esas áreas;
- e) La ampliación de las edificaciones existentes ocupando áreas de la zona costera y de protección; excepto para los casos establecidos en el 15.1;
- f) La circulación de vehículos acuáticos y motorizados en áreas donde haya sido prohibida o limitada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en coordinación con el Ministerio del Turismo;
- g) La disposición final de los desechos sólidos y líquidos provenientes de cualquier actividad, cuando no cumplan con las normas de vertimientos establecidas;
- h) La introducción de especies exóticas, sin cumplir con los requerimientos establecidos para esta actividad;
- i) Las actividades de equitación, circulación de animales de tiro y de vehículos de tracción animal, en las playas;
- j) La construcción de cualquier tipo de instalación, excepto para los casos establecidos en el 15.1.

ARTÍCULO 17.- Cuando se demuestre que no existen alternativas factibles para realizar la extracción de áridos fuera de la zona costera y que la cuenca propuesta no interviene en el proceso de la dinámica de la playa o cuando la extracción de áridos se realice para el mejoramiento de la propia playa o de otra ubicada en el mismo sistema, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente podrá excepcionalmente autorizar que no se aplique lo dispuesto en el inciso b) del artículo anterior, condicionado a que se obtenga la Licencia Ambiental antes de comenzar la actividad.

ARTÍCULO 18.- A la zona de protección le resulta aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 16.

2.- En casos excepcionales y previa autorización del Ministerio de Ciencia,

Tecnología y Medio Ambiente, podrán ejecutarse las obras o actividades siguientes:

- a) La ubicación de obras ligeras dedicadas a la prestación de servicios necesarios para el uso de la propia zona, si cumplen con los requisitos siguientes:
 - Ser ligeras, construidas con elementos de serie prefabricados, módulos paneles o similares;
 - Montarse y desmontarse mediante procesos que permitan realizarse su levantamiento sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente transportables;
 - Que al desmontarse se garantice que el área quede libre y desocupada;
 - Contar con sistemas y medios adecuados para la recogida y depósito de residuales;
- b) Los cultivos y plantaciones, agrícolas, siempre que:
 - No impidan el derecho de paso;
 - No perjudiquen la estabilidad de los ecosistemas;
 - No provoquen el desplazamiento de la vegetación natural; y
 - No afecten la observación o acceso a las señales de ayuda a la navegación;
- c) El depósito temporal de objetos y materiales arrojados por el mar o como consecuencia de operaciones de salvamento marítimo.

CAPITULO IV

GESTIÓN DE LA ZONA COSTERA Y SU ZONA DE PROTECCIÓN

Sección Primera

Licencia Ambiental para Proyectos de Obras o Actividades y el Plan de Ordenamiento Territorial

ARTÍCULO 19.-La ejecución de obras o actividades en la zona costera y de protección, está condicionada a que se obtenga la licencia ambiental y se cumpla con los requisitos de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley No. 81, Ley de Medio Ambiente y la legislación correspondiente.

ARTÍCULO 20.-El otorgamiento de la licencia ambiental para la realización de las obras que a continuación se relacionan estará además condicionado

especialmente, al cumplimiento de los requisitos siguientes:

- a) Las obras de defensa contra la penetración del mar por causas naturales: a que no provoquen daños a la zona costera ni ocupen playa;
- b) Las obras marinas o urbanizaciones marítimo-terrestres que den origen a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos, de terrenos que con anterioridad a dichas obras no estaban ubicados en la zona costera: a la nueva demarcación del terreno que queda emergido en la zona costera con su correspondiente zona de protección;
- c) Las obras para la recuperación de terrenos inundables: a que no contaminen el medio marino ni alteren en forma perjudicial el flujo de las aguas, manteniendo la incorporación de aquellos terrenos a la zona costera, con su correspondiente zona de protección.

ARTÍCULO 21.- Si se suspende definitivamente una licencia por cualquier causa, su titular estará obligado a la retirada de las instalaciones, fuera de las zonas costeras y de protección, en la forma y plazo que se señale por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, restaurando además las condiciones alteradas.

ARTÍCULO 22.- El Esquema o Plan de Ordenamiento Territorial del Territorio cumplirá con las previsiones contenidas en el presente Decreto-Ley para el manejo integrado de la zona costera y será consecuente con las Estrategias y Programas que para el Manejo Integrado de la Zona Costera, hayan sido debidamente aprobados.

Sección Segunda

Señalización

ARTÍCULO 23.1.- Antes de comenzar la ejecución de un proyecto de obra o actividad de cualquier tipo, susceptible de afectar las zonas costera o de protección, deberá estar ejecutada la señalización correspondiente.

2.- La señalización terrestre de la zona costera y su zona de protección, se hará de oficio o a petición de la parte interesada, mediante la colocación de los correspondientes hitos o referencias específicas, distanciadas entre sí a un máximo de 100 metros para la parte terrestre y será realizada por el Ministerio de Economía y Planificación a través del Instituto de Planificación Física.

3.- La señalización en la parte marina será realizada en los lugares en que de-

termine el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de acuerdo a lo que al efecto éste establezca.

4.- Los costos de las señalizaciones serán asumidos por los titulares de los proyectos de obras u actividades que se realicen en la zona costera.

CAPÍTULO V CAYERÍAS Y PENÍNSULAS

ARTÍCULO 24.- Los islotes y cayos en aguas de la plataforma insular o en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas y las penínsulas, tendrán zonas costera y de protección según corresponda y les son aplicables todas las disposiciones que por este Decreto-Ley se han establecido, sin perjuicio de las específicas que en el presente Capítulo se disponen.

ARTÍCULO 25.- El otorgamiento de la Licencia Ambiental para las obras o actividades permanentes que se ejecuten en los cayos requerirá de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.

ARTÍCULO 26.1.- En los cayos o penínsulas donde no se cumplan las distancias establecidas para la zona costera y su zona de protección, o los de extrema fragilidad por su estadio de desarrollo geomorfológico, superficie cubierta totalmente por vegetación de manglar o incipiente desarrollo de sus playas, no se autorizarán construcciones de ningún tipo, salvo que por interés de la defensa y la seguridad nacional sea necesario.

2.- Corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente identificar aquellos cayos con las características señaladas anteriormente.

ARTÍCULO 27.- En los cayos y las penínsulas geomorfológicamente consolidados, las construcciones permanentes sólo se autorizarán en las superficies firmes, en los acantilados y en los tramos costeros que cumplan estrictamente las distancias estipuladas en el artículo 4 del presente Decreto-Ley para esa tipología de costa.

ARTÍCULO 28.- En todos los cayos y penínsulas donde se ejecuten construcciones permanentes los sistemas de tratamiento de residuales, tendrán que ser definido en la inversión y además apropiados atendiendo las condiciones de fragilidad de los cayos, por lo que su efectividad será evaluada en cada

caso, y se determinará la factibilidad o no de autorizar su instalación.

DISPOSICION ESPECIAL

ÚNICA: Cuando circunstancias excepcionales impongan la necesidad de establecer instalaciones permanentes en los cayos, contrario a lo establecidos en el artículo 27, compete al Consejo de Ministros, oído el parecer del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, evaluar y si corresponde conceder la autorización.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Ministerio de Economía y Planificación, en los plazos que convengan, revisarán los planes de Ordenamiento Territorial y proyectos urbanísticos, aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-Ley para adecuarlos a lo que en el mismo se establece.

SEGUNDA: Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-Ley y que se opongan a las disposiciones o requerimientos que en el mismo se establecen, se mantendrán bajo las condiciones que fueron otorgadas hasta tanto prescriban. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, queda encargado de establecer las disposiciones correspondientes para regular las acciones a ejecutar una vez que hayan prescrito dichas autorizaciones.

TERCERA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente queda facultado para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes para la aplicación y cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto-Ley, de ser necesario, en coordinación con los órganos y organismos que por razón de la materia les competan.

CUARTA: El Anexo único del presente Decreto-Ley establece los principales términos técnicos utilizados para la aplicación de lo que por el presente se dispone.

QUINTA: En un plazo de tres años siguientes a la promulgación del presente Decreto-Ley, la legislación especial que involucre usos de la zona costera, deberá ser revisada y proceder a su modificación, en los casos que corresponda

para armonizarla con lo que mediante el mismo se dispone.

SEXTA.- Se derogan:

- Los artículos 9, 11, 39, 40, 41, 42, 43 y 46 de los Capítulos I, II y IV de la Ley No. 80, “Ley de Puertos”, de 7 de mayo de 1880; así como el artículo 38 de la referida Ley, tal y como quedo modificado por la Disposición Final Segunda de la Ley Decreto No. 578 de 1 de diciembre de 1952. el Decreto No. 277 de 26 de febrero de 1932; Reglamento para la recolección y conducción de arenas, marítimas, fluviales y yacimientos minerales; tal y como quedo modificada por el Decreto 4537, de 19 de octubre de 1951.
- El Decreto No. 277 de 26 de febrero de 1932; Reglamento para la recolección y conducción de arenas, marítimas, fluviales y yacimientos minerales; tal y como quedo modificada por el Decreto 4537, de 19 de octubre de 1951 y cuantas otras disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Decreto Ley.

SÉPTIMA: El presente Decreto-Ley comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de la Habana a los 8 días del mes de agosto del 2000.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado

ANEXO ÚNICO DECRETO-LEY 212 “GESTION DE LA ZONA COSTERA”.

Se entenderá por:

- **Arena**, partícula cuyo diámetro oscila entre 0,06 mm y 2 mm.
- **grava, cascajo**, material detrítico suelto, cuyo tamaño varía entre 2,00 y 2,56 mm.
- **Guijarros**, una pequeña piedra desgastada, pulida y redondeada por la acción del agua, arena u otro, cuyo diámetro está entre 4,0 y 64 mm.
- **Cantos**, piedra naturalmente redondeada, más grande que un guijarro.
- **Barra submarina**, la acumulación de arena suelta que se presenta en forma de camellón sumergido.
- **Costa**, la parte terrestre de la zona costera.
- **Berma**, terraplén a lo largo de un cuerpo de agua, un canal o una playa. Sobre la playa puede formarse por el depósito de materiales debido a las olas y señala el límite de pleamares.
- **Duna**, montículo dorsal o colina de arena acumulado en la costa cubierta o no, por vegetación y, generalmente, paralela a la línea de costa.
- **Ecosistemas frágiles**, aquellos que por sus características propias responden con particular sensibilidad a impactos ambientales y la alteración de alguno o algunos de sus componentes puede romper fácilmente el equilibrio ecológico.
- **Estuario**, parte de un curso de agua influido por la marea de la masa de agua hacia la cual él fluye. Resultan formas estuarinas las bahías cerradas, los esteros y las ciénagas, entre otras.
- **Laguna costera**, la extensión cerrada de agua salada, separada del mar abierto por algún obstáculo, como por ejemplo un banco de arena bajo, se extiende paralela a la línea de costa, con reducido intercambio de agua.
- **Línea de costa**, la línea de coincidencia de la costa con el nivel medio del mar.
- **Plataforma insular**, el fondo marino de pendiente suave, comprendido entre la línea de costa y el cambio pronunciado de la pendiente que da lugar a su borde exterior.

GACETA OFICIAL



DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICION ORDINARIA

LA HABANA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006

AÑO CIV

Número 33

Página 325

Decreto-Ley 241.

CONSEJO DE ESTADO.

RAUL CASTRO RUZ, Primer Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 129 de 21 de agosto de 1991, extinguió el Sistema de Arbitraje Estatal y dispuso la creación de la Sala de lo Económico en los Tribunales Populares para asumir la función jurisdiccional atribuida a los referidos órganos, encargando al Tribunal Supremo Popular realizar los estudios necesarios para la elaboración de la legislación procesal que debe aplicarse en los procedimientos judiciales de las mencionadas salas de justicia.

POR CUANTO: Las salas de lo Económico han venido aplicando como normas procesales las establecidas en el Decreto No. 89 “Reglas de Procedimiento de Arbitraje Estatal”, de 21 de mayo de 1981, con las adecuaciones introducidas en virtud de la Instrucción No. 141 de 27 de septiembre de 1991, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, siendo modificada su jurisdicción y competencia mediante Decreto-Ley No. 223 de 15 de agosto de 2001, “De la Jurisdicción y Competencia de las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares.”

POR CUANTO: La experiencia acumulada en la práctica jurisdiccional de estas salas de justicia evidencia la necesidad de introducir cambios en las referidas normas procesales, orientados a alcanzar mayor judicialización en el proceso, preservando su flexibilidad en atención a la naturaleza de los conflictos de esta índole en

correspondencia con las transformaciones operadas en la esfera de las relaciones económicas, mediante la aprobación de un procedimiento que pase a formar parte de la vigente Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.

POR CUANTO: En lo que concierne a la materia civil, atendiendo al principio de racionalidad, la propia práctica ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir cambios en aspectos relacionados con la competencia atribuida a las diferentes instancias, con el objetivo de alcanzar el necesario acercamiento de la administración de justicia a problemas de la localidad, así como mayor celeridad en la decisión definitiva de los procesos, lo que inequívocamente tributa a su real objetividad, y ello puede materializarse trasladando a los tribunales municipales el conocimiento de pleitos de mayor cuantía o valor de los que actualmente conocen, reservándose como garantía procesal que sus sentencias sean recurribles en apelación ante la Sala de esa especialidad del Tribunal Provincial que corresponda, en que debe quedar definitivamente resuelto el diferendo de que se trate, lo que por otra parte genera como efecto colateral el que asuntos de relativa escasa magnitud no requieran ser conocidos en casación, con el consecuente ahorro de tiempo que ello comporta.

POR CUANTO: En el ejercicio de la iniciativa legislativa que la Constitución de la República atribuye en su artículo 88, inciso e) al Tribunal Supremo Popular, su Consejo de Gobierno ha propuesto el presente proyecto de Decreto-Ley modificativo de la Ley No. 7 de 19 de agosto de 1977 “De Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral”, por el cual se introducen los cambios a que se contraen los presentes fundamentos.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las facultades que le están conferidas en el artículo 90 inciso c) de la Constitución de la República, resuelve dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 241 MODIFICATIVO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO CIVIL ADMINISTRATIVO Y LABORAL

ARTICULO 1.- Se modifican los artículos 5 y 6, ambos de la Ley No. 7/77 “De Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral”, los que quedan redactados como sigue:

“ARTÍCULO 5.- Los Tribunales Municipales Populares conocen en materia civil de:

1. Las demandas de contenido económico cuya cuantía o el valor de los bienes sobre los que se litigue no exceda de diez mil pesos;
2. Los procesos sobre el estado civil de las personas y los que se susciten por la aplicación del Código de Familia, salvo los que se señalan en el apartado 3) del artículo 6 de esta Ley;
3. Las reclamaciones sobre alimentos;
4. Los actos de jurisdicción voluntaria que no sean en negocios de comercio;
5. Los procesos sucesorios;
6. Los procesos de amparo fuera de actuaciones judiciales contra actos provenientes de particulares o de autoridades administrativas y los de suspensión de obra nueva;
7. Las demandas referidas a los conflictos consecuentes de las limitaciones derivadas de las relaciones de vecindad a que se contrae el Capítulo IV, Título II, Libro Segundo del Código Civil.”

“ARTÍCULO 6.-Los Tribunales Provinciales Populares conocen, en materia civil, de:

1. Las demandas de contenido económico en que la cuantía o el valor de los bienes sobre los que se litigue exceda de diez mil pesos o sea inestimable o indeterminable;
2. Los procesos de expropiación forzosa;
3. Los procesos de nulidad de matrimonio y de los de privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad;
4. Los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio;
5. Los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias y resoluciones definitivas de los tribunales municipales populares;
6. Las demandas referidas a la nulidad o ineficacia de actos jurídicos o de la escritura pública que lo contiene;

7. Los demás asuntos civiles cuyo conocimiento no esté atribuido por esta Ley a otro Tribunal.”

ARTICULO 2.- Se modifican los artículos 223, 358, 629, 642, 644 y 647 de la Ley No. 7 “De Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral”, los que quedan redactados como sigue:

“ARTÍCULO 223.-Se tramitarán en proceso ordinario:

1. Las demandas de contenido económico en que la cuantía de lo reclamado o el valor de los bienes sobre los que se litigue exceda de diez mil pesos o sea inestimable o indeterminable;
2. Las demandas sobre el estado civil de las personas y las que se susciten por la aplicación del Código de Familia, con excepción de los casos contemplados en los apartados 2), 3) y 4) del artículo 358 de esta Ley;
3. Las demandas para la decisión de las cuales la ley no establezca otro procedimiento.”

“ARTÍCULO 358.-Se tramitarán en proceso sumario:

1. Las demandas de contenido económico en que la cuantía de lo reclamado o el valor de los bienes sobre los que se litigue no exceda de diez mil pesos;
2. Los conflictos que surjan con motivo del ejercicio de la patria potestad cuando la ejerzan ambos padres;
3. Los conflictos que surjan entre los cónyuges sobre la administración y disfrute de los bienes comunes;
4. Las reclamaciones sobre alimentos;
5. Las controversias que surjan entre partícipes en relación con la administración y uso de la cosa común.

Las reclamaciones sobre alimentos a que se refiere el apartado 4), se sustanciarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368, 369, 370 y 371”.

“ARTÍCULO 629.- Procede el recurso de casación contra las siguientes resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales provinciales populares:

1. Las sentencias definitivas;
2. Las demás resoluciones que pongan fin al proceso haciendo imposible su continuación;
3. Los autos resolutorios del recurso de súplica dictados en trámite de ejecución de sentencia y referidos a puntos sustanciales no controvertidos en el proceso ni decididos en la ejecutoria, o en contradicción con los términos de ésta;

Serán igualmente recurribles en casación las sentencias que en segunda instancia dicten los Tribunales Provinciales Populares referidas a procesos sobre el estado civil de las personas, así como en los que se susciten por la aplicación del Código de Familia, con excepción de las que recayeren en materia de alimentos, y las que de igual forma resuelvan litigios que tengan por objeto la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes o partición de caudal hereditario.”

“ARTÍCULO 642.-Habrà lugar a la revisión de sentencia firme:

1. Si se obtuvieron documentos decisivos de los que no se pudo disponer a tiempo por fuerza mayor o por obra de la contraparte;
2. Si el fallo se funda en documento que al tiempo de dictarse ignoraba la parte haber sido declarado falso en causa penal o se declarare después la falsedad en dicha forma;
3. Cuando habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido después sancionados por perjurio y su declaración hubiere servido de fundamento a la sentencia;
4. Cuando la sentencia se hubiere dictado por un tribunal cuyos integrantes sean posteriormente sancionados por prevaricación o cohecho cometido al dictar dicha sentencia o haberse obtenido ésta por violencia ejercida sobre ellos;
5. Cuando, atendiendo a argumento debidamente fundamentado, se constatare por la Sala la presencia de situación específica de haberse colocado en estado de indefensión a parte interesada, con trascendencia al derecho que reclama.

“ARTÍCULO 644.-La demanda habrá de establecerse dentro del plazo de tres meses que comenzará a contarse:

1. Desde la fecha de obtención del documento a que se refiere el apartado 1) del artículo 642;
2. Desde la fecha en que el reclamante haya tenido conocimiento de haberse declarado la falsedad anterior del documento a que se refiere el apartado 2) del artículo 642;

3. Desde la firmeza de la sentencia en causa penal que declare posteriormente la falsedad, perjurio, prevaricación, cohecho o situación de violencia;
4. Desde la fecha en que el solicitante haya tenido conocimiento de la sentencia cuestionada, en el supuesto del apartado 5) del artículo 642.

En los casos 1) y 2) será requisito que el reclamante señale bajo su responsabilidad, sujeto a las sanciones del delito de perjurio, con toda exactitud, la fecha y el modo en que haya tenido conocimiento de los extremos expresados”.

“ARTÍCULO 647.-La admisión de la demanda fundada en los apartados 2), 3) y 4) del artículo 642, suspenderá la ejecución pendiente del fallo cuya revisión se pretenda.

También podrá suspenderse la ejecución a instancia de parte, cuando la revisión se solicite conforme a los apartados 1) y 5) del propio artículo, mediante la constitución de fianza prestada con sujeción y con los efectos que previene el artículo 606.

Corresponderá siempre a la Sala decidir lo que a su juicio proceda sobre la suspensión y prestación, en su caso, de la fianza.

El tribunal que conozca de la ejecución, al serle comunicada la suspensión, deberá, antes de elevar las actuaciones, adoptar las provisiones indispensables para asegurar el oportuno cumplimiento de la ejecutoria si la revisión fuera desestimada en definitiva.”

ARTICULO 3.- Se adiciona a la Ley No. 7 “De Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral”, de 19 de agosto de 1977, una Cuarta Parte “Del Procedimiento de lo Económico”, que es del tenor siguiente:

CUARTA PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE LO ECONOMICO

CAPITULO I DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA

ARTÍCULO 739.- Corresponde a las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares el conocimiento y solución de los litigios que se susciten en-

tre personas naturales o jurídicas, cubanas o extranjeras con representación o bienes o intereses en Cuba, con motivo de sus relaciones contractuales, salvo cuando se contraigan en la esfera de consumo de la población.

Se exceptúan igualmente del conocimiento de las Salas de lo Económico los litigios que se sometan expresa o tácitamente, o por disposición de la ley o acuerdos internacionales, al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de la asistencia que deban prestar en dichos procesos a solicitud de las partes o requerimiento del Tribunal Arbitral.

ARTÍCULO 740.-Son también competentes las Salas de lo Económico para conocer de los litigios que resulten de hechos o actos relacionados con el transporte y el tráfico marítimo, ocurridos dentro de aguas interiores o el mar territorial, o que, teniendo lugar fuera de éstos, involucren embarcaciones de bandera cubana.

ARTÍCULO 741.-Corresponde asimismo a las expresadas salas de justicia, conocer y resolver los litigios que surjan con motivo del incumplimiento de las regulaciones sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales, o relacionados con los daños ambientales, resultantes de actividades económicas desarrolladas por personas jurídicas o naturales, cubanas o extranjeras, en el territorio nacional, comprendidas las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

Son del conocimiento de las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares, las acciones resarcitorias o de cumplimiento para la preservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, que se promuevan por personas jurídicas o naturales cubanas, o, en su caso, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Fiscalía General de la República o el Ministerio de la Agricultura, este último en materia de Patrimonio Forestal.

ARTÍCULO 742.-Las Salas de lo Económico conocen asimismo de los litigios de carácter extracontractual que surjan con motivo de los daños y perjuicios originados a terceros en su actividad económica por persona jurídica o natural, cubana o extranjera, en ocasión del desarrollo de su actividad productiva, comercial o de servicios en territorio nacional.

ARTÍCULO 743.-La jurisdicción de lo económico se ejerce por las siguientes salas de justicia:

- a) La Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular;
- b) Las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares y del Tribunal Especial Popular de la Isla de la Juventud.

ARTÍCULO 744.-Las Salas de lo Económico competentes para conocer de un asunto, lo son también para todas sus incidencias y para la ejecución de la sentencia que dictan y los acuerdos o transacciones que aprueban.

ARTÍCULO 745.-La Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular es competente para conocer de:

- a) Los recursos de casación que se interpongan contra los autos definitivos y sentencias que dicten las salas de lo Económico de los tribunales provinciales;
- b) Los procesos extraordinarios de revisión contra sentencias y autos definitivos y firmes, dictados por las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales, o contra las sentencias dictadas en recursos de casación por la propia Sala del Tribunal Supremo Popular;
- c) Las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, contra sujetos que puedan ser parte en los procesos de esta jurisdicción;
- d) Las demandas para declarar la nulidad de un laudo arbitral dictado por corte arbitral cubana o en proceso de arbitraje internacional desarrollado en territorio nacional;
- e) Los conflictos de competencia por razón del territorio que se susciten entre las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares.

ARTÍCULO 746.-Las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares son competentes para conocer de:

- a) Las demandas que se promuevan con motivo de modificación, incumplimiento, nulidad, ineficacia o extinción de contratos económicos;
- b) Las demandas que se promuevan con motivo de contratos internacionales cuando una de las partes sea cubana o, siendo extranjera, tenga representación o bienes o intereses en Cuba, o su ejecución deba tener lugar en el territorio nacional;
- c) Los conflictos que se promuevan por los socios de las sociedades mercantiles cubanas, comprendidas las de capital mixto, constituidas conforme a la ley nacional, con motivo de la inactividad de sus órganos de gobierno o de su disolución y liquidación;

- d) Las demandas que se promuevan con motivo del incumplimiento de las regulaciones sobre la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales o de la producción de daños ambientales causados por una actividad económica;
- e) Las demandas que se promuevan con motivo de hechos o actos relacionados con el transporte y el tráfico marítimo;
- f) La solicitud de embargo preventivo de buques o aeronaves, de conformidad con las convenciones internacionales de las cuales sea parte la República de Cuba;
- g) Las demandas que se promuevan sobre procesos ejecutivos en relación con los títulos de crédito que generan ejecución;
- h) Las demandas que se promuevan con motivo de daños y perjuicios, de carácter extracontractual, causados a terceros en ocasión del desarrollo de actividad productiva, comercial o de servicio;
- i) Las solicitudes que se promuevan para la ejecución de laudos arbitrales dictados por corte arbitral cubana en el territorio nacional;
- j) Los litigios entre entidades subordinadas a un mismo organismo, una vez agotada la vía administrativa de conciliación o solución arbitral;
- k) Los demás asuntos que les sean atribuidos por ley.

ARTÍCULO 747.- Los litigios de carácter contractual en que las partes tienen sus domicilios en diferentes provincias, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al domicilio del demandado o al de una de ellas, a elección del actor, si en el asunto aparecen como partes dos o más demandados que radiquen en territorios distintos.

La Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana, es competente para conocer y resolver los litigios en que figure como demandado una persona jurídica que desenvuelva su actividad económica en esa provincia, aunque tenga su domicilio social en Ciudad de La Habana.

Los conflictos económicos en materia de ejecución de obras, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al lugar de realización de la obra.

ARTÍCULO 748.- Los conflictos sobre la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales en los que sea parte alguno de los sujetos a que se contraen los artículos 751 y 752, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al lugar en que ocurrió el

evento dañoso o violatorio de la normativa ambiental.

ARTÍCULO 749.- Los conflictos económicos con motivo de un litigio extracontractual, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al lugar en que se produjo el daño.

ARTÍCULO 750.- Los conflictos económicos con motivo de la navegación o el tráfico marítimo, en aguas interiores o el mar territorial, o fuera de éstos, tratándose en este último caso de embarcaciones con bandera cubana, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana.

La solicitud de embargo de buque se conoce y resuelve por la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al territorio del puerto donde se encuentre el mismo.

CAPITULO II

DE LAS PARTES Y SU REPRESENTACION

Artículo 751.- Pueden ser parte en los procesos de lo económico:

- a) Las empresas, uniones y demás organizaciones económicas estatales, cualesquiera sean las formas que adopten conforme con la ley;
- b) Los órganos y organismos del Estado y demás unidades presupuestadas;
- c) Las sociedades mercantiles y civiles de servicio;
- d) Las instituciones financieras;
- e) Las organizaciones políticas, sociales y de masas y entidades que les están subordinadas;
- f) Las asociaciones, fundaciones y demás organizaciones de carácter social;
- g) Las empresas mixtas y personas jurídicas o naturales extranjeras, autorizadas a operar en el territorio nacional;
- h) Las cooperativas de producción agropecuaria, las cooperativas de créditos y servicios, las unidades básicas de producción cooperativa o cualquier otro tipo autorizado por la ley;
- i) Los agricultores pequeños, propietarios o usufructuarios de tierras;
- j) Cualquier otra entidad o persona natural que autorice expresamente la ley.

ARTÍCULO 752.- Asimismo pueden ser también parte en los procesos que se promuevan por incumplimiento de las regulaciones sobre protección del medio ambiente y los recursos naturales, la Fiscalía General de la República

y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y, en el caso del patrimonio forestal, el Ministerio de la Agricultura.

ARTÍCULO 753.-En los procesos de lo económico, a instancia de parte, o de oficio por el tribunal, puede ser incorporado un tercero como demandado.

Asimismo podrá solicitar su incorporación como actor en el proceso, cualquier persona natural o jurídica que justifique su legitimación.

ARTÍCULO 754.-Las partes podrán comparecer en el proceso económico por sí o representadas por abogado. Cuando lo hagan por sí mismas serán dirigidas por abogado.

ARTÍCULO 755.-La representación de las personas jurídicas se regirá por lo dispuesto al efecto en el artículo 64 de la presente Ley.

Por las asociaciones o entidades que no constituyan persona jurídica, actúan quienes, de conformidad con su título constitutivo, ostenten su representación o estén llamados a responder por su gestión.

ARTÍCULO 756.- Fuera de los casos exceptuados por ley, cuando la representación de persona jurídica deba recaer en persona natural ajena a la misma, ésta se hará constar en documento notarial.

No se precisará de la forma notarial en los poderes otorgados a abogados de bufetes colectivos o de consultorías jurídicas estatales, en cuyos casos ha de acreditarse la representación con el documento contentivo o acreditativo del contrato de servicios jurídicos.

ARTÍCULO 757.- Cuando la representación de persona jurídica estatal deba recaer en persona distinta a quien ostente ésta, perteneciente a la propia entidad, la misma deberá acreditarse mediante resolución de la que conste tal delegación. En dicha resolución deberán constar expresamente los fundamentos que autorizan dicha delegación.

ARTÍCULO 758.- Cuando la representación de persona jurídica no estatal deba recaer en persona distinta a quien la ostente, perteneciente a la propia entidad, ésta deberá acreditarse mediante certificación del acuerdo del órgano de administración correspondiente delegando la misma. En la expresada certi-

ficación deberán constar asimismo los fundamentos legales o estatutarios que autorizan dicha delegación.

ARTÍCULO 759.- En todos los casos, los representantes procesales deben estar expresamente facultados en el documento público o privado que le confiere tal representación, para desistir, allanarse, transigir y realizar todos los actos que requiera el proceso.

Los documentos públicos expedidos en el exterior deben presentarse con traducción al español y estar debidamente legalizados y protocolizados, salvo excepción establecida por ley o tratado al efecto.

ARTÍCULO 760.- Además de las causas de cese de la representación constituida en el proceso a que se refieren los artículos 74 y 76 de la presente Ley, también cesará la representación por extinción de la persona jurídica representada, en cuyo caso el proceso deberá continuar con quien la suceda en su patrimonio o deba dar continuidad al cumplimiento de sus obligaciones.

CAPITULO III DE LAS COSTAS PROCESALES

ARTÍCULO 761.- Para la apreciación e imposición de costas procesales, las Salas de lo Económico se estarán a lo dispuesto en los artículos 198 y siguientes, salvo en lo que se contrae a la audiencia verbal a que se refiere el artículo 212 de esta Ley, la que solo convocarán cuando así lo requieran las circunstancias concurrentes, resolviendo sin más trámites sobre las mismas.

CAPITULO IV DE LA DEMANDA Y CONTESTACION

ARTÍCULO 762.- Los escritos de demanda y contestación, en cuanto a su forma y contenido, se ajustarán a lo establecido en el artículo 224 de la presente Ley.

En el caso de las personas jurídicas, las generales del actor y del demandado deben comprender, además, su número de identidad, en su caso, el órgano u organismo del que dependa, domicilio, código y localidad de la agencia bancaria y número de las cuentas bancarias con que operan.

ARTÍCULO 763.- Con los escritos de demanda y contestación se presentan y

proponen los documentos justificativos de la representación y el carácter con que se comparece.

Se acompañan, asimismo, los documentos en que el actor o el demandado funde el derecho alegado. Si no los tienen a su disposición, designan el archivo, oficina o lugar en que se encuentran los originales.

Cuando se aportan al proceso documentos en idioma extranjero se acompaña su traducción al idioma español, realizado por especialistas en el idioma utilizado.

ARTÍCULO 764.- De carecer el interesado de los documentos originales, puede presentar copias simples o fotocopia de los mismos, pero para que puedan surtir efecto, caso de ser impugnados, deben adverarse mediante copia o testimonio auténticos, o cotejo practicado, a solicitud del mismo.

ARTÍCULO 765.- Si el escrito de demanda carece de alguno de los requisitos a que se refieren los artículos precedentes, el tribunal concede un término de cinco días para su subsanación, transcurrido el cual sin haberse verificado, declara no haber lugar a admitir la demanda y dispone el archivo de las actuaciones.

ARTÍCULO 766.- Admitida la demanda, se emplaza al demandado para que se persone y conteste en el término de diez días, ajustándose en lo pertinente a lo dispuesto respecto a los requisitos formales de aquélla, en esta Ley.

El término para personarse y contestar la demanda puede ampliarse por el tribunal, a instancia de parte, hasta un máximo de veinte días, si el demandado o los demandados tienen su domicilio en territorio distinto al del tribunal que conozca del litigio, o excepcionalmente en circunstancias que lo hagan aconsejable.

El tribunal se pronuncia sobre la admisión o no de la contestación, dentro de los tres días posteriores a su presentación.

ARTÍCULO 767.- Si la contestación carece de alguno de los requisitos formales establecidos, el tribunal otorga un término de cinco días para su subsanación, transcurrido el cual, sin haberse cumplimentado, se tiene por no presentada ésta.

ARTÍCULO 768.-Si el demandado, emplazado en tiempo y forma, deja de personarse sin justa causa, apreciada libremente por el tribunal, se le tiene por conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas.

El tribunal, antes de dictar sentencia, puede disponer la práctica de las pruebas que estime indispensable sobre cuestiones de hecho que racionalmente le ofrezcan dudas, librando al efecto los mandamientos que procedan.

No obstante, el demandado puede personarse en cualquier momento posterior para ejercitar los derechos de que se estime asistido, sin que se retrotraiga el proceso.

ARTÍCULO 769.- En la contestación, el demandado puede oponer cuantas excepciones estime en su defensa, las que se resuelven, en todo caso, al dictarse sentencia, sin perjuicio de las que puedan ser resueltas en audiencia preliminar.

Puede igualmente reconvenir, en cuyo supuesto se da traslado al actor por el término de cinco días para que conteste, advertido de que debe limitarse a lo que sea objeto de la misma.

ARTÍCULO 770.- Si el debate se contrae a cuestiones de estricto derecho o a hechos cuya justificación resulta de los escritos y documentos presentados, el tribunal dictará sentencia sin más trámites.

CAPITULO V

DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR Y LA CONCILIACION

ARTÍCULO 771.- Contestada la demanda, o, en su caso la reconvencción, o vencidos los términos para hacerlo, el tribunal está facultado para realizar actuaciones de carácter preparatorio, incluida la celebración de audiencia preliminar para el saneamiento del proceso y la fijación del objeto del litigio, a cuyo efecto, dentro del término de los diez días siguientes, podrá:

- a) Incluir como demandado o demandados a quienes no aparecen como tales en la demanda; estándose en lo sucesivo a las disposiciones del artículo 765, precedente;
- b) Citar a las partes para precisar aspectos que a su juicio requieran de esclarecimiento o precisión;

- c) Exigir a las partes declaraciones, escritos y documentos suplementarios;
- d) Citar a dirigentes o funcionarios de los organismos que correspondan para facilitar documentación o información requerida en el proceso;
- e) Cualquier otra actuación indispensable, orientada a garantizar la sustanciación del proceso.

ARTÍCULO 772.- En cualquier estado del proceso, cuando el tribunal aprecie que se hace necesario o aconsejable que las partes alcancen mayor grado de comunicación al objeto de establecer, o resolver por sí mismas, algunos de los extremos asociados a las pretensiones deducidas, puede fijar un plazo prudencial para que éstas procedan a conciliar.

En su caso, a solicitud de las partes, el tribunal podrá disponer una prórroga del término concedido para la conciliación.

Dentro del término fijado por el tribunal, o de la prórroga concedida, las partes vendrán obligadas a presentar a éste informe con los resultados alcanzados en la conciliación.

ARTÍCULO 773.- Celebrada la conciliación, si las partes llegaran a acuerdo concluyente, el tribunal verificará los extremos que consten de la transacción e impartirá, en su caso, su aprobación mediante auto fundado por el cual se pondrá fin al proceso.

ARTÍCULO 774.- De no tener lugar la conciliación, o no llegarse a acuerdo en ella, el tribunal, con lo expuesto por las partes y lo deducido de las documentales aportadas, precisará y enumerará los puntos controvertidos y decidirá sobre la admisión de los elementos probatorios propuestos, citando a las partes para el día, la hora y lugar de la práctica de pruebas, dentro de los diez días hábiles siguientes de haberse efectuado la audiencia preliminar.

CAPITULO VI DE LA PRÁCTICA DE PRUEBAS

ARTÍCULO 775.- Las pruebas se proponen por las partes con los escritos de demanda y contestación, o en cualquier otro momento, con anterioridad a la comparecencia, o con posterioridad a ésta, en este último caso, sólo a solicitud del tribunal.

ARTÍCULO 776.- Las pruebas que requieren ser practicadas se llevan a efecto, a instancia de parte o de oficio, en el momento que fije el tribunal con antelación a la comparecencia o durante la misma, o en su caso posteriormente, en la oportunidad que éste lo disponga.

Salvo para aquellas que deban ser practicadas en el acto de la comparecencia, para la práctica de pruebas deberá citarse con no menos de cinco días de antelación.

ARTÍCULO 777.- Las pruebas consisten en documentos, comprendidos los electrónicos o digitales, dictámenes de peritos, reconocimiento judicial, y declaraciones de testigos o especialistas, y demás medios que se reconocen y regulan en esta Ley.

ARTÍCULO 778.- El tribunal analiza conjunta y separadamente las pruebas y las valora con objetividad y criterio racional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso sometido a su consideración.

Los hechos que el tribunal considere que han sido admitidos por las partes no necesitan de ulterior prueba en el proceso. Ninguna prueba tiene valor preestablecido.

ARTÍCULO 779.- El tribunal está en la obligación de adoptar las medidas necesarias conducentes a asegurar la protección de la información confidencial aportada al proceso.

CAPITULO VII DE LA COMPARECENCIA

ARTÍCULO 780.- Constituye facultad exclusiva del tribunal convocar la celebración de comparecencia, a la que deben concurrir las partes en litigio y las personas que con otro carácter sean citadas a la misma.

Asimismo, el tribunal queda facultado para prescindir de dicha celebración cuando considere que puede decidir el fondo del asunto controvertido sobre la base de los elementos obrantes en el expediente, y en su caso, derivados de las actuaciones preparatorias realizadas.

ARTÍCULO 781.- Comparecidas las partes, el tribunal declara abierto el acto y comprueba si persiste el litigio entre ellas.

En la comparecencia, el tribunal impone a las partes acerca de sus derechos y obligaciones, solicitando a las mismas que en su momento y por su turno, oralmente expongan de manera ordenada, clara y concisa sus alegaciones en relación con el objeto del litigio y en apoyo de sus respectivas pretensiones.

Al tribunal incumbe la dirección de la comparecencia y formular a las partes las preguntas que estime pertinentes.

ARTÍCULO 782.- En el acto de la comparecencia las partes pueden arribar a un acuerdo que ponga fin al litigio, cuya aprobación judicial mediante auto surte los efectos atribuidos a la transacción judicial.

Las partes tienen derecho a modificar las pretensiones de la demanda, de la contestación o de la reconvención en su caso, ampliando o reduciendo las mismas, en cuyo supuesto el tribunal concede un término de cinco días a la otra parte o partes, para que se pronuncien sobre las nuevas cuestiones planteadas.

ARTÍCULO 783.- Si a cualesquiera de los que hayan de acudir a una comparecencia le resulta imposible asistir a ella en el día señalado, por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, lo manifiesta de inmediato al tribunal, acreditando cumplidamente la causa o motivo y solicita nuevo señalamiento.

El tribunal procederá en consecuencia resolviendo lo pertinente y, de resultar indispensable, hará nuevo señalamiento el que se efectuará con la mayor inmediatez.

ARTÍCULO 784.- Cuando el testigo o el perito que haya sido citado a comparecencia por el tribunal, manifieste y acredite encontrarse en la misma circunstancia de imposibilidad expresada en el artículo anterior, el tribunal, si acepta la excusa, decide si deja sin efecto el señalamiento de la comparecencia y efectúa uno nuevo, o si cita al testigo o al perito para la práctica de la actuación probatoria fuera de la comparecencia señalada.

ARTÍCULO 785.- Toda suspensión que el tribunal acuerde se comunica de inmediato a las partes personadas y a quienes hayan sido citados judicialmente en calidad de testigos, peritos o en otra condición.

ARTÍCULO 786.- Sólo circunstancias excepcionales sobrevenidas durante el desarrollo de la comparecencia, pueden determinar su interrupción.

ARTÍCULO 787.- Las principales cuestiones tratadas en la comparecencia deben hacerse constar en acta, conforme se establece en el artículo 116 de la presente Ley.

ARTÍCULO 788.- Las actuaciones orales de la comparecencia, pueden registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen.

La grabación se efectúa bajo la fe del secretario, a quien corresponde la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que se haya efectuado.

En tales supuestos, el acta se limita a consignar, junto con los datos relativos al tiempo y lugar, las peticiones o propuestas de las partes y las decisiones que adopte el tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no puedan constar en aquel soporte.

ARTÍCULO 789.- El tribunal dicta sentencia, dentro del término de diez días después de concluida la comparecencia, o de practicadas las pruebas dispuestas durante la misma.

En este último caso, las partes podrán solicitar al tribunal, en la propia comparecencia en que se disponga por éste la práctica ulterior de pruebas, que se cite a las mismas a vista antes de dictar sentencia, a partir de cuya celebración decursará el plazo a que se refiere el párrafo anterior.

CAPITULO VIII DE LOS RECURSOS DE SUPLICA Y CASACION

ARTÍCULO 790.- Las resoluciones dictadas en los procesos de lo económico, pueden ser impugnadas por medio de los recursos de súplica y casación.

ARTÍCULO 791.- El recurso de súplica contra los autos o providencias que dicte el tribunal, debe ajustarse a lo establecido en los artículos 615 al 617 de esta Ley.

ARTÍCULO 792.- Procede el recurso de casación contra las siguientes resoluciones judiciales dictadas en única instancia por el tribunal:

- a) Los autos que declaran la inadmisión de la demanda, o pongan fin al proceso, agotado el recurso de súplica;
- b) Las sentencias definitivas dictadas en proceso ordinario; y

- c) Los autos resolutorios de recurso de súplica dictado en trámites de ejecución de sentencia.

ARTÍCULO 793.- El recurso de casación en esta materia se interpone y resuelve por las causales y de conformidad con lo establecido en los artículos 630 al 640 de la presente Ley.

CAPITULO IX DEL PROCESO DE REVISION

ARTÍCULO 794.- Procede la revisión, en materia de lo económico, contra las sentencias y autos definitivos firmes dictados en proceso ordinario por las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales, así como contra las sentencias dictadas en recursos de casación por la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular.

ARTÍCULO 795.- El proceso de revisión se tramita y resuelve, en lo pertinente, por las causales y de conformidad con lo establecido en los artículos 642 al 650 de la presente Ley, salvo en lo que se contrae a la participación del fiscal.

ARTÍCULO 796.- La revisión sólo puede ser promovida por quienes hayan sido parte en el proceso original.

En ningún caso puede ser llamado un tercero al proceso de revisión que no haya participado con tal carácter en el proceso original.

ARTÍCULO 797.- La revisión se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia objeto de impugnación, el cual, dentro de los cinco días posteriores a su recibo, la eleva a la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular, conjuntamente con el expediente de su razón, previa incorporación, en su caso, de los documentos que hayan sido desglosados.

ARTÍCULO 798.- El proceso de revisión no puede ser promovido después de transcurridos dos años desde la fecha de haber alcanzado firmeza la sentencia o auto que haya podido motivarla, salvo en el supuesto de prórroga a que se refiere el artículo 645 en relación con el apartado 644 de esta Ley.

CAPITULO X

DEL EMBARGO Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 799.- Todo actor, principal o reconvenional, podrá solicitar al tribunal competente la adopción de medida cautelar.

Asimismo podrá solicitar medida cautelar todo actor que lo sea en proceso de arbitraje ante corte arbitral cubana.

ARTÍCULO 800.- Es competente para conocer de la solicitud de medida cautelar el tribunal que lo sea para conocer de la demanda principal, salvo en caso de proceso de arbitraje ante la corte arbitral cubana, en que lo será el tribunal del domicilio del demandado.

ARTÍCULO 801.- La medida cautelar podrá solicitarse antes de o al interponer la demanda principal, o en cualquier momento posterior durante el proceso.

Cuando la medida cautelar sea solicitada y adoptada antes de la presentación de la demanda principal, la parte actora vendrá obligada a presentar la misma o, en su caso, a acreditar su presentación, dentro de los treinta días siguientes al de su solicitud.

ARTÍCULO 802.- El tribunal competente que conoce de la solicitud de medida cautelar podrá condicionar su otorgamiento a la prestación de fianza o caución, cuyo monto se fijará en relación con el efecto de la medida solicitada.

Artículo 803.- El tribunal podrá acordar como medida cautelar, entre otras, las siguientes:

- a) El embargo preventivo de bienes;
- b) El secuestro de bienes en litigio;
- c) La anotación preventiva en registro público;
- d) El depósito temporal de bienes;
- e) El aseguramiento de medios probatorios;
- f) La suspensión o abstención de actividad o conducta determinada;
- g) Cualquier otra medida orientada a garantizar la eficacia del proceso.

ARTÍCULO 804.- Procederá la adopción de medida cautelar cuando concurren circunstancias, debidamente acreditadas, que evidencien el riesgo cierto de daño irreparable para la parte actora de no adoptarse la misma. En caso de

corresponder al aseguramiento de obligaciones de pago, deberá presentarse, además, prueba documental de la que pueda inferirse la existencia cierta y actual de la deuda.

No obstante, para su decisión, el tribunal deberá valorar, en cualquier caso, los eventuales perjuicios que ello pueda suponer para el demandado, o terceros, así como la conducta previa de las partes.

ARTÍCULO 805.- El tribunal que conozca de la solicitud de medida cautelar, dará traslado de la misma por tres días a la parte demandada, contados a partir de su notificación y citará a las partes a vista para dentro de los diez días siguientes a su solicitud, en las que éstas serán oídas y re-suelto, sin más trámite, lo que en derecho proceda.

No obstante, cuando concurren razones de urgencia u otra que así lo justifique, la parte actora podrá solicitar del tribunal la adopción directa de la medida cautelar con antelación a la vista.

ARTÍCULO 806.- La medida cautelar, una vez dispuesta, podrá ser sustituida, modificada o revocada, a instancia de cualquiera de las partes, cuando hayan variado o cesado las circunstancias que determinaron su adopción, con sujeción al procedimiento a que se contrae el artículo anterior.

En su defecto, la medida cautelar se mantendrá hasta la terminación del proceso principal.

En caso de dictarse resolución judicial estimatoria de la pretensión objeto de aseguramiento, y ser requerida su ejecución, la medida cautelar se mantendrá como parte del proceso ejecutivo a que dé lugar.

ARTÍCULO 807.- Podrán ser objeto de embargo o medida cautelar, toda clase de bienes y derechos, con excepción de aquellos a que se contrae el artículo 463 de la presente Ley.

No obstante, en el caso de que la medida cautelar solicitada tenga por objeto el embargo de instrumentos o medios de trabajo de una sociedad mercantil, o vehículos destinados a la actividad empresarial de la misma, éstos no se reputarán comprendidos en las excepciones a que se refieren los apartados 4 y 5 del referido precepto legal.

Sin perjuicio de ello, al decretar el embargo de los bienes a que se contrae el párrafo anterior, el tribunal podrá valorar, a instancia de parte, la posibilidad de disponerlo sin privar de su uso a la entidad titular de los mismos.

ARTÍCULO 808.- Dispuesto el embargo o medida cautelar, se procederá a su ejecución en la forma que corresponda, atendiendo a la naturaleza de los bienes objeto del mismo, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 464 y siguientes de la presente Ley.

Si se tratare de recursos monetarios en cuenta bancaria, se librára oficio al banco ordenando retención temporal por el monto correspondiente. Si estos resultaran insuficientes, y así fuera instado por la parte actora, el tribunal podrá disponer las medidas correspondientes respecto a los créditos que tenga la parte deudora en relación con terceros.

ARTÍCULO 809.- No se llevará a efecto el embargo si la parte en cuyo perjuicio se haya dispuesto o pretenda disponer, pagare, consignare o constituyere fianza bastante para responder de la suma pretendida.

De igual modo se dejará sin efecto el embargo en cualquier momento posterior en que dicha parte proceda a ello.

ARTÍCULO 810.- Si al practicar el embargo o medida cautelar se comprendiesen en la diligencia o acto otros bienes distintos a los dispuestos, el tribunal deberá subsanar esta extralimitación tan pronto lo advierta y dispondrá en el acto, de oficio o a instancia de parte, y sin audiencia de nadie, que se excluyan de la diligencia los indebidamente comprendidos, librando a dicho objeto cuantos mandamientos se requieran. El recurso de súplica en este caso carecerá de efectos suspensivos.

CAPITULO XI DEL EMBARGO DE BUQUES

ARTÍCULO 811.- Los buques o embarcaciones, surtos en puertos cubanos, pueden ser objeto de embargo preventivo, siempre que tenga por fundamento la existencia de un crédito marítimo.

Se exceptúan las naves de guerra, nacionales o extranjeras, y cualquier nave

afecta al servicio de un Estado, salvo que las mismas efectúen actividades propias del comercio marítimo.

ARTÍCULO 812.- Por el embargo de buque o embarcación se entiende la retención de éstos en puerto, por disposición judicial, para asegurar el pago de créditos marítimos.

ARTÍCULO 813.- Por crédito marítimo se entiende la alegación de un derecho o de un crédito que tenga por causa:

- a) Daños causados por un buque, ya sea por abordaje, ya de otro modo;
- b) Pérdida de vidas humanas o daños corporales causados por un buque o provenientes de la explotación de un buque;
- c) Asistencia o salvamento;
- d) Contratos relativos a la utilización o al arriendo de un buque mediante póliza de fletamento o de otro modo;
- e) Contratos relativos al transporte de mercancía por un buque en virtud de una póliza de fletamento, de un conocimiento o de otra forma;
- f) Pérdidas o daños causados a las mercancías y equipajes transportados por un buque;
- g) Avería común;
- h) Préstamo a la gruesa;
- i) Remolque;
- j) Pilotaje;
- k) Suministro de productos o de materiales hechos a un buque para su explotación o su conservación, cualquiera que sea el lugar de los mismos;
- l) Construcción, reparaciones, equipamiento de un buque o gastos de puerto;
- m) Salarios del capitán, oficialidad o tripulación;
- n) Desembolsos del capitán y los efectuados por los cargadores, los fletadores o los agentes por cuenta del buque o de su propietario;
- o) La propiedad impugnada de un buque;
- p) La copropiedad impugnada de un buque o su posesión, o su explotación, o los derechos a los productos de explotación de un buque para la ejecución de un título;
- q) Cualquier hipoteca naval.

ARTÍCULO 814.- La medida en cuya virtud se dispone el embargo preventivo de un buque o embarcación por la autoridad judicial competente, se adopta mediante resolución dictada al efecto que se notifica a la Capitanía del Puerto

correspondiente, así como al capitán o patrón en su caso.

Cuando la medida de embargo recae sobre un buque o embarcación extranjera, se informa al representante consular del país de abanderamiento, si existiera, así como al agente naviero del buque o agente de protección.

ARTÍCULO 815.- El tribunal que decrete el embargo, debe exigir del demandante fianza o caución para responder de los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida.

Para la fijación de su importe el tribunal tomará en consideración el monto de la suma adeudada.

ARTÍCULO 816.- La parte que haya solicitado el embargo, debe presentar las pruebas indiciarias que acrediten la legitimidad de su derecho, sin perjuicio de su obligación de interponer la correspondiente demanda judicial dentro de los treinta días siguientes de haberse efectuado el mismo; o, de haberse ejercitado las acciones en los casos en que conste como pacto expreso de las partes el sometimiento del conflicto a jurisdicción extranjera o arbitral, lo cual deberá ser acreditado por la parte actora dentro del propio plazo, sujeto a los mismos efectos en caso de no presentación, en defecto de lo cual el embargo queda sin efecto alguno.

ARTÍCULO 817.- El tribunal que decrete el embargo notifica la medida a las partes concernidas y, previa coordinación con el Ministerio del Transporte, designa la entidad encargada del depósito judicial del buque o embarcación, la cual debe proceder a la determinación del lugar en que quedará constituido el referido depósito y a la adopción de las medidas de seguridad que procedan, informando al tribunal sobre estos extremos.

Artículo 818.- La entidad designada como depositario, en adición a las obligaciones generales en su condición de tal, tendrá las de:

- a) Cuidar de la conservación del buque o embarcación objeto del embargo;
- b) Velar porque se lleve a cabo, en su caso, la repatriación de los oficiales y tripulantes que así lo exijan, garantizando el mantenimiento a bordo de la dotación mínima de seguridad;
- c) Tramitar con la Capitanía del Puerto las autorizaciones para los movimientos y las maniobras de seguridad del buque;

- d) Contratar los seguros que estime convenientes para la protección de la nave;
- e) Rendir cuenta periódicamente de su gestión al tribunal.

Artículo 819.- Lo dispuesto en los artículos que anteceden resulta de aplicación, en lo atinente, al embargo de aeronaves en aeropuertos de la República de Cuba.

CAPITULO XII

DE LA EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES

ARTÍCULO 820.- La parte favorecida por laudo arbitral dictado por corte de arbitraje cubana o en proceso arbitral internacional realizado en Cuba, podrá solicitar su ejecución ante la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular correspondiente al domicilio de la parte que venga obligada a su cumplimiento.

ARTÍCULO 821.- La solicitud de ejecución de laudo arbitral dictado en Cuba podrá presentarse dentro del año contado a partir de su firmeza.

Se entiende que un laudo arbitral es firme y ejecutorio, transcurridos los diez días de su notificación sin que haya sido solicitada su nulidad por la parte obligada por el mismo, o, una vez desestimada ésta por el tribunal competente.

ARTÍCULO 822.- A la solicitud de ejecución de laudo arbitral deberá acompañarse copia certificada del mismo y, en su caso, de la sentencia desestimatoria de su nulidad.

ARTÍCULO 823.- A los efectos de su ejecución, los laudos arbitrales se equiparan a sentencia judicial, siguiéndose la vía de apremio correspondiente.

Igual tratamiento recaerá sobre los autos dictados en proceso arbitral aprobando una transacción.

ARTÍCULO 824.- En los casos de laudo arbitral dictado en el extranjero, cuya ejecución se pretenda realizar en territorio nacional, se requerirá del reconocimiento previo concedido por la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular.

CAPITULO XIII

DE LA DECLARACION DE NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL

Artículo 825.- La solicitud de declaración de nulidad de laudo arbitral dictado por corte arbitral cubana o en arbitraje internacional celebrado en Cuba, se presentará ante la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular dentro de los diez días siguientes al de su notificación y por las siguientes causales:

- a) Invalidez del acuerdo arbitral o incapacidad de obrar de las partes;
- b) Violación en la constitución del tribunal arbitral o en la notificación de su nombramiento;
- c) Violación en el procedimiento que determine la imposibilidad de la parte de presentar y hacer valer sus alegaciones; y
- d) Estar referido el laudo a controversia que no haya sido o pueda ser objeto del acuerdo arbitral o exceder de los términos del mismo.

ARTÍCULO 826.- Con la presentación de la solicitud se acompañará copia certificada del laudo cuya nulidad se propone.

ARTÍCULO 827.- La parte que solicite la nulidad de un laudo arbitral podrá solicitar que el tribunal disponga la suspensión de su cumplimiento.

El tribunal resolverá por auto sobre la suspensión de la ejecución del laudo arbitral cuya nulidad se solicita, dentro de los tres días siguientes, pudiendo requerir de la parte promovente la caución previa que estime necesaria.

ARTÍCULO 828.- Apreciada la nulidad del laudo arbitral, el tribunal se limitará a disponer ésta por sentencia.

La sentencia disponiendo la nulidad del laudo arbitral es definitiva y contra la misma no cabe recurso ni proceso de revisión.

CAPITULO XIV

DE LA SENTENCIA EN PROCESO MEDIOAMBIENTAL

ARTÍCULO 829.- La sentencia que se dicte en proceso referido a daño al medio ambiente, no causa estado de cosa juzgada, quedando legitimado el perjudicado para ejercitar nuevas acciones reclamatorias por la continuidad de los efectos del mismo evento dañoso que haya dado lugar a la misma.

ARTICULO 4.- Se modifica el nombre de la Ley No. 7 “De Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral”, de 19 de agosto de 1977, que se denomina en lo sucesivo “Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico”.

ARTICULO 5.- Adicionar a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico las Disposiciones Especiales siguientes:

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: Los procesos de lo económico, en todo cuanto no esté previsto y regulado expresamente en la Cuarta Parte de esta Ley, se regirán con carácter supletorio por las disposiciones relativas al proceso civil en la forma que resulten de aplicación.

SEGUNDA: En lo relativo a procesos sobre daños al medio ambiente y los recursos naturales, en los cuales aparezcan como parte actora la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, o el Ministerio de la Agricultura, el tribunal que conozca del litigio puede disponer el ingreso de la indemnización que resulte al Presupuesto Central del Estado.

TERCERA: Los dirigentes y funcionarios de los órganos y organismos del Estado y de organizaciones empresariales y presupuestadas, vienen obligados a responder oportunamente las solicitudes que reciban de las salas de justicia de los tribunales populares en relación con la elaboración de dictámenes, remisión de documentos, informaciones o asistencia a actos judiciales.

CUARTA: Se faculta al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para establecer y regular lo que corresponda en relación con la cuantía mínima exigible para presentar las demandas de contenido patrimonial ante las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Los procesos que estén conociendo en la actualidad las respectivas Salas de lo Económico de los Tribunales Populares al amparo del procedimiento anterior, conservan toda su validez, pero los efectos posteriores a la vigencia de este Decreto-Ley se rigen por sus disposiciones.

SEGUNDA: Los procesos en materia civil que se encuentran en tramitación en los diferentes tribunales de este orden, atendiendo a la competencia que les atribuyen los preceptos que por el presente Decreto-Ley se modifican, se continuarán conociendo por los mismos hasta su resolución definitiva.

TERCERA: Los recursos de casación relacionados con los procesos civiles a que este cuerpo legal se contrae, y que al momento de su entrada en vigor están pendientes en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Popular, seguirán su tramitación hasta su culminación, sin perjuicio de las modificaciones que por el presente Decreto-Ley se establecen.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se derogan:

1. El Decreto número 89, “Reglas de Procedimiento de Arbitraje Estatal”, de 21 de mayo de 1981;
2. El Decreto número 119, “Reglas para determinar la competencia de los Órganos de Arbitraje Estatal”, de 29 de septiembre de 1983;
3. El Decreto-Ley número 129, “De Extinción del sistema de Arbitraje Estatal”, de 19 de agosto de 1991;
4. El Decreto-Ley número 223, “De la Jurisdicción y Competencia de las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares”, de 15 de agosto de 2001;
5. Cuantas disposiciones legales de igual o inferior jerarquía se opongan expresa o tácitamente al cumplimiento de lo establecido en este Decreto-Ley.

SEGUNDA: Se faculta al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para dictar cuantas disposiciones complementarias sean necesarias a los fines de garantizar el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto-Ley.

TERCERA: El presente Decreto-Ley entrará en vigor a los treinta días posteriores al de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los veintiséis días del mes de septiembre de 2006.

Raúl Castro Ruz

Primer Vicepresidente del Consejo de Estado

**DATOS DE PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CUBA DE LA LEGISLACION INCLUIDA EN EL
COMPENDIO "LEGISLACION AMBIENTAL CUBANA RELACIONADA CON EL MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRA".**

No.	DISPOSICIÓN JURÍDICA	PUBLICACION EN GACETA		CLASIFICACION DE LA GACETA	FECHA DE PUBLICACIÓN	NUMERO DE GACETA
DECRETOS-LEYES						
1.	Decreto-Ley 136 "Del Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre"	X		Ordinaria	2/03/1993	2
2.	Decreto-Ley 137 "De la Medicina Veterinaria"	X		Ordinaria	6/04/1992	6
3.	Decreto-Ley 138 "De las Aguas Terrestres"	X		Ordinaria	2/07/1993	9
4.	Decreto-Ley 153 "De las Regulaciones de la Sanidad Vegetal"	X		Ordinaria	12/09/1994	11
5.	Decreto-Ley 164 "Reglamento de Pesca"	X		Ordinaria	22/07/1996	26
6.	Decreto-Ley 170 "Del Sistema de Medidas de la Defensa Civil"	X		Ordinaria	19/05/1997	16
7.	Decreto-Ley 190 "De la Seguridad Biológica"	X		Ordinaria	15/02/1999	7
8.	Decreto-Ley 200 "Contravenciones en Materia de Medio Ambiente"	X		Ordinaria	23/12/1999	83
9.	Decreto-Ley 201 "Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas"	X		Ordinaria	24/12/1999	84
10.	Decreto-Ley 212 "Gestión de la Zona Costera"	X		Ordinaria	14/08/2000	68
11.	Decreto-Ley 241 "Modificativo de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral"	X		Extraordinaria	27/09/2006	33

¹ Para la compilación de estas disposiciones jurídicas se ha consultado la Multimedia "Derecho Ambiental Cubano" (CIGEA, 2006), así como a especialistas del Ministerio de la Agricultura, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, del Ministerio de Finanzas y Precios, del Instituto Nacional de Recursos Hídricos y del Instituto de Planificación Física.

DISPOSICIONES JURÍDICAS INCLUIDAS EN EL COMPENDIO “LEGISLACIÓN AMBIENTAL CUBANA RELACIONADA CON EL MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRA”, ORGANIZADAS POR ESFERAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Aguas terrestres	Artículos del 92 al 98 de la Ley 81 “Del Medio Ambiente”	Decreto-Ley 138 “De las Aguas Terrestres”	Decreto 199 “Contravenciones de las Regulaciones para la Protección y Uso Racional de los Recursos Hidráulicos”.	Resolución 45/1991 del INRH “Índices de Consumo de Agua para el Sector de la Economía no Agrícola”
	Artículo 27 y artículo 35, incisos a) y g) de la Ley 85 “Ley Forestal”	Artículo 2 y artículos del 47 al 50 del Decreto-Ley 201 “Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”	Artículo 6, inciso j) del Decreto 268 “Contravenciones de las Regulaciones Forestales”	Resolución 21/1999 del INRH “Normas Totales Netas y Coeficientes de Eficiencia para la Determinación de las Normas Brutas de los Principales Cultivos Agrícolas”
	Artículos 111 y 117, inciso a) de la Ley 75 “De la Defensa Nacional”	Decreto-Ley 170 “Del Sistema de Medidas de la Defensa Civil”		Resolución 24/1999 del INRH “Aprueba el Gasto Sanitario o Ecológico de los Cursos Naturales de Agua Interrumpidos por Presas”
	Artículo 65 de la Ley 41 “Ley de Salud Pública”			Artículos del 38 al 43 de la Resolución 330/1999 del MINAG “Reglamento de la Ley Forestal”
				Resolución 28/2006 del INRH “Establece la Norma de Consumo de los Equipos, Accesorios y Muebles Hidrosanitarios mayores consumidores de agua”.

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
	Artículos del 106 al 109 y del 132 al 134 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"	Artículos 15 al 30 del Decreto-Ley 138 "De las Aguas Terrestres"	Decreto 179 "Protección, Uso y Conservación de los Suelos y sus Contravenciones"	Resolución 190/2004 del MINAG "Aprueba el Reglamento para la Organización, Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego y Drenaje".
Suelo	Artículo 27 y artículo 35, incisos b), c), h), i) y j) de la Ley 85 "Ley Forestal"	Artículo 2 y artículos del 47 al 50 del Decreto-Ley 201 "Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas"	Artículo 6, inciso j) del Decreto 268 "Contravenciones de las Regulaciones Forestales"	Artículos del 38 al 43 de la Resolución 330/1999 del MINAG "Reglamento de la Ley Forestal"
	Artículo 65 de la Ley 41 "Ley de Salud Pública"			

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
	Artículos del 112 al 115 y artículo 105 de la ley 81 "Del Medio Ambiente"	Artículo 6, apartado 1, inciso c) del Decreto-Ley 212 "Gestión de la Zona Costera"	Decreto 268 "Contravenciones de las Regulaciones Forestales"	Resolución 330/1999 del MINAG "Reglamento de la Ley Forestal"
Patrimonio forestal	Ley 85 "Ley Forestal"	Artículo 9, inciso k) del Decreto-Ley 200 "Contravenciones en materia de Medio Ambiente"	Decreto 280 "Sobre las Comisiones del Plan Turquino Manatí, Sistema de Reforestación y Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas"	Resolución 87/1996 del CIT-MA "Reglamento para el Cumplimiento de los Compromisos Contradidos por la República de Cuba en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre"
	Artículos 111 y 117, inciso b) de la Ley 75 "De la Defensa Nacional"	Artículo 28, inciso i) del Decreto-Ley 138 "De las Aguas Terrestres"		Resolución 111/1996 del CIT-MA "Regulaciones sobre la Diversidad Biológica"
		Artículo 2 y artículos del 47 al 50 del Decreto-Ley 201 "Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas"		Resolución 50/1996 del MFP "Establece normas para la aplicación del Impuesto sobre la Utilización o Explotación de los Recursos Naturales y para la Protección del Medio Ambiente, en lo concerniente a la explotación y conservación de los recursos forestales y la fauna silvestre"
		Decreto-Ley 170 "Del Sistema de Medidas de la Defensa Civil"		Resolución 50/2000 del MFP "Modificativa del Apartado Sexto de la Resolución 50/1996 del MFP"

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Patrimonio forestal				Resolución Conjunta 1/2000 del MFP-MEP "Crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal"
				Resolución 274/2001 del MFP "Establece el Pago del Impuesto Forestal en la Modalidad en que Opera el Sujeto Pasivo"
				Resolución 380/2001 del MFP "Establece las Formas de Pago para las personas naturales y Jurídicas que cambien el uso de los suelos agrícolas, o forestales con fines mineros, geológicos, industriales, constructivos u otros"

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Recurso minerales	Artículos 28, inciso e) y artículos del 120 al 124 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"	Artículo 15 del Decreto-Ley 138 "De las Aguas Terrestres"	Decreto 222 "Reglamento de la Ley de Minas"	Artículo 6, inciso e) de la Resolución 77/1999 del CITMA
	Ley 76 "Ley de Minas"	Artículo 16, inciso b) del Decreto-Ley 212 "Gestión de la Zona Costera"	Artículo 6, inciso j) del Decreto 268 "Contravenciones de las Regulaciones Forestales"	"Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental"
	Artículo 35, inciso c) de la ley 85 "Ley Forestal"	Artículo 9, inciso e) del Decreto-Ley 200 "Contravenciones en materia de Medio Ambiente"		Resolución 51/1997 del MFP
	Artículos 60 al 68, de la Ley 41 "Ley de Salud Pública"	Artículo 25 del Decreto-Ley 138 "De las Aguas Terrestres"		"Normas para la Aplicación del Impuesto sobre la Utilización o Explotación de los Recursos Naturales en la Actividad Minera"
		Artículo 2 y artículos del 47 al 50 del Decreto-Ley 201 "Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas"		Resolución 380/2001 del MFP

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Recursos pesqueros	Artículos del 99 al 105 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"	Decreto-Ley 164 "Reglamento de Pesca" Artículo 2 y artículos del 47 al 50 del Decreto-Ley 201 "Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas"		Resolución 87/1996 del CIT-MA "Reglamento para el Cumplimiento de los Compromisos Contraídos por la República de Cuba en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre" Resolución 111/1996 del CIT-MA "Regulaciones sobre la Diversidad Biológica"

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Sanidad vegetal	Artículos del 132 al 134 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"	Decreto-Ley 153 "De la Sanidad Vegetal"	Decreto 169 "Contravenciones de las Regulaciones sobre Sanidad Vegetal"	Resolución 434/1994 del MI-NAG "Reglamento para la Exportación de Plantas y demás Materiales Subcuarentenados"
	Artículos 52 y 53 de la Ley 85 "Ley Forestal"	Decreto-Ley 170 "Del Sistema de Medidas de la Defensa Civil"	Artículo 10, incisos a) y b) del Decreto 268 "Contravenciones de las Regulaciones Forestales"	Resolución 435/1994 del MI-NAG "Reglamento para la Importación de Plantas, Partes de Plantas, Producción de Origen Vegetal y otros Productos Susceptibles de causar perjuicios al Estado Fitosanitario de las Plantas"
	Artículos 111 y 117, inciso b) de la Ley 75 "De la Defensa Nacional"			Resolución 441/1996 del MI-NAG "Objetos de Cuarentena Vegetal de la República de Cuba"
				Artículos 112 al 118 de la Resolución 330/1999 del MINAG "Reglamento de la Ley Forestal"
				Resolución 23/2000 del MI-NAG "Procedimiento para el Manejo de Determinados Plantaciones"
				Resolución 38/2006 del CIT-MA "Establece la Lista Oficial de Agentes Biológicos que afectan al Hombre, Animales y Plantas"

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Medicina veterinaria	Artículos del 132 al 134 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"	Decreto-Ley 137 "De la Medicina Veterinaria"	Decreto 110 "Reglamento para la Protección del Ganado Porcino"	Resolución 38/2006 del CIT-MA "Establece la Lista Oficial de Agentes Biológicos que afectan al Hombre, Animales y Plantas"
	Artículos 111 y 117, inciso a) de la Ley 75 "De la Defensa Nacional"	Artículos del 46 al 49 del Decreto-Ley 164 "Reglamento de Pesca"	Decreto 181 "Contravenciones de las Regulaciones sobre Medicina Veterinaria"	
	Artículos 62 y 65 de la Ley 41 "Ley de Salud Pública"	Decreto-Ley 170 "Del Sistema de Medidas de la Defensa Civil"		
Flora y fauna silvestre	Artículos del 84 al 88 y del 116 al 117 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"	Decreto-Ley 136 "Del Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre" ¹	Decreto 180 "Regulaciones sobre el Patrimonio Forestal y la Fauna Silvestre" ²	Resolución 87/1996 del CIT-MA "Reglamento para el Cumplimiento de los Compromisos Contraídos por la República de Cuba en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre"
		Artículo 6, apartado 1, inciso c) del Decreto-Ley 212 "Gestión de la Zona Costera"	Artículo 1, apartados 5, 6, 7 y 8 del Decreto 207 "Infracciones Administrativas Aduaneras"	Resolución 111/1996 del CIT-MA "Regulaciones sobre la Diversidad Biológica"
		Artículo 8 y artículo 9, inciso k) del Decreto-Ley 200 "Contravenciones en materia de Medio Ambiente"		Resolución 50/1996 del MFP "Establece normas
		Artículo 2 y artículos del 47 al 50 del Decreto-Ley 201 "Del Sistema		

¹ Vigente sólo en materia de fauna silvestre pues fue derogado por la Ley 85 "Ley Forestal", en relación a la flora silvestre.

² Vigente sólo en materia de fauna silvestre pues fue derogado por el Decreto 268 "Contravenciones de las Regulaciones Forestales", en relación a la flora silvestre.

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Calidad de las semillas	Artículos del 132 al 134 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente" Artículo 54 de la Ley 85 "Ley Forestal"		Decreto 175 "Regulaciones sobre Calidad de las Semillas y sus Contravenciones"	
Recursos melíferos	Artículos del 132 al 134 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"		Decreto 176 "Protección a la Apicultura y a los Recursos Melíferos"	
Seguridad biológica	Artículo 86 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"	Decreto-Ley 190 "De la Seguridad Biológica" Decreto-Ley 200 "Contravenciones en materia de Medio Ambiente"		Resolución 38/2006 del CIT-MA "Establece la Lista Oficial de Agentes Biológicos, que afectan al Hombre, Animales y Plantas" Resolución 180/2007 del CIT-MA "Reglamento para el Otorragamiento de las Autorizaciones de Seguridad Biológica" Artículos del 121 al 124 de la Resolución 330/1999 del MINAGRI "Reglamento de la Ley Forestal"

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Ordenamiento territorial y proceso inversionista	<p>Artículos del 21 al 23 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"</p> <p>Artículos del 54 al 56 de la Ley 77 "De la Inversión Extranjera"</p> <p>Artículo 65 de la Ley 41 "Ley de Salud Pública"</p>	<p>Artículo 2 y artículos del 47 al 50 del Decreto-Ley 201 "Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas"</p>	<p>Decreto 21 "Sobre la Planificación Física"</p> <p>Decreto 272 "De las Contravenciones en materia de Ordenamiento Territorial y Urbanismo"</p>	<p>Resolución 91/2006 del MEP" Indicaciones para el Proceso Inversionista"</p> <p>Resolución 13/1998 del CIT-MA "Establece los Requisitos Básicos para la Fundamentación, Evaluación y Dictamen de la Transferencia de Tecnología asociada con los Proyectos de Inversión Nominales propuestos en los Estudios de Factibilidad"</p> <p>Resolución 126/2007 del CIT-MA "Procedimiento para la Evaluación de los Estudios de Factibilidad de las Inversiones vinculadas a las esferas de la Ciencia, la Tecnología y Medio Ambiente que son presentadas por los Organismos de la Administración Central del Estado al Ministerio de Economía y Planificación"</p>

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Solución de conflictos por la vía civil y penal ³	Artículos 81, 82, 83 y 86, inciso f) Ley 59 "Código Civil"	Decreto-Ley 241 "Modificativo de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral"		
	Artículos 194, 237, 238, 239, 241 y 242 de la Ley 62 "Código Penal"			
Regulación económica	Artículos del 61 al 66 de la Ley 81 "Del Medio Ambiente"		Artículos del 87 al 90 del Decreto 222 "Reglamento de la Ley de Minas"	Resolución 51/1997 del MFP "Normas para la aplicación del Impuesto sobre la Utilización o Explotación de los Recursos Naturales en la Actividad Minera"
	Artículos del 50 al 52 de la Ley 73 "Ley del Sistema Tributario"			Resolución Conjunta 1/1999 del MFP-MEP "Fondo Nacional de Medio Ambiente"
	Artículos 12 al 14 de la Ley 85 "Ley Forestal"			Resolución 13/1999 del MFP
	Artículo 41, inciso I) y artículos del 75 al 83 de la Ley 76 "Ley de Minas"			"Bonificación del Arancel de Aduanas para las Importaciones de Tratamiento de Residuales que Reduzcan la Carga Contaminante"

³ La solución de conflictos ambientales mediante el acceso a la justicia puede proceder por la vía administrativa, civil y penal, no obstante, en este caso se precisa sólo la legislación aplicable a las vías civil y penal, teniendo en cuenta que la vía administrativa es la que se establece en cada una de las disposiciones jurídicas que regulan la responsabilidad administrativa ambiental, ya sea de forma holística, como es el Decreto-Ley 200 "De Contravenciones en materia de Medio Ambiente", de relevancia ambiental sectorial, como es el Decreto 268 "Contravenciones de las Regulaciones Forestales", o relevancia ambiental casual como el Decreto 207 "Infracciones Administrativas Aduaneras", disposiciones jurídicas que también se incluyen en el compendio pero que, a los efectos de este anexo, se incluyen en cada una de las esferas específicas de protección del medio ambiente. También es importante precisar que, aunque en nuestro país la legislación penal no tiene instituido la figura del delito ecológico, ciertamente algunos tipos penales inciden en la protección del medio ambiente, aunque en tales casos el objeto de tutela jurídico penal sea la Seguridad Colectiva o la Economía Nacional.

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Regulación económica				Resolución Conjunta 1/2000 del MFP-MEP "Crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal"
				Resolución 50/2000 del MFP "Modificativa del Apartado Sexto de la Resolución 50/1996 del MFP"
				Resolución 69/2000 del CITMA "Procedimiento para la Certificación de las Bonificaciones Arancelarias a las que se refiere la Resolución 13/1999 del MFP, a Tecnologías para el Control y Tratamiento de Residuales y Emisiones"
				Resolución 274/2001 del MFP "Establece el Pago del Impuesto Forestal en la Moneda en que Opera el Sujeto Pasivo"

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Regulación económica				Resolución 380/2001 del MFP "Establece las Formas de Pago para las personas naturales y Jurídicas que cambien el uso de los suelos agrícolas o forestales con fines mineros, geológicos, industriales, constructivos u otros"
				Resolución 99/2002 del CITMA "Normas de Funcionamiento del Fondo Nacional de Medio Ambiente"
				Resolución Conjunta 11/2006 MEP-MFP "Modifica la Resolución Conjunta 1/1999 del MEP-MFP sobre el Fondo Nacional de Medio Ambiente"
				Resolución Conjunta MFP-MEP 1/2008 "Sobre el Fondo Nacional de Medio Ambiente"

Esfera Específica de Protección del Medio Ambiente	Ley	Decreto-Ley	Decreto	Resolución
Sistemas de Reconocimiento Ambiental (Reconocimiento Ambiental Nacional, Premio Nacional de Medio Ambiente y Reconocimiento para la Protección de la Capa de Ozono)				<p>Resolución 114/2003 del CIT-MA "Sistema Nacional de Reconocimiento para la Protección de la Capa de Ozono"</p> <p>Resolución 135/2004 del CIT-MA "Sistema Nacional de Reconocimiento Ambiental"</p> <p>Resolución 22/2006 del CIT-MA "Establece el Procedimiento para el Otorgamiento del Premio Nacional de Medio Ambiente"</p> <p>Resolución 151/2007 del CIT-MA "Normativas sobre Entrega y Uso del Sello Distintivo "Reconocimiento Ambiental Nacional"</p> <p>Resolución 206/2008 del CIT-MA "Modifica en Anexo I de la Resolución 22/2006 del CIT-MA Sobre el Premio Nacional de Medio Ambiente"</p>

ACRÓNIMOS

CIGEA	Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental
CITMA	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
CPP	Country Programme Partnership (Programa de Asociación de País)
EAN	Estrategia Ambiental Nacional
FAO	Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FMAM	Fondo de Medio Ambiente Mundial
GEF	Global Environment Fund (Fondo de Medio Ambiente Mundial)
GEO	Global Environment Outlook (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial)
INRH	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
MEP	Ministerio de Economía y Planificación
MFP	Ministerio de Finanzas y Precios
MINAG	Ministerio de la Agricultura
MST	Manejo Sostenible de Tierra
NC	Norma Cubana
PAN	Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía
PDF-B	Project Development Fund-B (Fondo para el Desarrollo del Proyecto-B)
PNUD	Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente